



EN LO PRINCIPAL: Formula acusación constitucional en contra del Ministro de Desarrollo Social y Familia, Kenneth Giorgio Jackson Drago; **PRIMER OTROSÍ**: Acompaña documentos; **SEGUNDO OTROSÍ**: Solicita medidas probatorias que indica; **TERCER OTROSÍ**: Solicita lo que indica; **CUARTO OTROSÍ**: Téngase presente.

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE

José Carlos Meza Pereira, cédula nacional de identidad número 16.577.120-6; **Luis Fernando Sánchez Ossa** cédula nacional de identidad número 16.964.611-2; **Chiara Barchiesi Chávez**, cédula nacional de identidad 19.489.621-2; **Cristóbal Urruticoechea Ríos**, cédula nacional de identidad 12.855.109-3; **Mauricio Ojeda Rebolledo**, cédula nacional de identidad 15.256.333-7; **Agustín Romero Leiva**, cédula nacional de identidad 12.720.170-6; **Leonidas Romero Saéz**, cédula nacional de identidad 7.210.203-7; **Stephan Schubert Rubio**, cédula nacional de identidad 13.471.731-9; **Harry Jürgensen Rundshagen**, cédula nacional de identidad 8.300.590-3 y **Johannes Maximilian Kaiser Barents-Von Hohenhagen**, cédula nacional de identidad número 18.394.059-7, todos Honorables Diputados de la República, domiciliados para todos los efectos en el Congreso Nacional de Chile, ubicado en Avenida Pedro Montt sin número, a la Honorable Cámara de Diputados respetuosamente decimos:

Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 52 N° 2 letra b) de la Constitución Política de la República de Chile, en relación con el artículo 37 y siguientes de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y los artículos 329 y siguientes del Reglamento de la Cámara de Diputados, venimos en deducir acusación constitucional en contra del Ministro de Desarrollo Social y Familia, **Kenneth Giorgio Jackson Drago**, cédula nacional de identidad 16.574.017-3, por infringir la Constitución y las leyes, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación procedemos a exponer:

PRÓLOGO

ABUSO DE AUTORIDAD MINISTERIAL

“El poder radica en mi miedo; ya no tengo miedo, tú ya no tienes poder”, es la frase que Séneca le habría dicho a Nerón, reflejando de qué manera el poder muchas veces se impone a través del miedo y sólo cuando alguien se libera de ese miedo, el poder decae y florece la libertad.

El argumento central de esta acusación constitucional, de naturaleza jurídico-política, es precisamente **el abuso de autoridad y de poder**, reflejado en un Ministro de Estado que, por su cercanía con el Presidente de la República y su aparente inamovilidad, traspasó los límites de su propia autoridad, vulnerando así la Constitución Política de la República y la legislación vigente, dejándola también sin aplicación e incumpliendo los deberes mínimos de probidad, supervigilancia y debido cuidado en el ejercicio de su cargo.

En contraste, la ex Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo Jeldes, aparece como la víctima de una operación política que, materializada

mediante al abuso de poder y buscando infundir miedo, buscaba borrarla del mapa de la Administración Pública, simplemente por no seguir el guión político oficial. Fue precisamente la valentía de la ex Seremi, Hidalgo Jeldres, que la hizo perder el miedo y salir a contar su versión, lo que desencadenó una serie de actos, hitos y declaraciones, que ratifican el actuar abusivo del Ministro Giorgio Jackson y su desapego, en la forma y en el fondo, con el estándar ético, jurídico y moral que deben observar los Ministros de Estado.

El mismo Giorgio Jackson que, no hace mucho, afirmaba que su: *“escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”* hoy, una vez expuestas las operaciones políticas y prácticas retaliatorias en la vía pública, no trepidó en usar todo el aparato del Estado para reprimir y reprender a la denunciante, imputándole delitos y buscando despojarla de toda honorabilidad y sentido de servicio público.

Pero eso no es todo: en el trasfondo de esta acción política del Ministro Jackson se encuentra un problema mucho más profundo y complejo. Su designación no viene a ocuparse del diseño, implementación y coordinación de políticas, planes y programas destinados a brindar protección social a los grupos y personas más vulnerables como reza el mandato ministerial. Al contrario, como se demostrará en las siguientes páginas, desde la designación de Giorgio Jackson como Ministro de Desarrollo Social y Familia, comienza un total abandono de esa Cartera del Estado y una falta de supervigilancia transversal a programas y servicios dependientes, lo que lleva a descuidar de manera negligente el cumplimiento de los objetivos y obligaciones del Ministerio.

Este es el contexto en que se desarrolla la Acusación Constitucional que se somete a consideración de la Honorable Cámara de Diputados y que habilita, a nuestro juicio, a analizar con particular detalle y énfasis, las distintas

infracciones, omisiones y decisiones que, en el ejercicio de su cargo, ha realizado el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

En ese sentido, y gatillado por el escándalo político de la coordinación ilegal de las decisiones al interior de la Comité de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, es que a través de diversas acciones fiscalizadoras, como solicitudes de información y el interrogatorio al Ministro Jackson en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara, se buscó reunir más antecedentes y circunstancias que dieran cuenta de la gravedad de las irregularidades y omisiones funcionarias al interior del Ministerio.

A mayor abundamiento, y siempre motivados por la responsabilidad y seriedad de las presentaciones que, en el marco de las atribuciones del Congreso se pueden realizar, se buscó impulsar una interpelación al Ministro Jackson, para avanzar gradualmente en las medidas de investigación y fiscalización requeridas. Sin embargo, lamentablemente, otros partidos políticos y sectores no ponderan adecuadamente la gravedad de estas situaciones y la acusación constitucional, como su naturaleza lo sugiere, es una medida de última *ratio* que debe ser ejercida en esta circunstancia por la gravedad de los hechos denunciados y la responsabilidad que le cabe al Ministro en ella.

PRIMERA PARTE: CONSIDERACIONES GENERALES

I. LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES GENERALES DE UN MINISTRO DE ESTADO Y EL DEBER DE PROBIDAD.

Las normas constitucionales que regulan el concepto, requisitos, funciones, prohibiciones e incompatibilidades de los Ministros de Estado se encuentran contempladas en los artículos 33 a 37 de la Carta Fundamental.

Así las cosas, la Constitución Política de la República establece que los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado, por tanto colaboran en las funciones de colegislar que le corresponde al Presidente y son también responsables de la ejecución del presupuesto de la nación, en cada una de sus secretarías ministeriales.

El ejercicio de las facultades que tiene un Ministro de Estado nacen de la Constitución Política de la República y de las leyes, las cuales surten efecto, para cada uno de los hombres y mujeres que ejercen ese cargo, desde el instante en que juran o prometen cumplir desempeñar fielmente el cargo de Ministro o Ministra de Estado, incluso sin que dicho decreto supremo de nombramiento se encuentre totalmente tramitado.

Es tal el nivel de potestades que la Constitución le confiere a los Ministros de Estado que de acuerdo al artículo 35 inciso primero de dicho cuerpo normativo, los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley.

Los Ministros de Estado son especialmente responsables por el especial estatuto de jerarquía debido a las potestades conferidas por la Constitución y las leyes, y deben someter su actuar conforme a ellas, lo que sin duda limita la posibilidad de que puedan realizar actuaciones inconstitucionales, ilegales o derechamente arbitrarias. Los Ministros de Estado serán responsables individualmente de los actos que firmaren y solidariamente de los que suscribieren o acordaren con los otros Ministros y les serán aplicables las incompatibilidades establecidas en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución.

En materia de probidad administrativa los Ministros de Estado **deben observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.**

Es menester señalar que el 14 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 19.653, sobre *Probidad Administrativa Aplicable de los Órganos de la Administración del Estado*, la que modificó la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y otros cuerpos legales, desarrollando en nuestra legislación interna los principios de probidad y de transparencia¹. La norma anteriormente citada se encuentra en armonía con la modificación constitucional realizada al artículo 8° de la Constitución Política de la República, el cual señala de manera clara que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. El mismo cuerpo legal da cuenta que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los

¹ SILVA HORTA, Daniel. (2016). La destitución por infracción grave a la probidad administrativa en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. *Revista de derecho (Valdivia)*, 29(2), pp. 157-173. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502016000200007>.

procedimientos que utilicen, y sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Siendo de esta forma, la publicidad la regla general en el actuar de los órganos del Estado, lo que da cuenta que también en el actuar de la función pública de los funcionarios de la Administración del Estado y sin ninguna duda de las autoridades, tales como un Ministro de Estado.

A tal grado alcanza la obligación de transparencia y probidad, que se establece un marco regulatorio especial para evitar los conflictos de interés de las máximas autoridades y funcionarios de la República, y la Constitución, en el propio artículo 8º, establece que el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. Es más, la carta fundamental determina que una ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes.

En armonía con las normas anteriormente referidas, ahora bien, vale destacar alguna de las diversas modificaciones realizadas por la Ley N° 19.653, dentro de las cuales destaca la relativa al actual artículo 125 del Estatuto Administrativo, referido a la medida disciplinaria de destitución, sanción que aplica a cualquier funcionario de la Administración del Estado, que en el caso de un Ministro de Estado tiene correlato en las normas referidas a la Acusación Constitucional de un Ministro de Estado por infringir la ley. Es menester destacar que la Ley N° 19.653 reemplazó el

encabezamiento del inciso segundo del citado artículo que decía: “*la medida disciplinaria de destitución procederá siempre en los siguientes casos*”, por el actual que dice: “*La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos: [...]*”².

Así pues, es la Constitución como la propia ley la que consagran la probidad, y la Ley N° 18.575 la estatuye como una infracción grave, estableciendo criterios de gravedad de dicha conducta, disponiendo en el artículo 62 cuáles de ellas contravienen gravemente el principio de probidad administrativa:

“1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña;

2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero;

3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros;

4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;

² Antiguo artículo 119 de la Ley N° 18.834, de 1989, Estatuto Administrativo, cuyo texto fue refundido, coordinado y sistematizado por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.

Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación.

El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares;

6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta;

7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga;

8. **Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave**

entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración, y;

9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado." (subrayado y destacado nuestro).

El legislador, a través del artículo 62 de la Ley N° 18.575, "no ha limitado a un número determinado las actuaciones funcionarias que vulneran dicha directriz de desempeño, sino que por el contrario, se ha preocupado de dejar claramente establecido cuáles conductas no pueden dejar de ser consideradas como una transgresión del referido principio"³.

Así pues, el propio órgano contralor y quienes ejercen funciones jurisdiccionales a través de los respectivos sumarios administrativos son los que han ido calificando en concreto las conductas conducentes a establecer las faltas disciplinarias referidas a la vulneración del principio de probidad administrativa. En este contexto, como se podrá observar, las conductas que han sido calificadas como faltas graves a la probidad administrativa son numerosas y de muy distinta naturaleza y magnitud. Por lo anterior, a continuación procederemos a enunciar las citadas conductas⁴:

1. Conductas relacionadas con maniobras dolosas para obtener beneficio patrimonial, propio o de terceros: Falsificación de firmas,

³ PALLAVICINI MAGNÉRE, Julio (2012). Tratado Jurisprudencial de Derecho Administrativo. Ley N° 18.575 Interpretada. Editorial Abeledo Perrot, LegalPublishing Chile, Tomo III, pp. 620-652.

⁴ SILVA HORTA, Daniel. (2016). La destitución por infracción grave a la probidad administrativa en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. *Revista de derecho (Valdivia)*, 29(2), pp. 157-173. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502016000200007>.

para obtener beneficio personal (dictamen N° 32.339 de 2000); Ordenar pago de horas extras no realizadas (dictamen N° 11.860 de 2008) y cargar combustible del Servicio en vehículo particular (dictamen N° 547 de 2007).

2. Conductas relacionadas con el uso indebido de bienes e información institucional: Uso indebido del teléfono institucional, para fines particulares (dictamen N° 30.952 de 2005) y reproducción y almacenamiento de material pornográfico en computador institucional (dictamen N° 19.206 de 2012).

3. Conductas relacionadas con agresiones físicas, psicológicas y acoso sexual: Agresiones físicas a otro funcionario (dictamen N° 6.100 de 2002) y acoso sexual de profesor universitario a estudiante (dictamen N° 41.606 de 2002).

4. Conductas relacionadas con abogados: Abogado que patrocina acción judicial en contra del municipio en el cual presta servicios (dictamen N° 42.174 de 2008) y abogado que tramita de manera negligente las causas a su cargo (dictamen N° 45.262 de 2012).

5. Conductas relacionadas con profesionales de la salud: Efectuar tocamientos indebidos a pacientes (dictamen N° 27.918 de 2002) y negligencias médicas (dictámenes Nos 53.223 y 83.386, ambos de 2012).

6. Conductas relacionadas con la vida privada: Funcionaria de Gendarmería de Chile, sorprendida por personal de Carabineros de Chile, fuera de su lugar de trabajo y de su horario de trabajo, en un vehículo, en una conducta que constituye una ofensa a la moral y a las buenas costumbres, oportunidad en que se negó a entregar su

identidad y, luego, proporcionó la de su hermana (dictamen N° 1.929 de 2012) y funcionario que se involucró en hechos que dieron origen a una investigación criminal por obtención de servicios sexuales de menores de edad, con exposición mediática, sin cautelar la imagen, honor, prestigio y ascendencia social de su puesto (dictamen N° 77.441 de 2013).

7. Otras conductas: Negligencia en entrega de licencias de conducir (dictamen N° 65.284 de 2011); Negligencia en control de asistencia de funcionarios a su cargo (dictamen N° 57.473 de 2012); Atrasos reiterados (dictamen N° 46.592 de 2000).

Como ha quedado de manifiesto, la jurisprudencia administrativa ha sido muy abundante y variada a la hora de reconocer conductas que atentan gravemente contra el principio de probidad administrativa, incluyéndose en dicho concepto variadas y diversas conductas⁵.

Lo anterior corrobora que la gran cantidad de conductas que se han reconocido como infracciones graves a la probidad administrativa, implica que será la Administración activa, la Contraloría o en su defecto el Juez, quien será llamado a precisar si una determinada actuación u omisión se encuentra incluida en dicho concepto o, en el caso en comento, la Cámara de Diputadas y Diputados en el contexto de conocer sobre una acusación constitucional en contra de un Ministro de Estado, quien, como órgano

⁵ Sobre esta variada jurisprudencia administrativa en materia de probidad administrativa, el autor nacional Ramón Huidobro, ha señalado: *La descripción del tratamiento jurisprudencial, realizado por la Contraloría General de la República, en relación con la probidad administrativa, deja abiertas muchas interrogantes respecto del método de interpretación utilizado. Algunas de ellas son por ejemplo: ¿Existe un voluntarismo interpretativo?, ¿Literalismo jurídico o interpretación del derecho?*. En Huidobro, S., "Derecho y Administración Comunal", en Pantoja B. (coordinador), *Tratado de Derecho Administrativo Tomo III*, LegalPublishing, Santiago, 2011, pp. 150 y 151.

colegiado, deberá cotejar que esa conducta reprochada importa una infracción al principio de probidad administrativa, sobre todo porque las conductas descritas en el cuerpo legal no son taxativas y menos acotadas y pueden existir múltiples formas o maneras de vulnerar el señalado principio.

II. LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES PARTICULARES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA.

Según se lee en la página web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la función del Ministerio es *“contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integración social. Asimismo, debe velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de desarrollo social, a nivel nacional y regional y evaluar los estudios de preinversión de los proyectos de inversión que solicitan financiamiento del Estado para determinar su rentabilidad social de manera que respondan a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social que se determinen para el país”*⁶.

La Ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica, dispone en su artículo 1° lo siguiente:

“Artículo 1°.- Créase el Ministerio de Desarrollo Social y Familia como la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes, y programas en materia de equidad y/o desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar

⁶ <https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/mision>.

protección social a las personas, familias o grupos vulnerables en distintos momentos del ciclo vital, promoviendo la movilidad e integración social y la participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia colaborará también con el Presidente de la República en el diseño, implementación y coordinación de políticas, planes y programas destinados a brindar protección social a aquellas personas o grupos y familias que, sin ser vulnerables, pueden verse enfrentados a contingencias o eventos adversos, que podrían conducirlos a una situación de vulnerabilidad. Dichas políticas, planes y programas propenderán a evitar que los destinatarios pasen a una condición de vulnerabilidad en los términos de esta ley.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia velará por los derechos de los niños con el fin de promover y proteger su ejercicio de acuerdo con el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y en conformidad con la Constitución Política de la República y las leyes.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad o desarrollo social, a nivel nacional y regional, desde un enfoque familiar y de integración social, en los casos que corresponda. Se entenderá por enfoque familiar la implementación de políticas sociales que pongan foco en las familias y en su entorno territorial, social y sociocultural. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia velará por que dichos planes y programas se implementen en forma

descentralizada o desconcentrada, en su caso, preservando la coordinación con otros servicios públicos.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendrá a su cargo la administración, coordinación, supervisión y evaluación de la implementación del Sistema Intersectorial de Protección Social creado por la ley N°20.379, velando por que las prestaciones de acceso preferente o garantizadas que contemplen los subsistemas propendan a brindar mayor equidad y desarrollo social a la población, a las personas, grupos vulnerables y sus familias en el marco de las políticas, planes y programas establecidos.

Corresponderá también a este Ministerio evaluar las iniciativas de inversión que solicitan financiamiento del Estado, para determinar su rentabilidad social, y velar por la eficacia y eficiencia del uso de los fondos públicos y la disminución de los efectos adversos del cambio climático, de manera que respondan a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y social que se determinen para el país.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia velará por la participación de la sociedad civil en las materias de su competencia, en especial, aquellas dirigidas a personas o grupos vulnerables, familias y niños.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia procurará mantener información a disposición de todas las personas respecto al acceso y mantención de los programas sociales a que se refiere esta ley. Dicha información deberá proporcionarse en diversos soportes, con el fin de favorecer la inclusión de todas las personas” (destacado nuestro).

Por otra parte, el artículo 3° de la Ley N° 20.530 se refiere a las **funciones y atribuciones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia** en los siguientes términos:

“Artículo 3°.- Corresponderán especialmente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia las siguientes funciones y atribuciones:

a) Estudiar, diseñar y proponer al Presidente de la República las políticas, planes y programas sociales de su competencia, en particular las orientadas a las personas o grupos vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, las familias y la erradicación de la pobreza, que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ejecute por sí o a través de sus servicios públicos dependientes o relacionados.

b) Establecer, previa consulta al consejo de la sociedad civil de la ley N° 20.500 en la forma que establece dicha ley y aprobación del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia a que se refiere el artículo 11, los criterios de evaluación para determinar, entre otros, la consistencia, coherencia y atingencia de los programas sociales nuevos o que planteen reformularse significativamente por los ministerios o servicios públicos, así como su coordinación y complementación con otros programas sociales en ejecución o que planteen implementarse.

c) Evaluar y pronunciarse, mediante un informe de recomendación, sobre los programas sociales nuevos o que planteen reformularse significativamente, que sean propuestos por los ministerios o servicios públicos, de manera de lograr una coordinación en el diseño de las políticas sociales. El informe deberá contener una evaluación, entre otros, de la consistencia, coherencia y atingencia de tales programas sociales, y este análisis será un factor a considerar en la asignación de recursos en el proceso de formulación del proyecto de Ley de Presupuestos.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el inciso precedente, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá estudiar la realidad social, nacional y regional, velar por que el diseño del programa propuesto sea consistente con los objetivos planteados y revisar que los programas sociales en formación o los ya existentes sean complementarios y estén coordinados, de manera de evitar duplicidades o superposiciones.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, regulará estas evaluaciones, determinando, entre otros aspectos, el contenido, las etapas, plazos, mecanismos de solución de observaciones, las circunstancias excepcionales que podrían justificar prescindir de ellas por el plazo que determine este reglamento, las características que definirán como significativa la reformulación de un programa social, reformular los programas sociales, la vigencia de las evaluaciones efectuadas, las demás materias relativas a la presentación de las propuestas de nuevos programas sociales o que se reformulen significativamente y, en general, las normas necesarias para asegurar la transparencia del proceso de evaluación. Asimismo, el reglamento determinará la gradualidad con que comenzarán a aplicarse estas evaluaciones, para lo cual fijará plazos y definirá órdenes de evaluación entre los programas sociales. Las demás normas e instructivos necesarios para regular la evaluación de los programas sociales serán dictados conjuntamente por los Ministros de dichas secretarías de Estado.

El reglamento señalado en el inciso anterior contendrá también las normas a que se encontrarán afectos los programas sociales cuando incluyan iniciativas de inversión, de tal forma de determinar si estas últimas serán evaluadas conforme a la regulación establecida en esta letra o aquella a que se refiere la letra g) de este mismo artículo.

Dichas normas podrán hacer distinciones según tipo de programa social o iniciativas de inversión.

Lo dispuesto en esta letra es sin perjuicio de la facultad de la Dirección de Presupuestos para solicitar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la elaboración de informes de recomendación respecto a programas no comprendidos en el numeral 2) del artículo 2° de esta ley.

d) Colaborar con el seguimiento de la gestión e implementación de los programas sociales que estén siendo ejecutados por los servicios públicos relacionados o dependientes de éste y de otros ministerios, mediante la evaluación y pronunciamiento a través de un informe de seguimiento de, entre otros, su eficiencia, su eficacia y su focalización. Estos informes de seguimiento de ejecución de los programas sociales podrán ser considerados en la asignación de recursos en el proceso de formulación del proyecto de Ley de Presupuestos y deberán ser puestos a disposición del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, regulará dichos informes, determinando, entre otros aspectos, el contenido, las etapas, los plazos, la periodicidad y, en general, las normas necesarias para asegurar la transparencia del proceso de evaluación.

Lo dispuesto en esta letra se establece sin perjuicio de la facultad de la Dirección de Presupuestos para solicitar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la elaboración de informes de seguimiento respecto a programas no comprendidos en el numeral 2) del artículo 2°.

e) Analizar de manera periódica la realidad social nacional y regional de modo de detectar las necesidades sociales de la población y de las familias e informarlas al Comité Interministerial

de Desarrollo Social y Familia, para lo cual deberá considerar, entre otros, los antecedentes que al efecto le entreguen los gobiernos regionales. El resultado de los estudios y análisis debe mantenerse publicado en el sitio electrónico del Ministerio de manera permanente, de acuerdo a las normas establecidas en el Título III de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado.

f) Definir los instrumentos de focalización de los programas sociales, sin perjuicio de las facultades de otros ministerios a estos efectos. Uno o más reglamentos expedidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, suscritos además por el Ministro de Hacienda, y en su caso por los ministros sectoriales que correspondan, establecerán el diseño, uso y formas de aplicación del o de los referidos instrumentos y las demás normas necesarias para su implementación.

g) Evaluar las iniciativas de inversión que soliciten financiamiento del Estado, para determinar su rentabilidad social y elaborar un informe al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N°1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado. En cumplimiento de lo anterior deberá establecer y actualizar los criterios y las metodologías aplicables en la referida evaluación. La determinación de estos criterios y metodologías deberá considerar especialmente la incorporación de indicadores objetivos y comprobables respecto al desarrollo de las iniciativas de inversión, así como también el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Estrategia Climática de Largo Plazo. Las metodologías y sus criterios de evaluación deberán mantenerse a disposición permanente del público en el sitio electrónico del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En cumplimiento de lo anterior le corresponderá velar por que las iniciativas de inversión que utilicen financiamiento del Estado sean

socialmente rentables y respondan a las políticas de crecimiento y desarrollo económico y social que se determinen para el país y sus regiones. Los Ministros de Desarrollo Social y Familia y de Hacienda, conjuntamente, establecerán directrices basadas en las características de las iniciativas de inversión a partir de las cuales no se les hará exigible el informe señalado en el párrafo anterior, las que serán revisadas anualmente y se mantendrán publicadas de conformidad al citado párrafo. Ambos ministerios realizarán esta revisión teniendo especial consideración de los objetivos, metas e indicadores establecidos por la Estrategia Climática de Largo Plazo y los Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Estas directrices se informarán a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar, el 30 de noviembre de cada año.

Además, evaluará los proyectos de inversión de las municipalidades que se financien en más de un 50% mediante aportes específicos del Gobierno Central contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Público y que no se encuentren exceptuados de conformidad a lo dispuesto en el párrafo precedente. No obstante lo anterior, la evaluación de los proyectos de inversión de las municipalidades que se financien con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se regirán por las normas aplicables a los proyectos que se financian con dicho Fondo.

Lo dispuesto en esta letra se establece sin perjuicio de la facultad de la Dirección de Presupuestos para solicitar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la elaboración de informes respecto de iniciativas no comprendidas en el numeral 7) del artículo 2° de esta ley.

h) Analizar los resultados de los estudios de preinversión y de los proyectos de inversión evaluados, con el objeto de validar los

criterios, beneficios y parámetros considerados en la evaluación a que hace referencia la letra precedente.

Asimismo, realizará el seguimiento de los proyectos de inversión en ejecución y estudios de preinversión. Para ello utilizará los informes que le sean presentados por el organismo público que solicita se emita el documento interno de la Administración.

i) En conjunto con el Ministerio de Hacienda, poner a disposición de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de los Gobiernos Regionales, de los Consejos Regionales, de los Alcaldes y de los Concejos Municipales, durante el mes de agosto de cada año, un informe de los estudios de preinversión de las iniciativas de inversión evaluadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que indique, a lo menos, el porcentaje de inversión decretada y ejecutada en el año precedente que fue sometida a la evaluación señalada en el inciso cuarto del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, y el porcentaje de ésta que obtuvo rentabilidad social positiva.

j) Colaborar, en el ámbito de su competencia, con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en la preparación anual de la Ley de Presupuestos del Sector Público, para lo cual pondrá a disposición de la Dirección de Presupuestos los informes de recomendación de programas sociales y evaluación de inversiones establecidos en las letras c), d), g) y h) precedentes.

k) Administrar el Banco Integrado de Programas Sociales y el Banco Integrado de Proyectos de Inversión.

Con este fin elaborará, conjuntamente con la Dirección de Presupuestos, las instrucciones generales necesarias para establecer el diseño y adecuado funcionamiento de dichos Bancos.

l) Elaborar las demás normas e instructivos relativos a las evaluaciones e informes, cuando corresponda, de las letras d), g) y h) precedentes. Las normas e instructivos correspondientes a las

letras g) y h) serán elaboradas en conjunto con el Ministerio de Hacienda.

m) Capacitar a los formuladores de programas sociales y de proyectos de inversión en materia de preparación, presentación y evaluación de los mismos, conforme al plan anual de capacitación y dentro de sus posibilidades presupuestarias.

n) Administrar el Registro de Información Social a que se refiere el artículo 6° de la ley N° 19.949, que estableció un Sistema de Protección Social para familias en Situación de Extrema Pobreza denominado "Chile Solidario". En este contexto, se faculta al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para permitir a la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda el acceso a los datos que en este Registro se contengan para los fines que corresponda en el marco de sus atribuciones, sólo en lo relacionado con la evaluación de los programas sociales, con la elaboración de informes financieros, y con los estudios necesarios para aquello. Con todo, se accederá a los datos sólo de manera innominada. Asimismo, la información que extraiga el mencionado Servicio deberá ser de carácter indeterminado e indeterminable respecto a los datos personales. En caso de que los funcionarios de la Dirección de Presupuestos, o aquel que en nombre de ésta tenga acceso a los datos del Registro, los utilicen con fines diversos para los que fueron solicitados de acuerdo al presente literal, serán sancionados conforme al Título V de la ley N° 19.628.

ñ) Administrar, coordinar, supervisar y evaluar la implementación del Sistema Intersectorial de Protección Social establecido en la ley N° 20.379.

o) Promover el mejoramiento constante en la gestión del Sistema Intersectorial de Protección Social, de los subsistemas que lo integran y de los servicios públicos relacionados o dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este mejoramiento

procurará que el Sistema Intersectorial de Protección Social opere bajo un enfoque familiar, en los casos que corresponda, desde una comprensión multidimensional de los niveles de vulnerabilidad social.

p) Impartir instrucciones y ejecutar cualquier otra acción necesaria para que exista coherencia funcional entre las políticas, planes y programas sociales ejecutados por los servicios públicos relacionados o dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y coordinar su ejecución.

q) Establecer las políticas, planes y programas a que deberán ceñirse los organismos e instituciones dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, o que se relacionen con el Presidente de la República por su intermedio, los cuales, anualmente, deberán elaborar un informe que dé cuenta de la implementación de las políticas señaladas.

r) Celebrar convenios de desempeño con los jefes de los servicios dependientes o relacionados del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

s) Solicitar a los demás ministerios, servicios o entidades públicas la entrega de la información disponible y que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia requiera para el cumplimiento de sus funciones. Los ministerios, servicios o entidades públicas deberán proporcionar esta información oportunamente. De no encontrarse disponible la información requerida, los ministerios, servicios o entidades públicas podrán solicitar la colaboración de otras entidades del Estado. Las demás unidades evaluadoras que existan o se creen en otros Ministerios, antes de solicitarla directamente, deberán consultar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia la existencia de la información que estudian requerir de los demás ministerios, servicios o entidades públicas obligadas a informar al tenor de esta ley. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá

colaborar con dichas unidades evaluadoras para efectos de que puedan acceder, de conformidad a la normativa vigente, a la información que requieren.

Respecto de los requerimientos sobre información amparada por la reserva establecida en el artículo 35 del Código Tributario, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sólo podrá solicitar al Servicio de Impuestos Internos la información relativa a los ingresos de las personas que sea indispensable para verificar la elegibilidad de quienes solicitan beneficios o son beneficiarios de los programas sociales. En su requerimiento el Ministerio deberá indicar expresa y detalladamente la información que solicita y los fines para los cuales será empleada. El Servicio de Impuestos Internos informará, en el ámbito de su competencia, de acuerdo a los antecedentes que consten en sus registros.

El personal del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que tome conocimiento de la información tributaria reservada estará obligado en los mismos términos establecidos por el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario. El incumplimiento de este deber hará aplicables las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Párrafo 8 del Título V del Libro Segundo del Código Penal.

Sólo se podrá solicitar información considerada dato sensible de acuerdo a la ley cuando sea indispensable para verificar la elegibilidad de quienes solicitan beneficios o son beneficiarios de los programas sociales, o la mantención de los mismos, y para complementar el Registro de Información Social señalado en el artículo 6° de la ley N° 19.949. En su requerimiento, el Ministerio deberá indicar expresa y detalladamente la información que solicita y los fines para los cuales será empleada.

t) Sistematizar y analizar registros de datos, información, índices y estadísticas que describan la realidad social del país y que

obtenga en el ámbito de su competencia, además de publicar la información recopilada conforme a la normativa vigente.

En el tratamiento de datos personales a que hace mención esta letra, el Ministerio deberá consagrar y respetar los derechos de acceso, rectificación, corrección, y omisión por parte de los administrados, y deberá tomar todas las medidas de seguridad en el tratamiento de datos sensibles.

u) Asesorar técnicamente a los Delegados Presidenciales Regionales, por medio de las Secretarías Regionales Ministeriales de Desarrollo Social, en las materias de competencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que tengan aplicación regional.

v) Presentar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, en el mes de septiembre de cada año, un informe de Desarrollo Social. El referido informe deberá incluir una sección específica que analice la realidad de la pobreza, tomando en consideración las áreas de salud, ingreso, logros educacionales y vivienda, entre otras.

w) Estudiar y proponer las metodologías que utilizará en la recolección y procesamiento de información para la entrega de encuestas sociales y otros indicadores, en materias de su competencia.

x) Promover el fortalecimiento de la familia, en los términos definidos en el número 1) del artículo 2 de la presente ley.

y) Las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende. Lo dispuesto en las letras a), o), p), q) y r) precedentes no será aplicable al Servicio Nacional de la Mujer”.

III. LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES PARTICULARES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA RESPECTO A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.

También se debe tener presente lo dispuesto por el artículo 3° bis de la Ley N° 20.530, el cual se refiere a las **funciones y atribuciones del Ministerio, pero en relación con la protección de los derechos de los niños.**

Dicha norma dispone lo siguiente:

“Artículo 3° bis.- El Ministerio velará por los derechos de los niños, para cuyo efecto tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) Asesorar al Presidente de la República en las materias relativas a la promoción y protección integral de los derechos de los niños.

b) Proponer al Presidente de la República la Política Nacional de la Niñez y su Plan de Acción, informar sobre su ejecución y recomendar las medidas correctivas que resulten pertinentes, según lo dispuesto en la letra a) del artículo 16 bis.

c) Administrar, coordinar y supervisar los sistemas o subsistemas de gestión intersectorial que tengan por objetivo procurar la prevención de la vulneración de los derechos de los niños y su protección integral, en especial, la ejecución o la coordinación de acciones, prestaciones o servicios especializados orientados a resguardar los derechos de los niños y de las acciones de apoyo destinadas a los niños, a sus familias y a quienes componen su hogar, definidas en la Política Nacional de la Niñez y su Plan de Acción, el que deberá contener los programas, planes y acciones que

incluirá en su ejecución, sin perjuicio de las competencias que tengan otros organismos públicos.

d) Impulsar acciones de difusión, capacitación o sensibilización destinadas a la prevención de la vulneración de los derechos de los niños y a su promoción o protección integral.

e) Promover el fortalecimiento de la participación de los niños en todo tipo de ámbitos de su interés, respetando el derecho preferente de sus padres de orientación y guía, considerando, además, su edad y madurez.

f) Colaborar en las funciones señaladas en las letras e); s), párrafo primero; t), y w) del artículo 3° a fin de incorporar las adaptaciones necesarias para la medición y seguimiento de las condiciones de vida de los niños.

g) Desarrollar estudios e investigaciones sobre la niñez, entre otros. Adicionalmente, elaborar un informe anual sobre el estado general de la niñez a nivel nacional y regional. En dicho informe deberá realizar, si corresponde, recomendaciones para avanzar en la implementación efectiva de un sistema de protección integral de los derechos de los niños.

h) Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro del ámbito o esfera de sus competencias respectivas, en la elaboración de los informes vinculados a los derechos de los niños y sus familias, que el Estado de Chile deba presentar a los órganos y comités especializados de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, en especial, al Comité de los Derechos del Niño".

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica varias otras normas legales, publicada el 5 de enero de 2021 establece varios cambios referidos al Servicio de Protección a la Niñez, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, al Sistema de Alta Dirección Pública y la elección de cargos para la nueva institucionalidad que se ha creado, la Comisión Coordinadora de Protección Nacional, el Servicio Nacional de Protección Especializada, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y normas del propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El proyecto de ley indicaba que: “se fundamenta en que los niños y niñas son la base, el presente y el futuro de nuestro país, es por esto que debieran ser siempre prioritarios, tanto para sus familias, como para la sociedad y el Estado. Durante sus primeros años de vida, los niños y niñas desarrollan las habilidades que les permitirán en el futuro alcanzar su máximo potencial y ser un aporte para la sociedad y para el porvenir de nuestro país. El Estado de Chile tiene una deuda histórica con la niñez, hecho que ha sido constatado por informes, tragedias y denuncias que evidencian gravísimas y profundas vulneraciones a los derechos de los niños y niñas de nuestro país”⁷.

Es por eso que en marzo de 2018, diversas fuerzas políticas y de la sociedad civil participaron de una mesa para concretar un gran Acuerdo Nacional por la Infancia y el 30 de mayo de 2018 se entregó el proyecto y se concretó el acuerdo, que luego de casi 3 años fue promulgado y publicado como ley de la República.

Esta normativa considera una serie de obligaciones para la Administración del Estado que considera una implementación

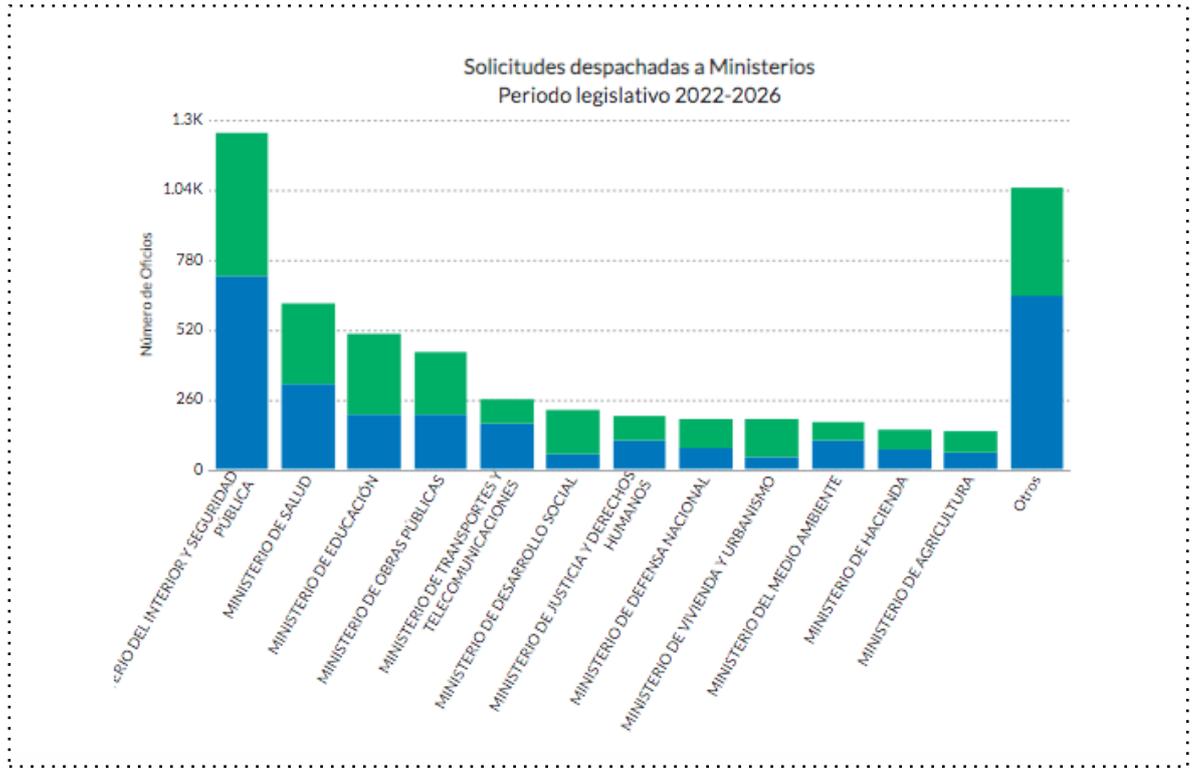
⁷ Parte del Mensaje presidencial N° 090-366, de 5 de agosto de 2018.

progresiva, en plazos no mayores de 5 años, habiendo ya pasado casi 2 años de implementación de la ley.

IV. LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES PARTICULARES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA CON EL CONGRESO NACIONAL Y LA OMISIÓN PERMANENTE Y CONSTANTE DE RESPONDER OFICIOS PARLAMENTARIOS.

El artículo 52 de la Constitución Política de la República establece como una de las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, “fiscalizar los actos del Gobierno”. Lo que se manifiesta en comunicaciones formales entre el Gobierno Central y la Cámara de Diputados. Para ejercer esta atribución la Cámara puede por intermedio de cualquier diputado, con el voto favorable de un tercio de los miembros presentes de la Cámara, solicitar determinados antecedentes al Gobierno. El Presidente de la República tal como indica el artículo 52 N° 1) letra a) inciso 2 **contestará fundadamente por intermedio del Ministro de Estado que corresponda, dentro del plazo de 30 días dichos oficios. Es una obligación de cada Ministro de Estado el responder dentro del plazo indicado las comunicaciones requeridas por los parlamentarios.**

Tabla 1. Solicitudes de Oficios a Ministerios.



Fuente: Cámara de Diputados.

Como muestra la Tabla 1, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia a al 31 de diciembre de 2022, ha recibido 223 oficios despachados desde la Cámara de Diputadas y Diputados, 166 oficios aún se encuentran sin respuesta⁸.

Es menester señalar que junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo es de los Ministerios que mantiene mayor rezago en las respuestas, en asuntos que sin duda son de suma importancia para las políticas públicas referidas a niños, jóvenes, adultos mayores, familias, personas en situación de calle, pueblos originarios, personas con discapacidad, etc.

Al realizar una revisión de los Ministros de Desarrollo Social y Familia del periodo presidencial que abarca los años 2014 a 2018, respondieron el

⁸ Consultado en https://www.camara.cl/fiscalizacion/solicitud_antecedentes_informacion/estadisticas.aspx el 31 de diciembre de 2022.

71,43% de los oficios despachados, y para el período 2018 a 2022, se respondieron 51,11% de los oficios de fiscalización. El actual Ministro de esta Cartera de Estado, pese a la obligación Constitucional, sólo ha respondido el 25,56% del total de todos los oficios a él despachados y recepcionados.

V. LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, REFERIDO A LA LEY N° 19.886, DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Antes de todo cabe destacar que todas las autoridades de la Administración del Estado deben someter su actuar a la ley de compras públicas, así como las autoridades del propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En Chile, es la Comisión Nacional de Ética Pública la instancia de estudio y elaboración de políticas públicas e iniciativas legales, destinadas a reforzar los procedimientos e instituciones para que cautelen el cumplimiento de los deberes legales y éticos en la actividad pública.

La transparencia, la ética y la justicia en los procedimientos de compras del Estado dieron origen a toda la normativa sobre compras públicas. Esta instancia se dio en el marco del mediático caso MOP-GATE, que significó la investigación y formulación de cargos a varios funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Se hizo necesario establecer que la ley asegurara transparencia, objetividad, imparcialidad, certidumbre en el cumplimiento contractual y detallada publicidad, especialmente de volúmenes y precios, de todos los procesos de adjudicaciones de compra de bienes y servicios por parte del Estado; y que, simultáneamente, genere unidad, homogeneidad y coherencia a la legislación sobre el tema. En este periodo se crean instituciones como la Dirección de Compras y Contratación Pública,

conocida como: ChileCompra y el sitio web: Mercado Público, además del Tribunal de Contratación Pública.

La Ley N° 19.886, que sin duda afecta en su actuar a todos los órganos de la Administración del Estado regula los contratos administrativos de suministro, la prestación de servicios, las licitaciones públicas, la forma en que éstas se deben realizar, las propuestas privadas y la excepciones para realizar contratos o tratos directos, que son procesos de compra muy restrictivos, siendo la regla general las licitaciones públicas, sin perjuicio de la normativa aplicable para los procedimientos administrativos que se encuentran regulados en el artículo 9° de la Ley 18.575..

SEGUNDA PARTE: PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UN MINISTRO DE ESTADO

I. LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE UN MINISTRO DE ESTADO.

Nuestra Constitución Política vigente promulgada por el Presidente Augusto Pinochet Ugarte en 1980 y reformada ampliamente el año 2005, bajo la presidencia de Ricardo Lagos Escobar, dispone en el artículo 52 N° 2 letra b) como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados acusar constitucionalmente a los Ministros de Estado:

“Artículo 52.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas:

b) De los Ministros de Estado, **por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno;**” (subrayado y destacado nuestro).

Posteriormente -en caso de prosperar la acusación en la Cámara de Diputados-, es el Senado quien como jurado, decide si acoge o rechaza la acusación y con ello declara culpable o no al acusado por la Cámara de Diputados, conforme lo mandata la Constitución:

“Artículo 53.- Son atribuciones exclusivas del Senado:

1) Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior.

El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del Presidente de la República o de un gobernador regional, y por la mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos.

Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años.

El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares;”.

La doctrina ha llamado desde antiguo esta acusación, como Acusación Constitucional y también la ha caracterizado como juicio político, donde se genera responsabilidad política, que es distinta a la responsabilidad civil, penal o administrativa.

En caso de la Constitución chilena, la declaración de culpa que hace el Senado del acusado se refiere a la responsabilidad que la doctrina ha llamado responsabilidad constitucional, no sólo política, propia de los regímenes parlamentarios, donde los ministros responden políticamente frente al Parlamento por pérdida de confianza, si no que de responsabilidad política sujeto a causales jurídicas estrictas contempladas en la Constitución.

Así lo señalan los profesores Martínez y Riveros, respecto de la Acusación Constitucional.

*“(...) se ha llegado por parte de un sector bastante amplio de la doctrina a la conclusión de **que la responsabilidad que se persigue en la acusación constitucional es de tipo constitucional**, en la cual confluyen tanto elementos de carácter político, en cuanto a la apreciación de las causales, como elementos que, si bien no son penales, es posible identificar con la figura de los ilícitos constitucionales.*

De esta manera, es claro que la acusación no tiene por objeto hacer valer responsabilidades políticas; pero al contener su decisión ciertos elementos de carácter político, es posible hablar de una suerte de responsabilidad mixta o sui géneris calificable como ‘responsabilidad constitucional’, es decir, responsabilidad declarada en el procedimiento de la acusación, respecto a haber incurrido el acusado en ciertos ilícitos constitucionales que no son, sin embargo, delitos penales, lo que no evita que conlleven sanciones de gravedad, tales

como la destitución y la inhabilitación por el plazo de cinco años.

Se configura, de esta manera, una institución especialísima, en la que el criterio político no puede dejar de ser tenido en cuenta, pero en la que prima el carácter jurídico de la causal en la que se incurre y con la consecuente necesidad de interpretarla correcta y prudentemente por el organismo respectivo”⁹ (subrayado y destacado nuestro).

Por otro lado, es la misma historia constitucional quien confirma la impronta jurídica -no sólo política- de la Acusación Constitucional en la Constitución Política de la República de Chile:

“...En cuanto a la aplicación de la pena de destitución y a que los tribunales estudien los antecedentes para determinar si se ha cometido delito o se ha incurrido en responsabilidad civil, expresa que este precepto nació en 1874, modificando la disposición de la Carta de 1833 que confería al Senado amplias atribuciones para tipificar las infracciones y aplicar las penas, lo que fue combatido por todos los comentaristas de la época y condujo a la introducción de esta norma inspirada en la Constitución americana. Hace presente que, a pesar de que un informe señalaba lo innecesario de consagrar en el texto mismo la idea de la destitución porque era la consecuencia lógica, la falta de un precepto semejante llevó después a no aplicarla. Considera, por tanto, indispensable modificar el precepto tomando como base la Constitución norteamericana, que es su inspiradora. El señor ORTUZAR (Presidente) señala que todas las observaciones formuladas son ampliamente coincidentes con las proposiciones del señor Guzmán, quien ha clarificado que, dentro de las causales de acusación, ellas son siempre infracciones de tipo jurídico, algunas pueden ser constitutivas de delito y otras no. La señora BULNES expresa su deseo de que en el Memorándum se consigne que el texto constitucional

⁹ MARTÍNEZ, Gutenberg, y RIVERO, René (2004): *Acusaciones Constitucionales. Análisis de un caso. Una visión parlamentaria* (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, primera edición), pp. 90-91.

establecerá la pena de destitución del cargo de Ministro de Estado y de inhabilitación para cualquier cargo público, ya que, en su opinión, esto constituye una innovación que mejora la disposición actual. El señor ORTUZAR (Presidente) declara que así se hará. El señor BERTELSEN plantea la conveniencia de dilucidar previamente cuál será el organismo constitucionalmente capacitado para pronunciarse sobre las acusaciones entabladas por la Cámara de Diputados. El señor GUZMÁN expone que, en este punto, la proposición del Comité consiste en distinguir dos órganos encargados de juzgar la acusación constitucional, según sea la causal en virtud de la cual se acuse el funcionario. Sobre esta base, dice, se ha considerado conveniente establecer que corresponderá al Senado conocer de las acusaciones que se funden en infracciones de tipo jurídico cuya ponderación sea más bien política que jurisdiccional, como son las relativas a “haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación”, a “haber dejando sin ejecución las leyes” o al “notable abandono de deberes”, y, en cambio, encomendar al Tribunal Constitucional el conocimiento de todas aquellas derivadas de infracciones jurídicas cuya naturaleza sea de índole estrictamente jurisdiccional, entre las cuales quedan incluidos, desde luego, los delitos penales. El señor BERTELSEN manifiesta tener serias objeciones a esta división de la competencia constitucional para pronunciarse sobre las acusaciones. A su juicio, desde el momento en que se aceptara que de las infracciones jurídicas políticas conociera el Tribunal Constitucional y, en cambio, sobre las de índole jurídica pero no penal, o sea, sobre las que envuelven una condena jurídico política, resolviera el Senado, se estarían dando las bases para establecer en el país un nuevo tipo de parlamentarismo. En efecto estima que el segundo caso constituiría una especie de voto de censura cualificada, aprobado primero por la Cámara que acusa y después por la que puede destituir e inhabilitar personas. Destaca que el ámbito de ciertas causales de acusación es por demás, vasto. Indica que, como consecuencia del desarrollo alcanzado en los últimos tiempos por la doctrina de la seguridad nacional, se estima hoy que ésta es uno de los elementos

integrantes del bien común que está presente en toda acción de Gobierno, de tal modo que cualquier política, sea económica, de colonización, laboral, educacional, etcétera, puede comprometer la seguridad de la nación y ser motivo de acusación constitucional contra un Ministro de Estado. En este contexto, siendo difícil diferenciar lo que es censura jurídica de lo que es censura netamente política, juzga que la división antedicha resulta peligrosísima para la mantención de un régimen presidencial como el que se ha diseñado, Es la razón que lo lleva a pronunciarse por que sea uno solo el organismo encargado de resolver sobre el particular. El señor GUZMÁN hace presente que el origen de la proposición se encuentra en la evidencia de que el Senado, como órgano encargado de resolver sobre la acusación constitucional, fracasó en Chile. Cree que no está de más recordar que, aunque la Constitución llamaba a los Senadores a fallar como jurado, es decir, en conciencia, se hizo costumbre que se dieran órdenes de partido para proceder en estos casos, lo cual resultó en extremo grave y perturbador. Explica que, por esa razón, se quiso explorar la posibilidad de confiar esta misión al Tribunal Constitucional, que aparece como un órgano más seguro desde el punto de vista de su independencia política y también más ceñido a lo jurisdiccional. Pero, agrega, allí surgió la conainterrogante de si era o no prudente encomendar a un órgano eminentemente jurisdiccional el conocimiento y fallo de materias que requieren una ponderación política muy seria y muy discrecional, como es la de apreciar si una persona ha incurrido o no en la causal de “haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación” o en la de “haber dejado sin ejecución las leyes”. Hace notar que el dejar sin ejecución una ley muchas veces corresponde a una exigencia del bien común. El señor CARMONA destaca que en todo lo referente a las huelgas, por ejemplo, los gobiernos dejaron permanentemente sin ejecución las leyes. El señor GUZMÁN indica que, sobre la base de que entregar resueltamente el fallo del juicio político o acusación constitucional al Tribunal Constitucional, podía desvirtuar la naturaleza jurisdiccional de éste y acercarlo a organismo político, se originó la proposición de dividir las causales. Reconoce que el

argumento del señor Bertelsen es muy atendible y sólido, y por ello cree que no debería abandonarse la idea de dividir las causales y decidirse por uno de los dos organismos.”¹⁰.

Respecto de la acusación política que hace la Cámara de Diputados, es un acto del juicio prudencial respecto de la plausibilidad de la acusación y no de su mérito final, cuestión que corresponde al Senado, conforme a las normas constitucionales ya citadas.

Así lo expuso magistralmente el profesor Jorge Baraona González en sesión de la Comisión de la Acusación Constitucional contra la entonces Ministra del Interior y Seguridad Pública (2022), Señora Izkia Siches Pastén:

“La segunda idea que quiero plantear es reivindicar, desde mi óptica jurídica, la facultad que tienen los diputados para acusar constitucionalmente a las autoridades. De repente, considero que hay personas que sienten que se ha mal ejecutado —en muchos casos puede ser así—; pero al final del día, la facultad de fiscalización de esta Cámara es muy importante, y en un sistema presidencial evidentemente hay que reivindicarla. Precisamente, la reivindico aquí, desde mi óptica ciudadana, porque creo que es importante hacerlo, sin perjuicio de la importancia que tiene que se haga bien. La tercera idea que quiero plantear corresponde a que es muy importante saber y explicar cuál es la función que tienen la Cámara y el Senado en materia de acusaciones. Si me permite, señor Presidente, una mínima lectura de la norma que lo sustenta: “Declarar si han o no lugar las acusaciones”. Declarar si han o no lugar, no es una función jurisdiccional, como sí la tiene el Senado,

¹⁰ Comisión de Estudios para una Nueva Constitución Sesión 353^a, Tomo X, pp. 650-651, ver en el siguiente link: https://archivojaimeguzman.cl/uploads/r/archivo-jaime-guzman-e-3/3/6/7/367c4c21e348c0a0a7f7b46eb1e8b3ed35191f6a05e10729995593581043b3bc/CCO.01.10_Comisi_n_Ort_zar_Tomo_X_1977.pdf, consultado al 26 de diciembre de 2022.

sino que es una cuestión de acusación, es decir, mutatis mutandis en un juicio, del fiscal, el que acusa, el que le dice a otro: “Señor, he aquí un delito”. Estoy diciéndolo gruesamente para que se entienda. Eso es importante, porque no puede ser un juicio definitivo como juez; es un juicio plausible como acusador. Esto tiene importancia desde el punto de vista de la manera en que usted se enfrenta a los hechos. Usted no tiene que indagar para llegar a convicciones de culpabilidad o inocencia. Tiene que indagar si hay sospecha fundada o presunciones de fondo que permitan que esos hechos sean plausibles, porque la Constitución prudentemente ha dicho que no son los diputados los que van a resolver si la ministra, en este caso, es culpable o no, para eso está el Senado”¹¹.

II. EL MINISTRO DE ESTADO KENNETH GIORGIO JACKSON DRAGO.

El Ministro Giorgio Jackson nació el 6 de febrero de 1987, en Viña del Mar. Hijo de Kenneth Paul Jackson Salinas y Carmen Gloria Elisa Drago Caballero, cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Alemán Sankt Thomas Morus, en Santiago.

Respecto de su conocida trayectoria política, a fines del año 2009 resultó electo para el período 2010 a 2011 como Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. En forma paralela, fue vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y junto a Camila Vallejo Dowling, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y Camilo Ballesteros, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, tuvo un importante rol en las movilizaciones estudiantiles protagonizadas por los estudiantes secundarios y universitarios durante el año 2011. Esta circunstancia fue aprovechada - sin duda- por los políticos de la época quienes entre otras cosas, lo llamaron a

¹¹https://www.camara.cl/verDoc.aspx?prmID=254599&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION

exponer en la Comisión del Senado. Allí señaló con tono mesiánico y repitiendo lo aprendido en los libros de Fernando Atria -como lo destaca el sitio web de Revolución Democrática- que *“es un imperativo moral que el Estado sea garante de derechos y no de bienes de consumo”*¹².

El año 2012 participa en la fundación del movimiento político Revolución Democrática. Posteriormente, el 17 de noviembre de 2013 resultó electo Diputado por el Distrito N° 22 de Santiago, obteniendo 55.259 votos, que corresponden al 45,54% del total de los sufragios válidamente emitidos. En dicha elección bajo el sistema binominal, el candidato Jackson fue subsidiado por la izquierda de entonces, la Concertación de Partidos por la Democracia por Chile, que ya a esas horas estaba en sus estertores.

El 2015 Giorgio Jackson figuraba -según la encuesta CEP- en la cumbre de los políticos mejor evaluados con un 44% de aprobación¹³, por sobre figuras como Ricardo Lagos, Isabel Allende o Sebastián Piñera. Para las elecciones parlamentarias del 19 de noviembre de 2017, postula a la reelección por el nuevo Distrito 10°, compuesto por las comunas de La Granja, Macul, Providencia, San Joaquín, Santiago, Ñuñoa, bajo un nuevo sistema electoral proporcional, obteniendo 103.523 votos, que corresponden al 23,72% del total de los votos válidamente emitidos.

Posteriormente en la primera y segunda vuelta electoral de la elección Presidencial de 2021, ejerció como Jefe Político del Comando del candidato Gabriel Boric Font, quien resultó electo Presidente de la República en la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre de 2021 al obtener el 55,8% de los votos válidamente emitidos.

¹² <https://giorgiojackson.revoluciondemocratica.cl/biografia-2/>.

¹³ <https://socialesehistoria.udp.cl/giorgio-jackson-desplaza-a-me-o-como-el-politico-mejor-evaluado-segun-el-cep/>.

El 21 de enero de 2022 fue designado para ser Ministro Secretario General de la Presidencia por el Presidente electo Gabriel Boric, asumiendo el cargo el 11 de marzo de 2022. Fue en el desempeño del mismo, la ocasión en que el Ministro Giorgio Jackson empezó su abrupto declive político.

Es conocido por todos que el Gobierno del Presidente Boric, a instancias de su amigo y principal consejero político, el Ministro Giorgio Jackson ató su suerte al plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022. En junio de ese año el Ministro Jackson dijo que: *“cualquier observador independiente podrá ver la actual y la nueva Constitución y preguntarse con qué marco es más factible realizar nuestro programa de gobierno”*¹⁴. Anteriormente el Presidente había abrazado totalmente la causa de la Convención Constituyente con una penosa afirmación: *“cualquier resultado será mejor que una Constitución escrita por cuatro generales”*¹⁵.

Famosas por otro lado son las frases del Ministro Jackson que denotan superioridad moral e histórica¹⁶:

“Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”.

¹⁴<https://www.ex-ante.cl/por-que-boric-salio-a-contradecir-a-jackson-y-dividio-aguas-entre-el-apruebo-y-el-programa-de-gobierno/>.

¹⁵<https://www.duna.cl/noticias/2022/03/14/presidente-boric-sobre-nueva-constitucion-cualquier-resultado-sera-mejor-que-una-constitucion-escrita-por-cuatro-generales/>.

¹⁶ Comentario de los firmantes: El alarde de superioridad moral y sobre todo histórica es una nota característica de los “progresismos” y las revoluciones.

“Tenemos infinitamente menos conflictos de interés que otros que trenzaban entre la política y el dinero. Son tantos años de administrar el poder que es muy fácil tener el mismo tiempo el poder político y un compromiso con un negocio que pueda estar por fuera”¹⁷.

Meses más tarde -después de un largo silencio- declaró frente a la pregunta de un periodista:

“¿Ni que corra el riesgo de ser un quinto gobierno de Concertación, como ha dicho Daniel Jadue?”

No. Yo creo que será recordado como un gobierno que fundó las bases de un Estado de bienestar”¹⁸.

Antes de dicha pregunta, emitió la siguiente frase: *“Estamos haciendo cosas distintas que van a ser relevantes para el país. O sea, no creo que este gobierno vaya a pasar desapercibido en las páginas de historia.”* (subrayado nuestro)

Después de la derrota del 4 de septiembre del mismo año, donde la ciudadanía rechazó una propuesta de texto constitucional que entre las mil barbaridades proponía la eliminación del Senado, borrando 200 años de historia, el Presidente Boric lo designa como Ministro de Desarrollo Social y Familia.

¹⁷ *“Nuestra escala de valores es distinta”: El error y las disculpas de Jackson que llegan en su peor momento*. Noticia publicada el 3 de agosto de 2022. Disponible en: <https://www.ex-ante.cl/nuestra-escala-de-valores-es-distinta-el-error-y-las-disculpas-de-jackson-que-llegan-en-su-peor-momento/>

¹⁸ *“Giorgio Jackson: “No creo que este gobierno vaya a pasar desapercibido en las páginas de historia”*. Noticia publicada el 25 de diciembre de 2022. Disponible en: <https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/giorgio-jackson-no-creo-que-este-gobierno-vaya-a-pasar-desapercibido-en-las-paginas-de-historia/A7SPLVMJCJEARMTH3QKIOANDCA/>

TERCERA PARTE: CAPÍTULO ACUSATORIOS MATERIA DE LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL

1. RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS ACUSATORIOS.

En virtud de lo establecido en el artículo 51 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, el Senado conocerá la acusación constitucional votando cada capítulo por separado. La norma referida establece que: *“se entenderá por capítulo el conjunto de los hechos específicos que, a juicio de la Cámara de Diputados, constituyan cada uno de los delitos, infracciones o abusos de poder que, según la Constitución Política, autorizan para interponerla”*.

En este sentido, la presente acusación consta de los siguientes capítulos acusatorios:

- a) Capítulo Primero:** Infringir gravemente y dejar sin ejecución la Ley N° 19.253, que Establece normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; la Ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica; y, la Ley N° 21.395, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022.

- b) Capítulo Segundo:** Infringir gravemente la Constitución Política de la República y las leyes al vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el haber acusado a una funcionaria de gobierno de delito como motivo de desvinculación del cargo, omitiendo como verdadera causa las

instrucciones indebidas que se le dio a dicha funcionaria en el marco del SEIA.

c) Capítulo Tercero: Dejar sin ejecución la Ley N° 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, por no implementar oportunamente en lo relativo a la atención de niños gravemente vulnerados en sus derechos.

d) Capítulo Cuarto: Dejar sin ejecución la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia por no implementar oportuna y adecuadamente las Oficinas Locales de la Niñez, pese a existir planes pilotos, autorizaciones presupuestarias, presupuestos autorizados por ley y un marco reglamentario suficiente para la puesta en marcha de las referidas oficinas locales.

2. LOS CAPÍTULOS ACUSATORIOS EN PARTICULAR.

A) CAPÍTULO PRIMERO: INFRINGIR GRAVEMENTE Y DEJAR SIN EJECUCIÓN LA LEY N° 19.253, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROTECCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS INDÍGENAS Y CREA LA CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA; LA LEY N° 20.530, QUE CREA EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA Y MODIFICA CUERPOS LEGALES QUE INDICA; Y, LA LEY N° 21.395 DE PRESUPUESTOS PARA EL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.

a.1) ANTECEDENTES

El artículo 1° de la Ley N° 19.253, que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, reconoce como principales etnias indígenas de Chile a la: Mapuche, Aimara, Rapa Nui o Pascuenses, la de las comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas, Diaguita y Chango del norte del país, las comunidades Kawashkar o Alacalufe y Yámana o Yagán de los canales australes.

Agregando esa disposición en su inciso final que: *“es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación.”*.

El artículo 38 de ese mismo cuerpo legal crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) como un servicio público, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, **sometido a la supervigilancia**¹⁹ del Ministerio de Planificación y Cooperación, actual **Ministerio de Desarrollo Social y Familia**²⁰.

¹⁹ Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española “supervigilancia” es sinónimo de “supervisar”, es decir, **ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros**. El poder de supervigilancia, es un poder jerárquico atenuado, que ejerce el Presidente de la República frente a sujetos de derecho, esto es, personas jurídicas dotadas de autonomía tanto en su existencia como en su actuación. SOTO KLOSS, Eduardo (2022). Derecho Administrativo, Principios, fundamentos y organización. 2.5 El poder jerárquico (Santiago, Thomson Reuters, Tomo I), pp. 571-584. Lo anterior consagrado en el artículo 29 inciso 3 de la Ley N° 18.575.

²⁰ El artículo 17 de la Ley N° 20.530 dispone que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia será el sucesor legal y patrimonial del Ministerio de Planificación.

A reglón seguido, en su artículo 39, asigna a CONADI, cuya dirección superior recae en un Consejo Nacional encabezado por un Director Nacional designado por el Presidente de la República, el carácter de “*organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional.*”.

Asignándole en lo que interesa a esta Acusación, entre otras, las siguientes funciones específicas:

En la letra e) del artículo 39, el “*velar por la protección de las tierras indígenas a través de los mecanismos que establece esta ley y **posibilitar a los indígenas y sus comunidades el acceso y ampliación de sus tierras y aguas a través del Fondo respectivo***” (destacado nuestro).

Y en su letra j) el “*sugerir al Presidente de la República los proyectos de reformas legales y administrativas necesarios para proteger los derechos de los indígenas*”.

Por su parte, el Párrafo 2º “Del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas” del Título II “Del Reconocimiento, Protección y Desarrollo de las Tierras Indígenas” de la misma Ley N° 19.253, crea dicho Fondo en su artículo 20 y le entrega su administración a CONADI.

En efecto, esa última disposición consagra como objetivos del Fondo:

“a). *Otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas, Comunidades Indígenas o una parte de éstas cuando la superficie de*

las tierras de la respectiva comunidad sea insuficiente, con aprobación de la Corporación.

Para obtener este subsidio se distinguirá entre postulaciones individuales y de comunidades.

Para las postulaciones individuales el puntaje estará dado por el ahorro previo, situación socio-económica y grupo familiar

Para las postulaciones de comunidades el puntaje estará determinado, además de los requisitos de la postulación individual, por su antigüedad y número de asociados.

Un Reglamento establecerá la forma, condiciones y requisitos de su operatoria;

*b) Financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, **en especial, con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales**, relativas a tierras indígenas en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferidas a los indígenas, provenientes de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas;*

c) Financiar la constitución, regularización o compra de derechos de aguas o financiar obras destinadas a obtener este recurso.

*El Presidente de la República, en un reglamento, establecerá el modo de operación del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.”*²¹ (destacado nuestro).

Es del caso señalar que el artículo 20 b) resulta **particularmente relevante** para afrontar reclamaciones violentas de tierras por parte de comunidades en la denominada macrozona sur del país mientras y el artículo 20 a) permite la compra para postulaciones individuales o colectivas mediante concursos.

En ese último sentido conviene recordar parte del Mensaje Presidencial del Expresidente Patricio Aylwin que dio origen a la Ley N° 19.253 en que expresó como objetivo de la reforma: “*Sabemos que hay conflictos por asuntos de tierras, y es evidente que no se pueden resolver de un día para otro todos esos problemas que se arrastran por décadas. Nuestro criterio es buscar solución, sobre la base que impere la justicia, que se llegue a acuerdos, que si es necesario se **negocien soluciones, que se suprima el recurso de la fuerza**, no sólo por los efectuados, sino que por todas las partes involucradas.*”²² (destacado nuestro).

Adicionalmente el artículo 21 de la Ley N° 19.253, en cuanto al financiamiento del Fondo, dispone que “**La Ley de Presupuestos de cada año dispondrá anualmente de una suma destinada exclusivamente al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.**” (destacado nuestro).

A su vez, el artículo 3° de la Ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Modifica Cuerpos Legales que Indica, encarga a esa repartición, entre otras, las siguientes funciones y atribuciones:

²¹ Véase el Decreto Supremo N° 395, de 1993, del Ministerio de Planificación, que Aprueba el Reglamento sobre el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.

²² Mensaje de la Ley N° 19.253.

En la letra a) del artículo 3º: **“Estudiar, diseñar y proponer al Presidente de la República las políticas, planes y programas sociales de su competencia**, en particular las orientadas a las personas o grupos vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, las familias y la erradicación de la pobreza, que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia **ejecute por sí o a través de sus servicios públicos dependientes o relacionados.**” (destacado nuestro).

En la letra d) del artículo 3º: **“Colaborar con el seguimiento de la gestión e implementación de los programas sociales que estén siendo ejecutados por los servicios públicos relacionados o dependientes de éste y de otros ministerios, mediante la evaluación y pronunciamiento a través de un informe de seguimiento de, entre otros, su eficiencia, su eficacia y su focalización.** *Estos informes de seguimiento de ejecución de los programas sociales podrán ser considerados en la asignación de recursos en el proceso de formulación del proyecto de Ley de Presupuestos y deberán ser puestos a disposición del Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia.*” (destacado nuestro).

En la letra p) del artículo 3º: **“Impartir instrucciones y ejecutar cualquier otra acción necesaria para que exista coherencia funcional entre las políticas, planes y programas sociales ejecutados por los servicios públicos relacionados o dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y coordinar su ejecución.**” (destacado nuestro).

En la letra q) del artículo 3º: **“Establecer las políticas, planes y programas a que deberán ceñirse los organismos e instituciones dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, o que se relacionen con el Presidente de la República por su intermedio,**

los cuales, anualmente, deberán elaborar un informe que dé cuenta de la implementación de las políticas señaladas.” (destacado nuestro); y,

En la letra v) del artículo 3º: “Presentar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, en el mes de septiembre de cada año, un informe de Desarrollo Social”.

Resulta conveniente reiterar, para comprender el sentido y alcance del artículo 4º de la Ley N° 20.530 que determina como cabeza de la organización del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, al Ministro de Desarrollo Social y Familia, y el artículo 23 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone que: “*Los Ministros de Estado, en su calidad de colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República, **tendrán la responsabilidad de la conducción de sus respectivos Ministerios, en conformidad con las políticas e instrucciones que aquél imparta.***” (destacado nuestro).

a.2) BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO DE TIERRAS Y AGUAS EN EL PRESUPUESTO 2022

La Partida 21, Capítulo 06, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 043, de la Ley N° 21.395, Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022, contempló para el Fondo de Tierras y Aguas un presupuesto total de M\$65.906.054.

Según información de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, a noviembre de 2022, se ha ejecutado un total de M\$27.823.448²³, esto es, un 42,2% del total.²⁴

Comprendiendo estos acusadores que la sola entrega de tierras no constituye la única y eficaz respuesta a las demandas indígenas y en particular, es previsible que al cierre del año 2022, el Presupuesto del Fondo de Tierras y Aguas presente una importante subejecución presupuestaria, o bien, sea objeto de una reasignación por parte del Ministerio de Hacienda con cargo a las facultades que le confiere la misma Ley de Presupuestos o el Decreto Ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado.

Si bien alguien podría sostener que esa cifra no dista radicalmente de la ejecución de los últimos ejercicios presupuestarios, la realidad es que ya ha sido relativamente superada la situación sanitaria causada por el Covid-19 que implicó, además del esfuerzo sanitario y restricciones en la libertad ambulatoria, medidas presupuestarias e inversiones extraordinarias así como reasignaciones importantes de recursos públicos.

²³ \$22.929.298 a octubre de 2022, según información de Dipres http://www.dipres.cl/597/articles-295206_doc_pdf.pdf.

²⁴ https://www.dipres.gob.cl/597/articles-300890_doc_pdf.pdf

FUENTE LEGAL	PRESUPUESTO TOTAL M\$	EJECUCIÓN AL 3° TRIMESTRE M\$	EJECUCIÓN A DICIEMBRE M\$
Ley N° 21.395 (Presupuesto 2022)	65.906.054	22.929.298 ²⁵	27.823.448 (noviembre de 2022) ²⁶
Ley N° 21.289 (Presupuesto 2021)	63.128.404	19.239.337 ²⁷	58.176.933 ^{28 29}
Ley N° 21.192 (Presupuesto 2020)	61.463.722	4.348.743 ³⁰	18.660.005 ^{31 32}
Ley N° 21.125 (Presupuesto 2019)	79.482.490	19.974.823 ³³	50.565.882 ^{34 35}

Muy por el contrario, en las sucesivos anuncios y lanzamientos del “Plan Buen Vivir” -aunque poco concretos en medidas- y en los debates de las sucesivas prórrogas del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia

²⁵ http://www.dipres.cl/597/articles-295206_doc_pdf.pdf.

²⁶ http://www.dipres.cl/597/articles-298267_doc_pdf.pdf.

²⁷ http://www.dipres.cl/597/articles-253763_doc_pdf.pdf.

²⁸ Desde M\$60.607.183.

²⁹ http://www.dipres.cl/597/articles-263972_doc_pdf.pdf.

³⁰ http://www.dipres.cl/597/articles-212128_doc_pdf.pdf .

³¹ Desde M\$21.686.83.

³² http://www.dipres.cl/597/articles-215397_doc_pdf.pdf.

³³ http://www.dipres.cl/597/articles-196129_doc_pdf.pdf.

³⁴ Desde M\$54.147.658.

³⁵ http://www.dipres.cl/597/articles-199345_doc_pdf.pdf.

en la Macrozona Sur, el Gobierno ha insistido en la importancia de la política de compras de tierras como solución a mediano y largo plazo.

La Ministra Secretaria General de Gobierno, doña Ana Lya Uriarte, lo expresó en los siguiente términos durante la discusión presupuestaria 2023: “*Como bien dijo el Presidente, hay tierras que el pueblo mapuche demanda, pero sobre ellas ya hay construidas ciudades y las personas que viven ahí también tienen que ser protegidas y resguardadas, pero a la vez tenemos que dar respuesta a una demanda histórica*”³⁶.

Así las cosas, la baja ejecución del Fondo de Tierras y Aguas no sólo implica dejar sin ejecución la Ley N° 21.395, Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022, sino que contradice los objetivos declarados por el propio Gobierno. **Lo anterior considerando que el Presupuesto para el Sector Público del año 2023, recientemente aprobado por el Congreso Nacional por la Ley N° 21.516, para el Fondo de Tierras y Aguas alcanza la cifra de \$84.896.601**³⁷.

Lo comprendió muy bien la Diputada Ericka Ñanco al sostener en noviembre último que: “*se está trabajando para ejecutar todo lo que se comprometió. Me comuniqué con el director de la CONADI (Luis Penchuleo) y me informó que los avances son de las compras del artículo 20b en específico*”³⁸.

Agregando la misma Diputada respecto a los efectos de esta subejecución presupuestaria que: “*Es importante considerar que si no se alcanza al 100%*

³⁶<https://www.minsepres.gob.cl/noticias/ministra-ana-lya-uriarte-detalla-alcances-del-plapara-convertirlo-en-ley/n-buen-vivir-lo-vamos-a-traer-al-congreso-nacional->

³⁷ https://www.dipres.gob.cl/597/articles-299340_doc_pdf.pdf.

³⁸ <https://www.ex-ante.cl/conadi-presenta-una-baja-ejecucion-del-fondo-de-tierras-y-aguas-indigena-solo-se-usado-el-35-del-presupuesto-anual/>, 10 de noviembre de 2022.

de la ejecución al 31 de diciembre, también vamos a tener problemas para el presupuesto del próximo año, cuestión que claramente este Gobierno no está dispuesto a transar. Como parlamentaria mapuche, me interesa que se ejecute el 100%, así es que vamos a estar pendientes de su ejecución”.

Así las cosas, considerando el rol de supervigilancia sobre labor de la CONADI que el artículo 38 de la Ley N° 19.253, le entrega al Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson Drago, estimamos **este ha dejado sin ejecutar el presupuesto 2022 de CONADI contemplado por la Ley N° 21.395**, Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022, transgrediendo y volviendo con ello ilusoria la aplicación de los artículos 20 y 21 de la referida Ley N° 19.253, respecto al Fondo de Tierras y Aguas; y, faltando concretamente a los deberes que le confiere las letras a), c), d), j), p) y q) del artículo 3° de la Ley N° 20.530, estatuto orgánico del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en orden a considerar, estudiar, proponer y ejecutar de mejor manera el presupuesto del Fondo.

a.3) COMPRA DE TERRENOS EN CONFLICTO TRANSGREDIENDO LO DISPUESTO EN LA LEY DE PRESUPUESTOS 2022

La Glosa N° 16 de la Partida 21, Capítulo 06, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 043 de la Ley N° 21.395 -Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022-, que corresponde a la Glosa N° 10 de la misma asignación en el Presupuesto 2023 recientemente aprobado por el Congreso Nacional, dispone que:

“La priorización de estos recursos se efectuará en virtud del artículo 6° del Decreto Supremo N° 395, de 1993, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Respecto de la lista de espera de las comunidades que tengan aplicabilidad para la compra, podrá priorizarse aquellos cuyos predios presentados para compra se encuentren dentro o colindantes al título

*reconocido en respectivo informe jurídico administrativo que reconoce el problema de tierras y **siempre que inmuebles cuya posesión o mera tenencia no se encuentre de ninguna forma perturbada**, debiendo prelarse de conformidad con el criterio de mayor antigüedad de la fecha de reclamación respectiva, incorporando a la totalidad de las familias que han sido reconocidas en el informe jurídico administrativo a que se refiere el artículo 6 del Decreto Supremo N° 395, de 1993, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para lo cual se procederá a actualizar el número de beneficiarios con los informes técnicos respectivos en los casos que la fecha de dicho informe sea superior a un período de 6 años. En la resolución que aprueba el financiamiento de la compra se consignará el cumplimiento de la demanda de tierra a que se refiere la letra b) del artículo 20 de la ley N° 19.253. Asimismo, se deberá privilegiar a aquellas comunidades que no hayan sido beneficiadas con anterioridad en virtud del artículo 20 letra b) de la ley N° 19.253” (destacado y subrayado nuestro).*

No obstante el claro tenor literal de la disposición legal transcrita, por información de prensa en las últimas semanas³⁹, CONADI habría adquirido al amparo de la letra b) del artículo 20 de la Ley N° 19.253, al menos dos propiedades cuya posesión o mera tenencia se encontraban perturbadas, como por lo demás lo reconoce la propia información divulgada por ese organismo.

En efecto, en octubre de 2022, CONADI informó la compra para la Comunidad Amuley Lof Pichi Pantano I, de la comuna de Traiguén, de 668 hectáreas adquiridas bajo la modalidad de copropiedad. Agregando textualmente que: “*El proceso, amparado en el artículo 20 letra b de la Ley*

³⁹<https://ellibero.cl/actualidad/conadi-compro-tierras-a-dos-comunidades-que-hicieron-usurpaciones-en-la-araucania/>

Indígena, constituye una restitución territorial basada en el Título de Merced N°12 de 1885, otorgado al lonko Juan Marín en el sector Pantano, antigua subdelegación de Lumaco, que hoy pertenece a la comuna de Traiguén.”⁴⁰

Asimismo, en diciembre de 2022, la misma CONADI informó la compra para la Comunidad José Huenchual 2, de la comuna de Lautaro, de 347,83 hectáreas del Fundo El Vergel, además del derecho de aprovechamiento de aguas por doscientos litros por segundo desde el Río Muco, con lo que CONADI considera se “*cierran completamente su demanda territorial y dan solución total al problema de tierras que les afectaba.*” ⁴¹

Así las cosas CONADI contra el tenor literal de la Glosa presupuestaria N° 16 del Capítulo 06 de la Ley N° 21.395, Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022, adquirió inmuebles que tiene por ley prohibido adquirir. Con ello vulneró obviamente también la intención del legislador que quiso desincentivar la utilización de medios de hecho -tomas violentas o usurpaciones de terreno- que buscaba evitar se priorizaran estos medios perjudicando postulaciones individuales o comunitarias de largos años amparados en la letra a) del mismo artículo 20 de la Ley N° 19.253.

Respecto a la responsabilidad que le cabe al Ministro Giorgio Jackson que, estando en conocimiento de esta situación no actuó para impedirla, esa circunstancia constituye una transgresión a las disposiciones de la Ley N° 21.395 -en particular la Glosa ya reseñada y aludida-, como las disposiciones de los artículos 20 y 21 de la Ley N° 19.253 y del principio de juridicidad del artículo 6° de la Constitución Política de la República que somete la acción

⁴⁰<https://www.conadi.gob.cl/noticias/comunidad-mapuche-realiza-primera-ceremonia-en-terreno-post-pandemia-para-recibir-tierras-de-conadi>

⁴¹<https://www.conadi.gob.cl/noticias/comunidad-mapuche-jose-huenchual-2-de-lautaro-restituyo-347-hectareas-de-tierras-amparada-en-titulo->

de los órganos del Estado a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y los obliga a garantizar el orden institucional de la República, principio que supone “*que el ejercicio de las competencias de las autoridades públicas se realice de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, de forma que se disminuya el riesgo de la extralimitación de funciones*”⁴².

Alternativamente, en el improbable caso que el Ministro Jackson alegara desconocimiento de esta situación, ello en sí mismo constituye una negligencia inexcusable para un Ministro de Estado, pues el solo desconocimiento supondría una falta grave de diligencia y cuidado que transgrede por cierto el deber de supervigilancia de CONADI que le atribuye el artículo 1° de la Ley N° 19.253 y las letras d) y p) del artículo 3° de la Ley N° 20.530, por cuanto no cumplió con sus obligaciones de seguimiento de la gestión e implementación de los programas de CONADI y de impartirle instrucciones o ejecutar cualquier otra acción necesaria para la coherencia funcional de los mismos. Lo que se suma a las transgresiones ya enunciadas, de manera previa, a la Ley N° 21.395.

a.4) FALTA DE UNA AGENDA INDÍGENA

En mayo de 2022, el Gobierno de Chile anunció el denominado “Plan Buen Vivir”⁴³ que según se señala, “*se hace cargo y reconoce la deuda centenaria entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche*”; “*duplica el presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para la compra de predios y se mejoran los mecanismos para hacer más ágil la restitución de tierras, una demanda fundamental de los pueblos originarios*” e incluía

⁴² Considerando 48° de la Sentencia Rol N° 790-2007, de 11 de diciembre de 2007, del Excmo. Tribunal Constitucional.

⁴³ <https://www.gob.cl/noticias/gobierno-anuncia-el-plan-buen-vivir-para-avanzar-en-una-agenda-de-reconocimiento-y-dialogo-con-los-pueblos-indigenas/>

medidas como *“Fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia en las regiones de Biobío y Araucanía, como el narcotráfico y el robo de madera; y que dé garantía a todas las partes de que se perseguirán los delitos como la ley mandata”*; y, *“Como una herramienta para brindar seguridad a las y los ciudadanos, se decreta Estado de Emergencia para el resguardo de las rutas, que permita el libre tránsito de las personas y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios”*. Estado de Excepción que se ha ido sucesivamente prorrogando con el consentimiento del Congreso Nacional.⁴⁴

Además de la baja ejecución presupuestaria del Fondo de Tierras y Aguas a que se hizo ya extensa referencia, al día de hoy la implementación del “Plan Buen Vivir” y en general la política del Gobierno en la materia, presenta al menos dos problemas graves:

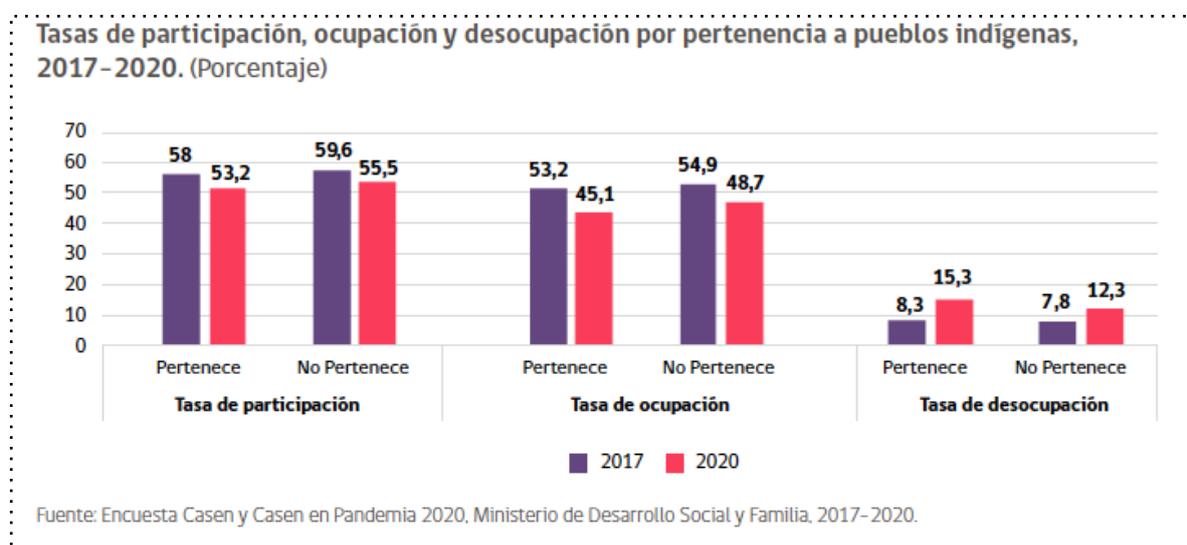
Primero, no se han materializado medidas concretas hacia una solución de largo plazo, una verdadera agenda indígena, para hacer frente a las necesidades de los chilenos pertenecientes a las etnias reconocidas por la ley. Segundo, las pocas medidas anunciadas por el Gobierno en la materia se han centrado en la etnia mapuche olvidando las necesidades de las restantes 9 etnias reconocidas por la ley, vulnerando el principio de igualdad.

Respecto al primer punto, entendiendo el contexto de rezago económico y los constantes atentados terroristas que se perpetúan en la denominada macrozona sur, las políticas del Gobierno suponen una mirada reactiva a hechos de violencia o urgencias circunstanciales.

⁴⁴<https://www.gob.cl/noticias/gobierno-anuncia-el-plan-buen-vivir-para-avanzar-en-una-agenda-de-reconocimiento-y-dialogo-con-los-pueblos-indigenas/>

Así por ejemplo, respecto a la política de tierras, es pertinente avanzar en primero lugar en el Catastro de Tierras -suspendido por la actual Administración- y que generará los insumos para determinar los terrenos ya restituidos y los aún pendientes, lo que permitiría implementar un mecanismo de entrega de tierras claro, transparente y con certezas jurídicas.

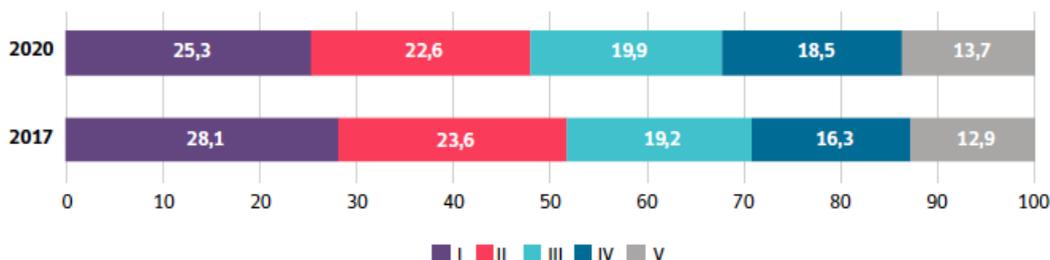
No es posible atribuir el carácter de relevantes, sustanciales o importantes a comunicados de prensa o visitas esporádicas a la macrozona sur, pero que no van acompañados de medidas o políticas permanentes⁴⁵. Máxime cuando el propio Informe de Desarrollo Social 2022⁴⁶, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia grafica, entre otros datos muy relevantes, por ejemplo, las cifras de desempleo o pobreza ostensiblemente mayor entre los chilenos pertenecientes a una etnia indígena, según el siguiente detalle:



⁴⁵ <https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/ministro-jackson-viajo-a-la-araucania-para-reimpulsar-el-plan-buen-vivir/2022-09-23/162758.html>

⁴⁶ Informe de Desarrollo Social, disponible en: <https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/storage/docs/ids/Informe-desarrollo-social-2022.pdf>.

Distribución de los hogares según quintil de ingreso autónomo per cápita del hogar por pertenencia de la jefatura a pueblos indígenas, 2017-2020 ^{a/}. (Porcentaje)



Fuente: Encuesta Casen y Casen en Pandemia 2020, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2017-2020.
^{a/} No considera los casos "sin información".

Adicionalmente, según se consigna en los medios de comunicación⁴⁷, el Ministro Giorgio Jackson habría sido despojado de la coordinación del llamado Plan “Buen Vivir” que, por recomendaciones de las Naciones Unidas, habría pasado a ser coordinado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia -de donde originalmente venía el propio Jackson- y el rol de Desarrollo Social habría quedado muy marginado. Un área que históricamente depende de Desarrollo Social y en una región donde se requiere una intervención intensa por parte de este Ministerio, pierde relevancia y consistencia al interior del gobierno y el Ministro a cargo, no parece importarle o preocuparle.

En cuanto al segundo punto, los acusadores entendemos que la política y una agenda indígena debe ser una mirada integral para las diez etnias que habitan en nuestro país, puesto que pese a que el pueblo mapuche constituya una amplia mayoría numérica, ese no puede constituir el único criterio para la formulación de políticas públicas por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

⁴⁷ <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/por-que-uriarte-coordinara-el-plan-para-contener-crisis-en-la-araucania-y-en-que-pie-quedan-toha-y-jackson/4DAYBNKZZD2RJKWE6HSQSMAUA/>

De esta manera, en ambos puntos, al Ministro Jackson, en cuanto responsable de la conducción del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ha dejado de ejecutar y transgredido los artículos 1º y 39 de la Ley N° 19.253, que reconoce en pie de igualdad a las diversas etnias y asegura el desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, en relación a las letras a); d); p) y, q) del artículo 3º de la Ley N° 20.530, que le facultan al Ministro a diseñar y proponer planes y programas sociales en la materia; colaborar con el seguimiento de la gestión e implementación de los programas de CONADI; e, impartir instrucciones y ejecutar acciones necesarias para la coherencia funcional entre las políticas, planes y programas sociales ejecutados por los servicios públicos relacionados o dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y coordinar su ejecución, respectivamente.

POR TANTO, resulta atribuible directamente al Ministro de Desarrollo Social y Familia Giorgio Jackson Drago, la transgresión de la Ley N° 19.253, que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; La Ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Modifica Cuerpos Legales que Indica; y, de la Ley N° 21.395, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022, en la forma indicada en el cuerpo de este escrito.

B) CAPÍTULO SEGUNDO: INFRINGIR GRAVEMENTE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Y LAS LEYES AL VULNERAR EL PRINCIPIO DE PROBIDAD Y LA IMPARCIALIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA), Y AL HABER ACUSADO A UNA FUNCIONARIA DE GOBIERNO DE DELITO COMO MOTIVO DE DESVINCULACIÓN DEL CARGO, OMITIENDO COMO VERDADERA CAUSA LAS INSTRUCCIONES INDEBIDAS QUE SE LE DIO A DICHA FUNCIONARIA EN EL MARCO DEL SEIA.

b.1) ANTECEDENTES

Nuestra Carta Fundamental consagra una serie de principios fundamentales para un Estado Constitucional y Democrático de Derecho: la primacía de la persona humana, la servicialidad del Estado, la juridicidad, la probidad y la transparencia. Estos principios constitucionales no son meras declaraciones de buena voluntad. El constituyente los ha consagrado en los artículos 1, 7 y 8° de la Constitución Política, respectivamente. A su vez, el legislador ha incorporado una serie de normas que desarrollan tanto la probidad como la transparencia. Estos principios sujetan a todos quienes ejercen una función pública, como es el caso de los Ministros de Estado y, por ende, deben obligatoriamente ser tomados en cuenta por nuestros servidores públicos, y aplicarlos y cumplirlos⁴⁸.

En nuestra legislación, el principio de la probidad administrativa consiste en **observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo**, con preeminencia del interés general sobre el

⁴⁸ RAVEST, Maximiliano (24/04/2015). “Probidad y transparencia: Principios fundamentales del Estado de Derecho”. Disponible en: <https://www.diarioconstitucional.cl>.

particular (artículo 52 inciso 2 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado)⁴⁹.

La probidad es mucho más que no cometer delitos funcionarios, como la malversación de fondos públicos o el tráfico de influencias. Implica una actitud de vida, una visión y una misión laboral. Su aplicación efectiva significa tener un Chile con menos corrupción y más justo para todos nuestros compatriotas⁵⁰.

Patricia Hidalgo Jeldes fue hasta el miércoles 30 de noviembre de 2022 la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Desarrollo Social y Familia, de la Región Metropolitana del Gobierno del Presidente de la República Gabriel Boric. No alcanzó a llegar a fin de año, ni menos completar un año de ejercicio en su cargo.

¿Por qué es relevante su testimonio y el análisis de sus acusaciones? Porque la Señora Hidalgo no es una denunciante cualquiera, sino que tiene una trayectoria y un vasto recorrido por el aparato público y un perfil político que la posiciona mucho más cerca del Gobierno que de la oposición. Por ello, su testimonio cobra especial importancia y debe ser analizado en profundidad, con el objeto de establecer uno de los fundamentos más importantes de esta acusación.

Patricia Carolina Hidalgo Jeldes, 48 años, nació en 1974, en Valparaíso, pero creció en Viña del Mar. Es hija de 2 profesores: Lucía Jeldes y Wilson Hidalgo, de quien ha contado que militó en el PC. Es viuda, tiene 3 hijos y es

⁴⁹ Cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

⁵⁰ *Ibidem*, pie de página 48 anterior.

la mayor de 2 hermanos. Es militante del Partido Por la Democracia desde el año 1999.

Profesional de apoyo de la secretaría regional ministerial de Educación de Valparaíso (...) durante el gobierno de Ricardo Lagos. Al año siguiente se instaló en Santiago y se desempeñó como jefa del departamento de gestión y correspondencia presidencial entre 2006 y 2008, en el primer gobierno de Michelle Bachelet. También fue parte del departamento de recursos humanos de la Presidencia en 2009, y coordinadora administrativa de dirección de gestión ciudadana, en 2010. Trabajó en la Municipalidad de Santiago con la entonces alcaldesa Carolina Tohá (PPD), como responsable de la ejecución del proyecto Escuelas Seguras e Integradas, el Programa Barrio en Paz y la Dirección de Seguridad Vial, entre 2013 y 2014. Entre 2014 y 2016 coordinó el programa de salud mental escolar de Junaeb. Tras asesorar entre 2011 y 2014 al músico y ex concejal por Ñuñoa, postuló al cargo en un cupo PPD de la lista Pacto Nueva Mayoría por Chile, que incluía al PC. Obtuvo 2.238 votos, un 25,36% de las preferencias, con lo cual fue electa concejal, en 2016⁵¹.

Fue designada Seremi de Desarrollo Social en abril del año 2022 y se desempeñó en sus funciones hasta el 30 de noviembre de 2022.

¿Qué motivó su renuncia?

En una entrevista con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío Chile, la ex autoridad explicó cómo fueron sus últimos días en el Gobierno, y relató que recibió llamados para aprobar proyectos pese a sus reparos como profesional. Recuerda uno en particular: el proyecto Mall Vivo en Ñuñoa. “En

⁵¹<https://www.ex-ante.cl/perfil-20-cosas-que-hay-que-saber-sobre-la-exseremi-que-complico-a-la-moneda-al-denunciar-presuntas-presiones-para-aprobar-proyectos/>

esa ocasión la delegada regional nos cita a una reunión a los seremi y nos instruye que hay que votar a favor de ese proyecto”, desclasifica⁵².

Durante su paso por la institución, según su testimonio, Hidalgo fue objeto de presiones de parte de autoridades de Gobierno para aprobar o rechazar proyectos sometidos a su decisión como autoridad técnica.

Por ejemplo, cuenta que un día fue citada junto a sus pares y se les instruyó votar a favor del proyecto Mall Vivo Ñuñoa. Pero, ¿cuál es el mecanismo utilizado? Luego que los proyectos ingresan al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), éste emite su recomendación favorable o en contra en el Comité de Evaluación. Tras esto, se produce la instancia definitiva donde los seremis aprueban o rechazan la Calificación Ambiental de ciertos proyectos. Es ahí donde entraba en acción la ahora ex seremi Patricia Hidalgo⁵³.

De la entrevista que Patricia Hidalgo dio a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío Chile, y que citamos íntegramente más adelante, se desprende de forma inequívoca que el Ministro de Desarrollo Social y Familia, **Kenneth Giorgio Jackson Drago, estaba en pleno conocimiento de las presiones políticas que recibía la ex SEREMI Patricia Hidalgo, pero además, favorecía y apoyaba dichas presiones.**

En un primer momento, previo a la entrevista, el Ministerio de Desarrollo Social emitió el comunicado estándar frente a este tipo de renuncias, sin dar cuenta de una situación anómala en la salida de la Seremi del cargo.

⁵² Biobío Chile (03/12/2022): “Ex seremi acusa a Gobierno que la obligaban a favorecer proyectos que ella cuestionaba técnicamente”. Disponible en: <https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/entrevistas/2022/12/03/ex-seremi-acusa-a-gobierno-que-la-obligaban-a-favorecer-proyectos-que-ella-cuestionaba-tecnicamente.shtml>

⁵³ *Ibidem*.



Ministerio de Desarrollo Social y Familia

@MinDesarrollo

...

Compartimos comunicado en donde se informa, que se ha aceptado la renuncia voluntaria de la Secretaria Regional Ministerial de la región Metropolitana @seremimdsrm, Patricia Hidalgo Jeldes.



30 de noviembre de 2022

Comunicado de prensa

Este miércoles 30 de noviembre de 2022 el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha aceptado la renuncia de la Secretaria Regional Ministerial de la región Metropolitana, Patricia Hidalgo Jeldes.

A partir de este momento operará la subrogancia por el sólo ministerio de la ley, a cargo de la profesional Julia Standen Rocco, quien se desempeña como Coordinadora del Área de Estudios e Inversiones en la referida Secretaría Regional Ministerial.

El Gobierno de Chile agradece la labor desempeñada por Patricia Hidalgo Jeldes.

3:09 PM · Nov 30, 2022

Posteriormente, luego de conocida la entrevista, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia cambió su versión y emitió un comunicado muy distinto a principios de diciembre donde señala lo siguiente:



4 de diciembre de 2022

COMUNICADO

Ante diversas acusaciones publicadas en un medio nacional, el Ministerio señala:

1. El pasado 30 de noviembre desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se informó que se había aceptado la renuncia de la Secretaria Regional de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo Jeldes.
2. La decisión de solicitarle la renuncia se debe a la causal de pérdida de confianza, lo que fue motivado por haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias -cuestión que es obligación de toda autoridad política y funcionario público, ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle ubicado en la Región Metropolitana.
3. Debido a estos antecedentes, además de la mencionada petición de renuncia, el martes 29 de noviembre el Ministerio de Desarrollo Social instruyó que se iniciara un sumario para identificar todas las responsabilidades involucradas, y también se presentó una denuncia ante el Ministerio Público en la misma fecha.

Frente a este comunicado, el Honorable Senador Fidel Espinoza Sandoval escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter [@fidelsenador](#): *“Eso es una falsedad absoluta de [@GiorgioJackson](#). Una nueva de sus mentiras y falsedades a las que nos tiene acostumbrados. Ya escucharemos a la exseremi en el Congreso. Esta falsedad denigrando a una gran profesional refleja en su esencia quien es el ministro que tenemos”*⁵⁴.

⁵⁴<https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/12/04/senador-espinoza-ps-reitera-defensa-de-exseremi-es-una-falsedad-absoluta-de-jackson.html>

La entrevista completa que dio Patricia Hidalgo a Radio Bio Bio Chile y por medio de la cual se dio a conocer públicamente esta polémica situación dice lo siguiente⁵⁵:

“– ¿Cuándo empezaron los problemas?

Desde el principio hubo dificultades. Cuando se realizó la votación por Plaza Egaña, yo todavía no podía asumir el cargo. En esa votación entiendo que todos los seremi rechazaron el proyecto favoreciendo a los vecinos, por cierto era mi postura también, de rechazo a Fundamenta de Egaña Sustentable. En esa oportunidad al parecer tuvieron varios conflictos después.

– ¿Pero cuál fue su primera votación?

Luego viene la votación del Mall Vivo que también está en Ñuñoa. Esto tiene que haber sido en septiembre, y en esa ocasión la delegada regional nos cita a una reunión a los seremi y nos instruye que hay que votar a favor de ese proyecto y que como obviamente es un proyecto que afecta la calidad de vida de las personas algunos iban a poder estar en contra pero asegurando siempre que el proyecto se aprobara porque era lo que correspondía *de acuerdo a la forma técnica. Entonces yo le digo ok, como van a ser votos testimoniales, como fui concejala y estuve con los vecinos dando entrevistas y fui parte del movimiento ciudadana, creo que a mí me*

⁵⁵Bio Bio Chile (03/12/2022). “Ex seremi acusa a Gobierno que la obligaban a favorecer proyectos que ella cuestionaba técnicamente”. Disponible en: <https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/entrevistas/2022/12/03/ex-seremi-acusa-a-gobierno-que-la-obligaban-a-favorecer-proyectos-que-ella-cuestionaba-tecnicamente.shtml>.

corresponde poder rechazarlo porque además es lo que yo haría si pudiera votar a consciencia y sin recibir instrucciones.

– *¿Pudo mantener su voluntad?*

Ella (delegada regional) me dice que es una decisión que la va a tomar ella, y le insistí delante de todos mis colegas que yo iba a rechazar. Así también se opuso la seremi de Agricultura. Y me dijo ok, te va a llamar mi jefe de gabinete.

– *¿La llamó?*

Más tarde me llamó él y me dijo: ‘Seremi, ok, si usted quiere rechazar, rechace no más’. Pero desde ahí nuestra relación cambió porque ella nunca más me contestó el teléfono. Todo lo que yo le quería preguntar tenía que ser por WhatsApp, y ese día yo rechacé y obviamente salió en las noticias que se aprobaba el Mall Vivo con el rechazo de la seremi de Desarrollo Social y la de Agricultura.

– *¿Y después qué pasó?*

Después de eso vino la votación de Américo Vespucio Oriente tramo 2. También me empezaron a llamar, a insistir que yo tenía que votar y les dije lo mismo. Entiendan no puedo, yo fui concejala, estuve detrás de los proyectos medioambientales que afectan la calidad de vida, no voy a aprobar, porque lo único que uno tiene es su consecuencia. Pero les dije que mejor no iba a asistir, tengo tantas cosas en la agenda que sinceramente tendría que hacerme un espacio para poder ir a votar y no puedo.

– *¿No asistió?*

A los 5 minutos me llama mi jefa directa, la subsecretaria. Me dice Patricia te llamo para decirte que hoy día hay una votación del SEA y se va a votar Américo Vespucio Oriente. Y le dije si sé, pero no puedo ir porque tengo actividades oficiales que hacer. Y me dice tienes que ir esa es la instrucción.

– *¿Y cómo votó?*

Por esas cosas de la vida yo me concentré y me enfoqué en la situación, y me acordé que mi casa, de la cuál soy propietaria, está en el área de influencia. Entonces cuando tuve que votar me inhabilité diciendo que no podía votar, a lo cual el director del SEA dice que sí, que está correcto. Y creo que eso les molestó mucho porque querían que yo votara a favor.

– *¿Qué pasó con el último proyecto de Quilicura?*

Luego viene este proyecto de Quilicura de la planta de tratamiento. Obviamente lo iba a rechazar. Me habían escrito una cantidad de vecinos, 200 correos electrónicos es poco, pidiéndome rechazarlo. Hay cosas que a mí me pueden hacer sentido desde mi juicio de valor y otras desde lo más técnico. Cuando habló de lo técnico alguien me va a decir que el proyecto cumple con la normativa ambiental, pero claro una normativa que es super poco extremista.

– *¿Cómo votó al final?*

Termino aprobando porque recibo nuevamente un llamado de la subsecretaria diciendome que tengo que presentarme a votar. Le dije que ok, que me voy a presentar pero voy a

rechazar. Y ella me dice que no, tienes que aprobarlo. Le pregunto por qué, y me dijo que son instrucciones de la ministra del Interior. Y yo le pregunto: ¿De la ministra Tohá? Y me dijo Patricia son instrucciones de Interior. Le digo que es súper impropio lo que me estaba diciendo pero que si ella me lo dice, que es mi jefa directa, voy a ir y votar tal cual como me estas indicando que lo haga pero en contra de toda mi voluntad.

– ¿Qué pasó después de la votación?

Le mandé un Whatsapp a ella y a la delegada diciéndole que me parecía super injusto que a mi me hubiesen obligado a votar, obligado a aprobar cuando la seremi de Agricultura no se presentó a votar y obviamente que es por lo mismo, porque ella es tan medioambientalista como yo.

– *Una de tus mayores críticas es que el SEA necesita mejoras. ¿Sentiste que las autoridades superiores a ti tomaron en cuenta tus solicitudes?*

Creo que sí en el discurso. Me decían que ellas también eran medioambientalistas, que también creían que había que hacer cambios, y le decía que la ciudadanía necesita más de nosotros. (...) A la gente se le provoca una disonancia porque por un lado estas diciendo que eres medioambientalista, que quieres transformar, pero por otro lado solamente apruebas proyectos que son dañinos para ellos. Encontré que no hubo sintonía con esa postura mía, que era poder marcar una diferencia para que los vecinos y vecinas sientan que algo vamos a hacer por ellos. Hasta ahora yo no he visto a nadie diciendo vamos a hacer cambios en la legislación, a lo mejor hay

iniciativas. Leí una entrevista después de lo de Quilicura, de la directora del SEA, que sí van a haber cambios.

– ¿Usted tuvo algún contacto con el ministro Jackson previo a la reunión donde le informó su salida?

No nunca.

– ¿Usted en algún minuto pensó que era posible su salida del cargo?

Jamás. Sabía que habían muchas diferencias con la subsecretaria en este tema y en otros, pero nunca lo vi venir. Porque al final del día las personas como yo que tenemos trayectoria, un trabajo en terreno, técnico y político impecable, esperamos que si algún día nos sacan sea por temas de gestión, de trabajo, por errores administrativos pero no por temas relacionados con estas situaciones que tienen que ver justamente con el programa de gobierno y cómo acercarme a un programa de gobierno tan ambicioso.

– **¿Qué argumentos le entregó el ministro Jackson al informarle de tu salida?**

Me dijo que en lo formal era por pérdida de confianza. Y que en lo informal habían otras situaciones que habían ocurrido. Ahí le pregunté cómo cuáles y si él me podía decir en lo informal que era, ya que él y yo nos dedicamos a la política y nos íbamos a seguir viendo probablemente durante los próximos años en algunos espacios. Me dijo sí, hay una mala evaluación de tu trabajo particularmente de la subsecretaria Perales y la delegada regional Constanza Martínez porque

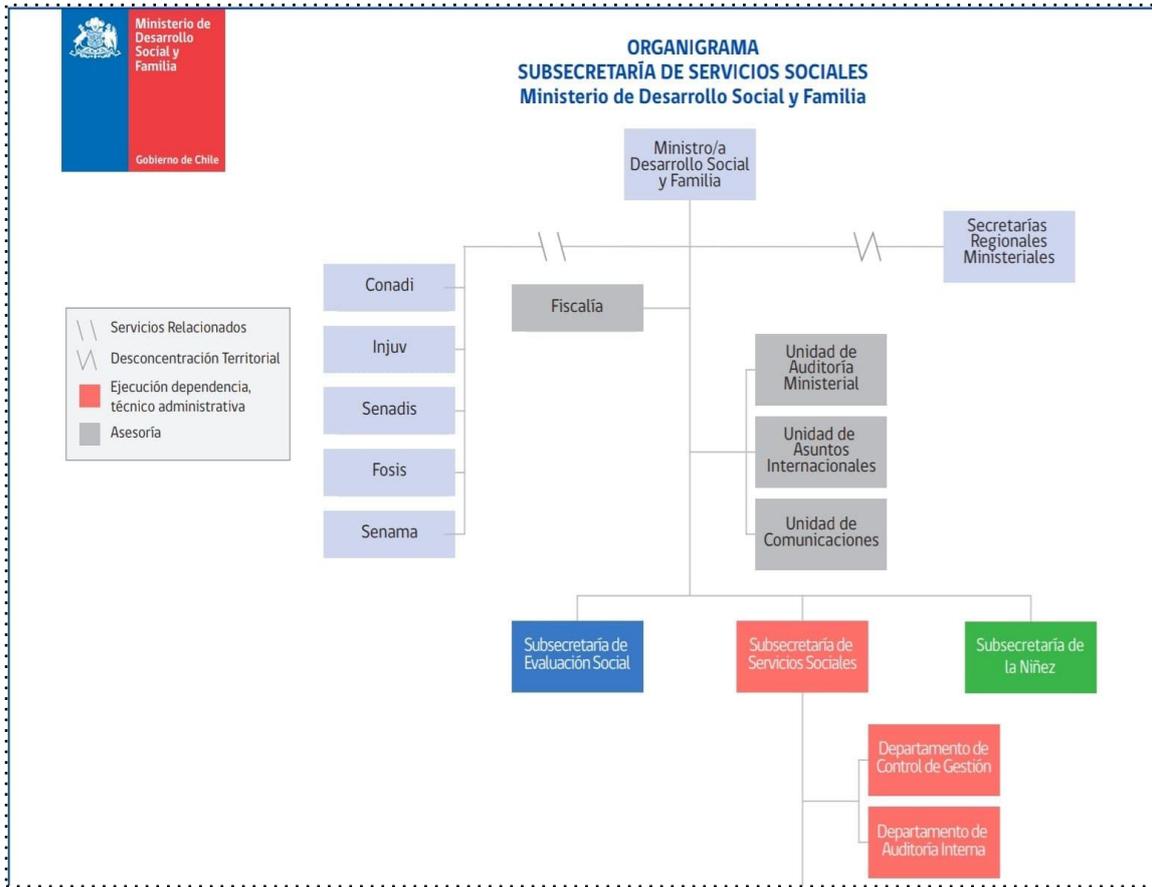
has tenido diferencias con ellas, no acatar la autoridad y descoordinación con ellas”.

Como ya señalamos anteriormente, de la entrevista se desprende que el Ministro Kenneth Giorgio Jackson Drago estaba en pleno conocimiento de las presiones políticas que recibía la ex SEREMI Patricia Hidalgo, y que además, favorecía y apoyaba dichas presiones. Eso explica, cronológicamente, de qué manera las decisiones de Patricia Hidalgo y su posición frente a las votaciones respecto de ciertos proyectos, le terminaron pasando la cuenta y justificando su salida del cargo.

Si bien no se desprende que sea el Ministro Giorgio Jackson quien presiona activamente a la ex Seremi Hidalgo para que vote de una u otra forma, como si lo habría hecho la Subsecretaria Perales o la Delegada Presidencial Martínez, por órdenes del Ministerio del Interior y eventualmente de la propia Ministra Toha, lo que sí es evidente, es que el Ministro Jackson opera sobre la base del conocimiento de estos antecedentes y toma sus decisiones, en lo informal, por la negativa de la ex Seremi Hidalgo de seguir las instrucciones y direcciones en estas materias.

El artículo 4° de la Ley N° 20.530, ya referida precedentemente dispone que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia está integrado por un Ministro de Desarrollo Social y Familia, una Subsecretaría de Evaluación Social, una Subsecretaría de Servicios Sociales, una Subsecretaría de la Niñez, y las Secretarías Regionales Ministeriales de Desarrollo Social y Familia.

Así es posible verificarlo en Transparencia Activa, en el numeral 3, denominado: “Estructura orgánica, y facultades, funciones y atribuciones”, sección: “Organigrama”:



El artículo 6° de la Ley N° 20.530 dispone lo siguiente:

“Artículo 6°.- La Subsecretaría de Servicios Sociales estará a cargo del Subsecretario de Servicios Sociales, quien será su jefe superior. En particular le corresponderá colaborar especialmente con el Ministro en el ejercicio de las funciones establecidas en las letras a), en el marco de las atribuciones vigentes de dicha Subsecretaría y en coordinación con la Subsecretaría de Evaluación Social, ñ) a excepción del Subsistema de Protección Integral a la Infancia "Chile Crece Contigo", establecido en el Título II de la ley N° 20.379, o) y p), a excepción del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, q), r), s), u) y x) del artículo 3°. Le corresponderá, además, la coordinación de los servicios públicos dependientes y de los sometidos a la supervigilancia del

Presidente de la República por medio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a excepción del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

La Subsecretaría de Servicios Sociales tendrá también a su cargo la dirección administrativa de las Secretarías Regionales Ministeriales de Desarrollo Social y Familia y la administración y servicio interno del Ministerio”.

En este contexto, la grave denuncia realizada por la ex SEREMI de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana, Patricia Carolina Hidalgo Jeldes, sobre presiones políticas, instrucciones indebidas, irregularidades y malas prácticas de autoridades del actual Gobierno, incluyendo entre otros, a la Subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales Flores; a la Delegada Presidencial Regional Metropolitana de Santiago, Constanza Martínez y, especialmente, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, para aprobar determinados proyectos sujetos a evaluación ambiental, **constituye un indicio plausible de irregularidades y faltas a la probidad por parte del propio Ministro Kenneth Giorgio Jackson Drago**, lo que implicaría gravísimas infracciones al artículo 8° de la Constitución Política, a la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (artículos 3°, 13°, 52°, 53° y 62°), a la Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado (artículo 3° y 11 bis), a la Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses (artículos 1° y 2°), y los artículos 9° bis y 86 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, todo lo cual se detallará más adelante en este libelo acusatorio.

Pero eso no es todo: la reacción del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por indicación e instrucción del propio Ministro Jackson, frente a las

revelaciones de la ex Seremi Hidalgo, es lo que vulnera aún más gravemente el principio de probidad administrativa. No bastando la petición de renuncia, el Ministerio comunica a la opinión pública que Patricia Hidalgo había cometido un delito (no haber denunciado un delito) y que estaba involucrada en una investigación por su negligencia en la no denuncia de un hecho de grave vulneración de un menor.

Es decir, a partir del momento en que la ex Seremi da su versión a la prensa, toda la maquinaria política y comunicacional del Ministerio, por indicación del Ministro Jackson, se vuelcan sobre ella y lejos de agradecerle por su gestión, se le imputan delitos, negligencias y desidia frente a un caso de extrema gravedad que habría ocurrido en dependencias vinculadas a su Cartera de Estado.

b.2) IRREGULARIDADES DENUNCIADAS POR PATRICIA CAROLINA HIDALGO JELDES

El medio de comunicación EX ANTE ha señalado lo siguiente sobre estas denuncias de irregularidades⁵⁶:

“La ex seremi Patricia Hidalgo presentó en Contraloría un escrito de 22 páginas donde acusó presuntas presiones desde Interior para respaldar una solución sanitaria en Quilicura que beneficiaba a una empresa con un director del PPD, y de la delegada metropolitana para aprobar un mall en Ñuñoa. Pidió iniciar una investigación administrativa por presuntas faltas a la legalidad y probidad. Su salida del cargo—por supuestamente no denunciar un presunto

⁵⁶ EX ANTE (7/12/2022). “Cuáles son las presuntas irregularidades denunciadas por la ex seremi de Desarrollo Social a Contraloría (y por qué pidió citar a Boric y Jackson)”. Disponible en: <https://www.ex-ante.cl/cuales-son-las-presuntas-irregularidades-denunciadas-por-la-ex-seremi-de-desarrollo-social-a-contraloria-y-por-que-pidio-citar-a-boric-y-jackson/>.

delito sexual, dijo el gobierno— abrió un flanco para el ministro Jackson, quien ha sido respaldado por La Moneda y el PPD.

*Qué observar. La sicóloga Patricia Hidalgo (PPD), quien hasta el 30 de noviembre ejerció como secretaria regional ministerial (Seremi) de Desarrollo Social metropolitana, recurrió este miércoles a Contraloría en medio de la ofensiva que inició tras su salida del cargo. **El caso abrió un flanco para el ministro Giorgio Jackson, quien paralelamente ha recibido críticas por la invalidación de licitaciones para atender a niños vulnerables, frente a lo cual ha sido respaldado por La Moneda.***

Con su abogado Marcelo Castillo, Hidalgo presentó un escrito de 22 páginas donde pidió al ente fiscalizador de los organismos públicos iniciar una investigación administrativa por presuntas faltas a la legalidad y probidad que observó en sus 8 meses como seremi (llegó en abril al cargo).

En este marco pidió tomar declaración indagatoria a un grupo de personas “a objeto de que informen al tenor de la presente denuncia y requerimiento de investigación”.

Entre éstas están el Presidente Gabriel Boric; el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; la subsecretaria de la cartera Francisca Perales y la delegada presidencial Constanza Martínez.

También pidió citar a la encargada de la subsecretaría de Servicios Sociales María Talón; al secretario de la comisión de evaluación y a “todos los seremis miembros de la comisión de evaluación de la Región Metropolitana”.

La salida del Hidalgo fue comunicada por Desarrollo Social el 4 de diciembre en un comunicado, acusando una pérdida de confianza por “haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias (...) ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle”.

Hidalgo rechazó la acusación y aseguró que recibió presiones indebidas del gobierno para aprobar proyectos medioambientales en los que habría tenido un rol la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD). El partido respaldó este martes a Jackson, aliviando presión al ministro, el principal foco de sus críticas.

A continuación, las 4 presuntas irregularidades denunciadas por la ex seremi:

1. **El mall de Ñuñoa.** “Una de las primeras situaciones irregulares se produjo en una citación de fecha 21 de septiembre de 2022 en que la delegada Presidencial para la Región Metropolitana, Sra. Constanza Martínez, citó a todos los seremis de la Región Metropolitana a una reunión de Gabinete Regional en la comuna de Talagante”.

“Con posterioridad a la reunión, a los miembros de la Comisión de Evaluación RM se nos solicitó que nos quedáramos a una ‘reunión privada’ con ella, específicamente solo los seremis que votábamos”.

“(En ésta) nos dijo que debía aprobarse la declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto ‘Centro Comercial Mall Vivo Santiago Etapa II’, comuna Ñuñoa, cuyo titular es Inmobiliaria Puente Ltda., y que era importante que coordináramos la votación, dado que comunicacionalmente, debíamos vernos coordinados”

“Luego manifestó que alguno de nosotros podríamos rechazar el proyecto. Sin embargo, el proyecto debía ser aprobado, ya que este cumplía con la normativa vigente”

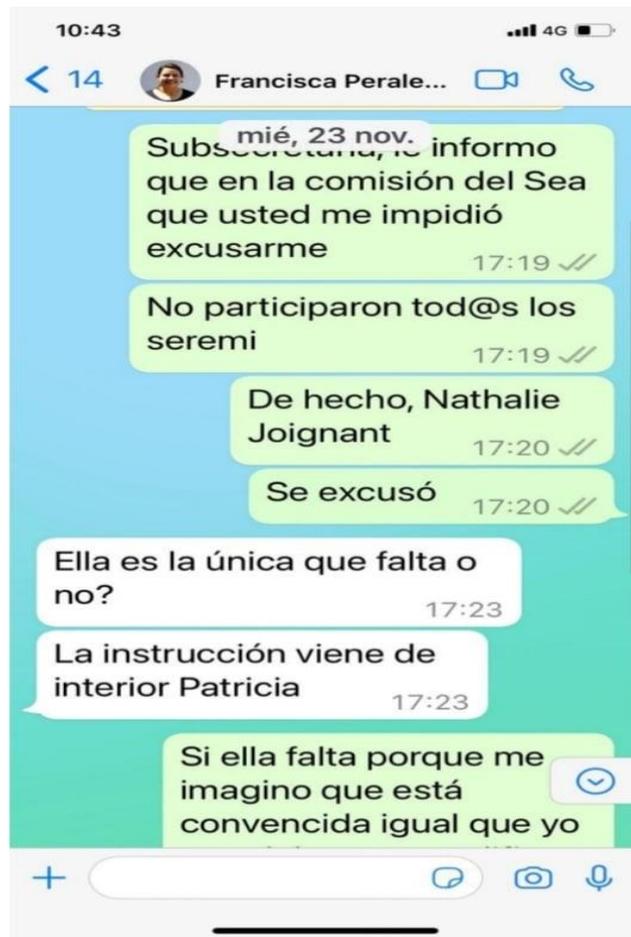
“Ante esta situación, que me pareció impropia y a lo menos curiosa, le manifesté que yo no estaba en condiciones de aprobar ese proyecto, y ella me recalcó que ‘eso era una decisión que ella tomaba’; frente a lo cual le manifesté que eso no era correcto”

“Yo le dije que iba a rechazar porque fui concejala de Ñuñoa, y que participé junto a las organizaciones del movimiento ciudadano ‘No al Mall Vivo’, y que había presentado reclamaciones ante el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental). A lo que ella me vuelve a decir que ella tomaría la decisión de quienes rechazarían y quienes aprobarían; a lo que le recalqué que votaría rechazo. Terminó diciendo que ella nos iba a informar sobre las decisiones tomadas y que nos llamaría su jefe de gabinete”.

“Cuando el jefe de gabinete me llamó, dijo que yo podía rechazar si así lo quería. Y, de esa forma, el día 23 de septiembre de 2022 se votó el proyecto ‘Centro Comercial Mall Vivo Santiago Etapa II’ y fue aprobado, pese a que yo lo rechacé”.

2. **Concesión Vespucio Oriente.** *“Con fecha 3 de octubre de 2022, se votaría en la Comisión de Evaluación RM el proyecto ‘Concesión Américo Vespucio Oriente II, Tramo Príncipe de Gales -Los Presidentes’, presentado por Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente II S.A. En esa oportunidad, me llamó la seremi de Medio Ambiente RM, y yo le digo que no se preocupe por mí y que me iba a excusar, pues tenía una actividad comprometida con anterioridad”.*

“A los minutos recibo llamado de la Subsecretaría del MIDESO (Ministerio de Desarrollo Social) Sra. Francisca Perales, ordenándome que yo debía asistir y no podía excusarme. De esa forma, tuve que ir, pero me inhabilité porque tengo una casa en el área de influencia del proyecto. Estas órdenes tan imperativas también me parecieron extrañas e ilegales”.



3. **Solución sanitaria en Quilicura.** “El día 23 de noviembre de 2022 en que se votaría el Proyecto de Solución Sanitaria para un sector de Quilicura, de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A. Previo a la votación recibí el llamado de la seremi de Medio Ambiente para hablarme sobre el proyecto, yo le digo que no se preocupe por mí, ya que, al tratarse de una sesión extraordinaria, yo ya tenía agendado otro compromiso, y, por lo tanto, me iba a excusar”.

“A los pocos minutos recibí un llamado de la Subsecretaría de MIDESO Francisca Perales, diciéndome que no puedo excusarme por ‘órdenes de la Ministra del Interior’. Yo le pregunté si ‘Carolina Tohá daba esas instrucciones’, ante lo que ella me dice que ‘son órdenes de Interior’. Atendida esa respuesta, yo le dije que, dada su instrucción, yo asistiría,

pero que votaría rechazo al proyecto, pero ella me dice que ‘la instrucción es asistir para aprobar el proyecto’. Y así se hizo”.

En el escrito denunció el “eventual otorgamiento de instrucciones a mi persona de parte de la ministra del Interior Carolina Tohá a través de otros funcionarios para aprobar el Proyecto de Solución Sanitaria para un sector de Quilicura, de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., lo que fue comunicado por WhatsApp de la subsecretaría de Desarrollo Social”.

“Asimismo, se deben investigar las relaciones administrativas y políticas entre la ministra del Interior Carolina Tohá y la empresa de servicios sanitarios San Isidro S.A., uno de cuyos propietarios y directores es el ex Tesorero del Partido Por la Democracia (PPD), Gustavo Silva Cabello”.

4. **La reunión con Jackson.** *“El día 30 de noviembre de 2022 fui citada a la oficina del Ministro de Desarrollo Social y Familia Giorgio Jackson, en el Palacio de La Moneda, quien me solicitó mi renuncia al cargo de seremi RM del MIDESO”.*

“En esa reunión, el ministro me dijo que en lo formal dicha solicitud era ‘por falta de confianza’, pero que en lo informal era una ‘mala evaluación’, por mis diferencias con la subsecretaria Francisca Perales y la Delegada Presidencial RM Constanza Martínez, porque no habría acatado su autoridad y órdenes al momento de aprobar o rechazar los proyectos indicados en la Comisión de Evaluación de la RM, donde frecuentemente ellas me daban instrucciones sobre cómo votar los proyectos sujetos a evaluación ambiental”.

“No se mencionó ningún otro hecho más. Por eso me sorprendió que, posteriormente, en un comunicado que difundió el MIDESO se señalan otros hechos que nunca me fueron explicitados en la reunión, y que, además, se me injurie sin ningún motivo, como incurrir en la omisión de denuncia de un delito”. ”.

En otra nota del mismo medio EX ANTE, relacionado con el perfil de Constanza Martínez, la Delegada Presidencial acusada por la ex SEREMI de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, se dice lo siguiente⁵⁷:

El caso, que abrió un flanco para el ministro Giorgio Jackson y también involucró a la delegada presidencial Metropolitana, Constanza Martínez.

Hidalgo, ha dicho el gobierno, fue removida por no denunciar a tiempo un presunto delito sexual en un centro capitalino. La ex Seremi que se debió a sus críticas a la gestión regional.

En una serie de WhatsApp dados a conocer por Hidalgo se describió la presunta coordinación de la Comisión de Evaluación Ambiental Metropolitana para rechazar el proyecto inmobiliario Egaña Comunidad Sustentable, que involucra una inversión de US\$ 300 millones. La iniciativa fue rechazada el 4 de abril por 5 votos en contra y 2 a favor y actualmente está a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema.

⁵⁷ EX ANTE (23/12/2022). “Perfil: Constanza Martínez, la delegada presidencial acusada por ex seremi de coordinar rechazos sin base a proyecto inmobiliario”. Disponible en: <https://www.ex-ante.cl/perfil-quien-es-constanza-martinez-la-delegada-presidencial-acusada-por-la-exseremi-de-coordinar-rechazos-sin-base-a-proyectos-de-inversion/>

La serie de WhatsApp consignó cómo a las 12:21 de ese día el jefe de gabinete de la delegada creó el grupo de WhatsApp “Comisión Ambiental”, donde fueron sumados los seremi.

A las 14:28 escribió que en un segundo link enviado se votaría “el proyecto Egaña Comunidad Sustentable” en la comisión ambiental. Cuatro minutos más tarde, pidió: “Por favor ingresen a la reunión para revisar los proyectos”.

A las 15:45:01, el seremi de Transportes, Roberto Santa Cruz, escribió: “Si Vivienda rechaza debiéramos plegarnos a ella en el proyecto Egaña”.

A las 15:45:28, la seremi de Vivienda Rocío Andrade respondió: “Estoy buscando argumentos para rechazar, pero de momento, lamentablemente no tengo”.

A las 15:46, Santa Cruz añadió que “mi equipo técnico me dice que el tema de la luz lo puede mencionar Vivienda”.

A las 15:46 Andrade respondió que “lo mencionaré, pero lamentablemente no tenemos normas al respecto como para decir que existe un incumplimiento”

A las 15:59 la seremi de Medio Ambiente, Sonia Reyes, escribió que “nosotros podemos observar lo del sombreamiento y refracción de la luz”.

A las 16:03, la delegada Martínez intervino y acotó: “Sí, por acá también rechazaremos, me dicen que yo tengo más margen para hablar”.

A las 16:08, Reyes escribió: “Aquí está la fundamentación revisada por el abogado del ministerio. Como Medio Ambiente vamos a rechazar”.

A las 16:12, Santa Cruz recalcó: “O sea, creo que el gobierno debe salir unido acá. Sería pésimo salir mostrando diferencias”.

A las 16:14, la delegada Martínez acotó nuevamente: “Gracias, entiendo que el último argumento lo doy yo, que es más de fondo”.

Este conjunto de antecedentes, por sí solos, revisten infracciones de la máxima gravedad y si bien esta acusación tiene como destinatario el Ministro Giorgio Jackson, no se descarta en lo absoluto que en el futuro próximo se hagan exigibles las responsabilidades de otras autoridades del Estado involucradas en estos hechos, ya sea por la vía administrativa o por la vía constitucional, como podría ser el caso de la Delegada Presidencial de la Región Metropolitana o de la propia Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toha, por su eventual involucramiento en el caso.

A mayor abundamiento, como gran parte de las acusaciones de este capítulo se basan en las declaraciones de la ex Seremi y la posición discordante que el propio Ministro Jackson expresó en su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Social y Familia hace algunas semanas en la Cámara de Diputados, es que se torna indispensable que las autoridades involucradas por acción u omisión, presten testimonio frente a la Comisión de Acusación Constitucional que se constituya para estos efectos.

b.3) LAS NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES INFRINGIDAS POR EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, KENNETH GIORGIO JACKSON DRAGO

i. Infracción a la norma constitucional que consagra el principio de probidad

La Real Academia Española (RAE) define la probidad como “honradez”, y a esta última la define como “rectitud de ánimo, integridad en el obrar”.

El fundamento normativo del principio de probidad se encuentra en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, el cual fue incorporado mediante la Ley N° 20.050, en el marco de la reforma constitucional del año 2005.

El artículo 8° de la Constitución Política dispone lo siguiente:

*“Artículo 8°.- **El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.***

Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública.

Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes

y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes” (subrayado y destacado nuestro).

ii. Infracción a normas legales referidas al principio de probidad

El artículo 3° de la **Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado** dispone lo siguiente:

“Artículo 3°.- La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.

La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas y participación ciudadana en la gestión pública, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad con la Constitución Política y las leyes” (destacado y subrayado nuestro).

Por su parte el artículo 13° de la Ley N°18.575 indica lo siguiente:

“Artículo 13.- Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan.

La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella” (destacado y subrayado nuestro).

Los artículos 52 y 53 de la Ley N°18.575, ubicados en el Título III titulado “De la probidad administrativa” señalan lo siguiente:

“Artículo 52.- Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa.

El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4° de este Título, en su caso.

*Artículo 53.- El interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. **Se expresa en el recto y***

correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley” (destacado y subrayado nuestro).

El artículo 62 señala las conductas que contravienen gravemente el principio de probidad.

“Artículo 62.- Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas:

1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña;

2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero;

3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros;

4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;

5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.

Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación.

El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares;

6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta;

7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga;

8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave

entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración,

9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado” (destacado y subrayado nuestro).

La Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado dispone en su artículo 3° lo siguiente:

“Artículo 3°. La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal.

La Administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impulsión de oficio del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, y garantizará la debida autonomía de los grupos intermedios de la sociedad para cumplir sus propios fines específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica, en conformidad con la Constitución Política y las leyes”.

Por otra parte, el artículo 11 bis de la Ley N° 19.653 señala lo siguiente:

***“Artículo 11 bis. Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan.*”**

La función pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella.

Son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial.

La publicidad a que se refiere el inciso anterior se extiende a los informes y antecedentes que las empresas privadas que presten servicios de utilidad pública y las empresas a que se refieren los incisos tercero y quinto del artículo 37 de la ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, proporcionen a las entidades estatales encargadas de su fiscalización, en la medida que sean de interés público, que su difusión no afecte el debido funcionamiento de la empresa y que el titular de dicha información no haga uso de su derecho a denegar el acceso a la misma, conforme a lo establecido en los incisos siguientes.

En caso de que la información referida en los incisos anteriores no se encuentre a disposición del público de modo permanente, el interesado tendrá derecho a requerirla por escrito al jefe del servicio respectivo.

Cuando el requerimiento se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos o intereses de terceros, el jefe superior del órgano requerido, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo.

Los terceros interesados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación, la cual se entenderá practicada al tercer día de despachada la correspondiente carta certificada. La oposición deberá presentarse por escrito y no requerirá expresión de causa.

Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución judicial en contrario, dictada conforme al procedimiento que establece el artículo siguiente. En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información, a menos que el jefe superior requerido estime fundadamente que la divulgación de la información involucrada afecta sensiblemente los derechos o intereses de los terceros titulares de la misma.

El jefe superior del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la petición, sea entregando la documentación solicitada o negándose a ello, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contado desde la formulación del requerimiento, o desde la expiración del plazo concedido al tercero afectado, en el caso previsto en el inciso séptimo.

El jefe superior del órgano requerido deberá proporcionar la documentación que se les solicite, salvo que concurra alguna de las causales que establece el inciso siguiente, que le autorizan a negarse. En este caso, su negativa a entregar la documentación deberá formularse por escrito y fundadamente, especificando las razones que en cada caso motiven su decisión.

Las únicas causales en cuya virtud se podrá denegar la entrega de los documentos o antecedentes requeridos son la reserva o secreto establecidos en disposiciones legales o reglamentarias; el que la publicidad impida o entorpezca el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido; la oposición deducida en tiempo y forma por los terceros a quienes se refiere o afecta la información contenida en los documentos requeridos; el que la divulgación o entrega de los documentos o antecedentes requeridos afecte sensiblemente los derechos o intereses de terceras personas, según calificación fundada efectuada por el jefe superior del órgano requerido, y el que la publicidad afecte la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Uno o más reglamentos establecerán los casos de secreto o reserva de la documentación y antecedentes que obren en poder de los órganos de la Administración del Estado”.

De especial importancia para este asunto resulta la **Ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses**. Al respecto, debemos citar las siguientes normas:

“Artículo 1°.- Esta ley regula el principio de probidad en el ejercicio de la función pública y la prevención y sanción de conflictos de intereses.

El principio de probidad en la función pública consiste en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular.

Existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias.

Artículo 2°.- Todo aquel que desempeñe funciones públicas, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo haga, deberá ejercerlas en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes, con estricto apego al principio de probidad.

La inobservancia del principio de probidad acarreará las responsabilidades y sanciones que determine la Constitución o las leyes, según corresponda (destacado y subrayado nuestro).

Sobre las presiones indebidas y las faltas a la probidad, es interesante destacar una columna de Ricardo Hernández al respecto:

“No existe en la legislación una definición exacta de “presión indebida”; sin embargo, en un primer análisis o ejercicio teórico podría calificarse de indebida aquella orden que implique transgredir la legislación vigente, los estándares de probidad y,

en general, cualquier decisión de autoridad que implique la prevalencia del interés particular por sobre el general.

Así, por ejemplo, acatar una orden que implique infringir plazos mínimos impuestos por la ley para agilizar una gestión, omitir etapas de un procedimiento, no acatar informes desfavorables de carácter técnicos y obligatorios, o favorecer un proyecto, no por su mérito, sino por cualquier circunstancia que ajena al interés público, son conductas contrarias a la probidad.

En este sentido, se pueden mencionar varias responsabilidades que se podrían generar si se comprueba la efectividad de alguno de estos hechos. Responsabilidades políticas, cuando hay una mala evaluación del mérito de una medida; responsabilidades administrativas, cuando se detecta una infracción de dicha naturaleza; responsabilidades civiles cuando el perjuicio afecta pecuniariamente a terceros; y penales cuando las autoridades han cometido algún hecho constitutivo de delito.

Como puede apreciarse, existe una delgada línea entre presionar legítimamente a las autoridades políticas para impulsar las políticas y proyectos que se estiman beneficiosos para el bien común y las presiones indebidas, las que si bien pueden atender a buenas intenciones o derechamente a favorecer intereses mezquinos, sin duda podrían generar las responsabilidades que correspondan llegando incluso a configurar casos de corrupción.

La administración del Estado es una tarea difícil que se debe responder a las altas expectativas ciudadanas en tiempos acotados, y lidiando con diversas opiniones tanto de oposición como de la propia coalición de Gobierno. Sin embargo, el mayor desafío de una autoridad es saber conducir el impulso de aplicar su ideario político dentro del marco de la legalidad, respetando el

Estado de Derecho, lo que implica sufrir las consecuencias por una mala gestión.

Por tanto, las autoridades involucradas, incluyendo el ministro Jackson y la ex seremi, deberán demostrar que su gestión se enmarcó dentro de lo debido, ante las diversas instancias investigativas, principalmente por lo grave y delicado de la materia y, por su parte, es necesario que cada institución aborde los mecanismos de control con responsabilidad, incluyendo el Congreso Nacional, al evaluar una posible acusación constitucional⁵⁸ (destacado y subrayado nuestro).

iii. Infracción a las normas legales que regulan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el estándar que se impone a la Comisión de Calificación al momento de aprobar o rechazar un proyecto o actividad

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo que permite a la autoridad determinar antes de la ejecución de un proyecto si cumple con la legislación ambiental vigente, y si se hace cargo de los potenciales impactos ambientales significativos⁵⁹.

Los aspectos más importantes del SEIA se encuentran regulados en la **Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente**. Dicha ley regula el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección

⁵⁸ HERNÁNDEZ, Ricardo (12/12/2022). “Presiones indebidas, ¿acusación constitucional?”. Disponible en: <https://www.cnnchile.com/>; ver en el siguiente link: https://www.cnnchile.com/opinion/columna-de-ricardo-hernandez-presiones-indebidas-acusacion-constitucional_20221212/.

⁵⁹ <https://www.sea.gob.cl/sea/que-es-seia>

del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.

En este contexto, resultan fundamentales los artículos 9° bis y 86° de la Ley N° 19.300, los cuales se refieren al papel de la Comisión que debe aprobar o rechazar un proyecto o actividad sometido al SEIA.

*“Artículo 9° bis.- La Comisión a la cual se refiere el artículo 86 o el Director Ejecutivo, en su caso, **deberán aprobar o rechazar un proyecto o actividad sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sólo en virtud del Informe Consolidado de Evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente.** En todo caso, dicho informe deberá contener, los pronunciamientos ambientales fundados de los organismos con competencia que participaron en la evaluación, la evaluación técnica de las observaciones planteadas por la comunidad y los interesados, cuando corresponda, así como la recomendación de aprobación o rechazo del proyecto.*

El incumplimiento a lo señalado en el inciso anterior se considerará vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental” (destacado nuestro).

*“Artículo 86°.- **Los proyectos serán calificados por una Comisión** presidida por el Intendente e integrada por los **Secretarios Regionales Ministeriales** del Medio Ambiente, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, y **de***

Planificación, y el Director Regional del Servicio, quien actuará como secretario.

Las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental conformarán un comité técnico integrado por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente, quien lo presidirá, y el Director Regional de Evaluación Ambiental, los directores regionales de los servicios públicos que tengan competencia en materia del medio ambiente, incluido el Gobernador Marítimo correspondiente, y el Consejo de Monumentos Nacionales. Este comité elaborará un acta de evaluación de cada proyecto la que será de libre acceso a los interesados” (destacado nuestro).

Como se desprende del artículo 9° bis, la legislación ambiental nacional obliga a los integrantes de la Comisión (los cuales se encuentran señalados en el artículo 86°, antes referido) a aprobar o rechazar los proyectos o actividades sometidos al SEIA en virtud del Informe Consolidado de Evaluación (ICE). Esto significa que quienes votan deben hacerlo libre e informadamente, a través de antecedentes técnicos y objetivos, y no mediante presiones políticas indebidas provenientes de terceras personas.

Las presiones políticas que recibió la ex SEREMI de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo Jeldes, por parte de autoridades del Gobierno, principalmente de la Subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales Flores, y de la Delegada Presidencial Regional Metropolitana de Santiago, Constanza Martiñez, para votar determinados proyectos sujetos a evaluación, **constituyen una vulneración a todo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y de las normas legales que lo regulan, y además, se trata de infracciones gravísimas cometidas por el propio Ministro de Desarrollo Social y Familia, al estar en pleno conocimiento de la existencia de estas presiones políticas,**

promoverlas y apoyarlas, según se desprende de la denuncia de la ex SEREMI.

Hay que recordar que recientemente, un grupo de parlamentarios presentó una denuncia en la Fiscalía por un **eventual tráfico de influencias** tras la renuncia de la ex SEREMI de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo. Junto a ello, los diputados **pidieron que se instruya al Servicio de Evaluación Ambiental a que entregue documentación sobre la participación de Hidalgo en la Comisión de Calificación Ambiental; que el Servicio de Impuestos Internos informe sobre una eventual vinculación entre las autoridades mencionadas con los titulares de los proyectos; y los correos de Martínez y Perales con Hidalgo⁶⁰.**

La denuncia por eventual tráfico de influencias presentada ante el Ministerio Público circunscribe los hechos de la siguiente manera:

“El día 3 de diciembre pasado se difundió, en un medio de prensa de circulación nacional, -nota que luego tuvo eco en otros distintos medios de alcance también nacional-, la situación denunciada por la Sra. Patricia Hidalgo Jeldes, quien desde abril y hasta el día 30 de noviembre se desempeñó como Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social (Seremi) de la Región Metropolitana.

En ejercicio de dicho cargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, correspondió a la entonces Secretaria Regional

⁶⁰ La Nación (5/12/2022). “RN acude a Fiscalía por eventual tráfico de influencias tras renuncia de ex seremi Hidalgo”. Disponible en: <https://www.lanacion.cl/>, ver la información completa en el siguiente link: <https://www.lanacion.cl/rn-acude-a-fiscalia-por-eventual-trafico-de-influencias-tras-renuncia-de-exseremi-hidalgo/>.

Ministerial integrar la Comisión que resuelve la calificación favorable o negativa de proyectos que han sido sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debido a las consecuencias ambientales que provocan.

Es importante, para los efectos de esta denuncia, tener en cuenta que el artículo 9 bis de la misma Ley N°19.300 consagra un estándar en virtud del cual los integrantes de la Comisión de Calificación, integrada entre otras personas por la ex Seremi de Desarrollo Social, deben aprobar o rechazar un proyecto, en los siguientes términos:

“La Comisión a la cual se refiere el artículo 86 o el Director Ejecutivo, en su caso, deberá aprobar o rechazar un proyecto o actividad sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental solo en virtud del Informe Consolidado de Evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente.”

Así las cosas, la Sra. Hidalgo Jeldes anunció públicamente en los medios de comunicación que la requirieron, como es que habría recibido presiones e influencias indebidas para votar favorablemente al menos tres proyectos de los que le tocó conocer: el nuevo centro comercial “Mall Vivo” que se emplazará en la comuna de Nunoa, el tramo segundo de la autopista urbana Américo Vespucio Oriente y el proyecto de tratamiento de aguas servidas de la comuna de Quilicura que levanta la empresa San Isidro, todos de la Región Metropolitana.

En efecto, estos proyectos fueron ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental con el siguiente detalle:

- *Centro Comercial como “Centro Comercial Mall Vivo Santiago Etapa II”.*
- *Tramo segundo de la autopista urbana Amerigo Vespucio Oriente como “Concesión Amerigo Vespucio Oriente II Tramo Príncipe de Gales – Los Presidentes”.*
- *Planta de tratamiento de aguas servidas en la comuna de Quilicura: ingresa como “Solución Sanitaria para un sector de Quilicura”.*

Ante estos proyectos y en su rol de integrante de la Comisión de Calificación Ambiental, la Sra. Hidalgo Jeldes denunció haber recibido presiones e influencias desde autoridades del Gobierno para votar favorablemente en todas las iniciativas.

Para el caso del proyecto de nuevo “Mall Vivo”, habría sido citada por la Delegada Presidencial Regional Metropolitana, Sra. Constanza Martiñez Gil, a una reunión en que se le exigió votar favorablemente, tanto a ella, como a las otras personas que ejercían el cargo de Secretario Regional Ministerial de las carteras que participan en la Comisión de Calificación Ambiental. Luego habría recibido mensajes y llamados de quien se desempeña como Jefe de Gabinete de la Delegada.

Luego, para el caso del proyecto del segundo tramo de la autopista urbana Amerigo Vespucio Oriente, habría sido contactada telefónicamente por la Subsecretaria de Servicios Sociales, Sra. Francisca Perales Flores, también para que dispusiera su voto favorable en la calificación.

Finalmente, en el caso del proyecto de la planta de tratamiento de aguas servidas a ubicarse en la comuna de Quilicura, habr a sido contactada nuevamente por la misma Subsecretaria quien le habr a exigido el voto favorable sen al ndole que dicha exigencia “proveni a” desde la Ministra del Interior y Seguridad P blica, Sra. Carolina Toha  Morales.

Pese a las presiones recibidas, la Sra. Hidalgo voto  desfavorablemente el proyecto del centro comercial “Mall Vivo”, luego se abstuvo de votar el proyecto de la autopista urbana Ame rico Vespucio Oriente, aduciendo tener un compromiso o conflicto de intere s ante dicho proyecto, y voto  favorablemente el proyecto de saneamiento de aguas servidas de Quilicura.

Como corolario del episodio, el di a 30 de noviembre el Sr. Giorgio Jackson Drago, actual Ministro de Desarrollo Social y Familia, comunico  el te rmino en el cargo que ejerci a a la Sra. Patricia Hidalgo Jeldes, aduciendo una mala evaluacio n en sus funciones y eventuales omisiones de deberes funcionarios que seri an objeto de un sumario administrativo al interior de la reparticio n.

En la entrevista concedida al medio Radio Biob o con fecha 3 de diciembre sen alo  haber recibido estas comunicaciones y contactos como medidas de presio n y que en funcio n de aquello termino  votando favorablemente al menos dos iniciativas ante las cuales su postura original era de rechazo”.

Como f cilmente se desprende de los hechos relatados en dicha denuncia, las presiones indebidas ejercidas sobre la ex SEREMI de Desarrollo Social y Familia **constituyen una vulneraci n de todo el Sistema de Evaluaci n**

de Impacto Ambiental (SEIA) y de las normas legales que lo regulan, siendo el Ministro directamente responsable en caso de haber tomado conocimiento de esta situación, e incluso aún más, habiendo apoyado estas prácticas, todo lo cual es afirmado por Patricia Hidalgo Jeldes en su denuncia que fue publicada por la Unidad de Investigación de Bio Bío Chile.

iv. Infracción a las normas constitucionales y legales que consagran el principio de probidad administrativa por haber acusado a una funcionaria de gobierno de delito como motivo de desvinculación del cargo, omitiendo como verdadera causa las instrucciones ilícitas e ilegales que se le dio a dicha funcionaria en el marco del SEIA.

Pero junto con el tema de las presiones, como reseñamos previamente, fue la actitud y las acciones de encubrimiento posteriores a la entrevista que dio la ex Seremi luego de su salida, las que merecen nuestra mayor atención y condena.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a instancias de la acción decidida del Ministro Giorgio Jackson y su equipo, desplegó una ofensiva comunicacional y pública para desacreditar la opinión de la ex Seremi y le adjudicó, ni más ni menos, la comisión de un delito funcionario, esto es, no haber presentado una denuncia en un caso de vulneración grave de una menor que habría ocurrido en dependencias de un hostel subordinado a su secretaría regional ministerial. Ese hecho fue desmentido tajantemente por la ex Seremi y en la Comisión de Desarrollo Social y Familia ante el Congreso, dio pruebas de las falsedades que se le imputan. Tanto así, que posteriormente se ha querellado en contra del Ministro y todos los que resulten responsables, dando cuenta de la veracidad y de la solidez de su versión.

En este caso, el Ministro Jackson efectuó una denuncia de irregularidad o falta al principio de probidad de la ex funcionaria, sin fundamento y respecto de lo cual, según afirma la propia ex Seremi, hay constatación de su falsedad, no quedando al observador imparcial, otra cosa que presumir el ánimo deliberado del Ministro Jackson de perjudicar a la denunciada. Si bien en el contexto de la gestión de un Ministerio y de las múltiples aristas que involucra un caso, uno podría llegar a cuestionarse sobre la magnitud y alcances de este tipo de controversias y si reúnen la entidad necesaria para ser calificados de una gravedad tal que lo hagan merecedor de una acusación constitucional con las implicancias y consecuencias de ella; este análisis, cuando involucra a la máxima autoridad del Ministerio, lleva este ejercicio a otra dimensión. Es por lo anterior que, se deduce de la propia naturaleza de la función ministerial y del estándar elevado -usando las propias palabras del Ministro Jackson- al cual están sujetas las máximas autoridades de nuestro país en su comportamiento y en el ejercicio de sus funciones.

¿Cómo no va a ser de extrema gravedad que, develada una operación política por la prensa, la reacción de un Ministro sea imputarle un delito a una ex funcionaria para acallarla y usar todos los medios que dispone de su cargo para construir esa imagen en la opinión pública? Es en este sentido que se constata el abuso de autoridad o poder en su máxima expresión y donde el Ministro da cuenta de la vulneración de los límites básicos de convivencia y ejercicio del cargo, que merece, no sólo el reproche social sino que particularmente el reproche político, porque fue hecho a vista y paciencia de la comunidad política nacional y con un espíritu de inobjetable condición, muy alejado de lo que se ve en la realidad.

Una segunda dimensión, tiene que ver con faltar a la verdad o entregar una versión parcializada de la realidad omitiendo entregar la totalidad de la información, lo que constituye una clara vulneración del artículo 52 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración

del Estado que señala que: “Las autoridades de la Administración del Estado, cualquiera que sea la denominación con que las designen la Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa”. Agrega seguidamente la norma que: “El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia acarrea las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4. de este Título, en su caso.” Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestro Código Civil las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras.

En consecuencia para determinar qué debe entenderse por un desempeño honesto y leal de la función o cargo debemos recurrir al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que en su segunda acepción entiende por leal: *(Del lat. legālis). 2. adj. Fidedigno, verídico y fiel, en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo.*

En consecuencia, para determinar si el desempeño del acusado ha sido leal, esto es, fidedigno, verídico y fiel, nos remitimos a lo que el mismo diccionario entiende por tales palabras:

-fiel. (Del lat. fidēlis). 1. adj. Que guarda fe, o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en .l. 2. adj. Exacto, conforme a la verdad. Fiel traslado. Memoria fiel.

-fidedigno, na. (Del lat. fides, fe, y dignus, digno). 1. adj. Digno de fe y crédito.

-verídico, ca. (Del lat. veridicus). 1. adj. Que dice verdad.

Claramente de las definiciones precedentemente anotadas, podemos concluir, inequívocamente, que el Ministro no ha observado un desempeño honesto y leal de su función o cargo, toda vez que sus declaraciones no han sido exactas ni conformes a la verdad, ni son dignas de fe y crédito como ha quedado demostrado. De esta forma al no haber observado un desempeño honesto y leal de su función o cargo, en esta segunda dimensión, ha infringido el principio de probidad administrativa establecido en nuestra legislación.

Al efecto, cabe tener presente que esta obligación de decir la verdad, en forma completa y directa, es un imperativo jurídico, cuya vulneración genera responsabilidad administrativa como bien lo ha reconocido la jurisprudencia de la Contraloría General de la República en el dictamen N° 003555, de 30 de enero de 2001, el cual señala: *“ello, porque se ha omitido imputar al afectado, además, una conducta irregular acreditada, cual es la de haber ingresado a la aludida persona ajena al servicio sin autorización, llevando a cabo esta acción bajo engaño al personal de guardia, lo que es de extrema gravedad y que debe necesariamente ser considerada al evaluar la sanción con la que debe castigarse al servidor indicado. La conducta del mismo, tanto la ya imputada como la que debe imputarse, contraviene gravemente el principio de probidad administrativa, por lo que deben formularse nuevamente cargos considerando todas las actuaciones irregulares, evaluándose la medida disciplinaria a aplicar de modo que tenga una directa relación con la aludida gravedad de las faltas en que incurriera”*.

En el mismo sentido, el dictamen N° 039014, de 09 de septiembre de 2003, de la referida entidad de control ha dicho que: *“Ahora bien, en el curso del sumario se restableció. que al funcionario le había cabido participación en los hechos investigados, al comprobarse que falta a la verdad en sus primeras*

declaraciones prestadas ante la Fiscalía instructora, pues tergiversó intencionalmente la realidad de lo sucedido, encubriendo de esta forma la actuación del otro inculpado en el proceso -el funcionario C.P.-, a sabiendas que éste último había sido el autor material de los daños causados al vehículo del superior jerárquico, al lanzar sobre el líquido de frenos. Siendo ello así, resulta inadmisibles las alegaciones del recurrente en el sentido de que su actuar no fue de tal gravedad que lo hiciera merecedor de una sanción expulsiva, ya que quedó acreditado que incurrió en una conducta manifiestamente negligente y reprochable en el cumplimiento de sus obligaciones, que vulnera el principio de probidad administrativa que debe observar todo funcionario público en su actuar, más aún tratándose de aquellos que pertenecen a una institución integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, cual es el caso de la Policía de Investigaciones de Chile.”.

Esta vulneración al principio de probidad administrativa, consistente en no ser veraz en las declaraciones que se efectúan, además es un elemento que tuvo especial relevancia en la acusación constitucional que removió al Ministro de la Excm. Corte Suprema señor Hernán Cereceda Bravo. Al efecto, cabe señalar que el capítulo de la acusación por el que éste fue finalmente removido decía relación con la demora en dictar sentencia. Sin embargo, en su defensa el señor Cereceda manifestó que el fallo de que se trataba había sido dictado en fechas distintas, faltando con ello a la verdad.

Esta última declaración fue extremadamente relevante al momento de votarse la referida acusación constitucional, tanto es así, que al momento de fundamentar su voto el Senador Hugo Ortiz señaló que: *“En consecuencia y sin que mi voto constituya una adhesión a los fundamentos esgrimidos por los acusadores, debo manifestar que, por un imperativo de conciencia, respecto del Ministro de la Excelentísima Corte Suprema don Hernán Cereceda Bravo, voto favorable abandono de sus deberes, pues estimo que no ha ejercido sus funciones en forma leal y cumplida.”.*

Asimismo, el ex Senador Sebastián Piñera, en la fundamentación de su voto expresó: *“Por otra parte, considero que la responsabilidad del Ministro Cereceda es de mayor gravedad que la de los demás Ministros, por dos razones fundamentales. Primero, ha dado confusas explicaciones con relación a un error de fechas, importante para el análisis de esta causa, y, segundo, le ha correspondido una responsabilidad especial en lo atinente al buen funcionamiento de la tercera Sala, en su calidad de Presidente de ésta.”*

Llama la atención, asimismo, que en vez de asumir su responsabilidad como máxima autoridad que es, el Ministro Jackson buscó culpar a terceros subalternos, de hechos y responsabilidades que son objetivamente de su cargo.

En virtud de todo lo expuesto en este capítulo acusatorio, el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Kenneth Giorgio Jackson Drago, es responsable de haber infringido gravemente la Constitución Política de la República y las leyes, particularmente el artículo 8° de la Carta Fundamental, los artículos 3°, 13°, 52°, 53° y 62° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; los artículos 3° y 11° bis de la Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado; los artículos 1° y 2° de la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses; y, los artículos 9° y 86 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

C) CAPÍTULO TERCERO: DEJAR SIN EJECUCIÓN LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES POR NO IMPLEMENTAR OPORTUNAMENTE LA LEY N° 21.302, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LA INFRACCIÓN AL DEBER DE SUPERVIGILANCIA QUE LE CORRESPONDE AL MINISTRO JACKSON EN TANTO AUTORIDAD ESTATAL RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

Recordemos para este efecto, que según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, “ejecutar” es la *“Realización de una acción, especialmente en cumplimiento de un proyecto, un encargo o una orden”*, en consecuencia, dejar sin ejecución la ley, es no actuar cuando la ley lo ordena, lo que en definitiva es no actuar cuando se configura la hipótesis que la ley prevé y que hace necesaria la acción en tiempo y forma. Así también lo ha reconocido la doctrina, en particular el comisionado Silva Bascuñán, quien indica que no existe ejecución de la ley *cuando no se actúa como se debe, como, asimismo, **cuando se deja de actuar estando obligado a hacerlo**; además, cuando no se precisa la forma o marco en que se habrá de actuar.* Adicionalmente, la no ejecución oportuna de la ley implica una grave perturbación al bien común, la vulneración grave de los derechos de niños y adolescentes en espera y que la propia Corte de Apelaciones de Santiago así ha reconocido, como veremos.

Así las cosas resulta una obligación de los Ministros de Estado, en lo referido a la ejecución de las leyes, implementar aquellas de acuerdo a los marcos presupuestarios vigentes por ley de presupuestos de cada año, y los informes presupuestarios que se encuentran contemplados en cada ley que se vaya aprobando año a año, gastos que se ejecutan respaldados por el Tesoro Público. Es menester redundar, que sin perjuicio de que el jefe del servicio es cada Subsecretario en el ámbito

de su especial competencia, el responsable constitucional por la correcta ejecución de los presupuestos y de las obligaciones y servicios que debe ejecutar cada Subsecretaría es el Ministro de cada Cartera de Estado. No existen dudas que los procesos de compras, que son habituales en los órganos de la Administración del Estado son parte de esa sana y correcta administración de los recursos públicos, la inmovilidad o la no ejecución de las leyes es un asunto que le queda vedado a quien ejerza su rol como Secretario de Estado ya se encuentra obligado en virtud de la Constitución y las leyes, de acuerdo a lo expresamente dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

c.1) ANTECEDENTES

i. El Servicio Mejor Niñez

El 1 de octubre del 2021 comenzó a funcionar el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, llamado *Mejor Niñez*. El artículo 2 inciso primero de la Ley N° 21.302 que lo crea señala que:

“El Servicio tendrá por objeto garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones”.

Y añade, en su inciso segundo, que dicha labor se cumplirá *“asegurando la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad”.*

Como es de público conocimiento, la existencia de este servicio se justifica para garantizar los derechos de los niños que han sido gravemente vulnerados, quitando esa responsabilidad al Servicio Nacional de Menores, que desde el 30 de noviembre de 2021 se enfoca en la reinserción de adolescentes que han vulnerado la ley y que han sido imputados o condenados en virtud de la Ley Penal Adolescente.

El artículo 1° inciso segundo de la citada Ley N° 21.302, que Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, señala:

*“El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, **garantizará el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y los colaboradores acreditados.** Al efecto, y especialmente, **deberá fiscalizar que la transferencia de los aportes financieros a estas entidades se realice una vez que se acredite el cumplimiento de los principios rectores del Servicio** y estándares técnicos y de calidad establecidos en esta ley, en la ley N° 20.032 y en el reglamento que al efecto dictará el Ministerio de Desarrollo Social y Familia conforme al artículo 3 ter de la ley N° 20.530, para entender que los servicios han sido correcta, oportuna y efectivamente prestados; que no existan reclamos no resueltos sobre la atención realizada a los niños, niñas y adolescentes; y que las mismas hayan dado cabal cumplimiento a la restitución del daño y los perjuicios ocasionados a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones de sus derechos fundamentales estando a su cuidado o con ocasión de las prestaciones realizadas” (destacado nuestro).*

c.2) UN PROCESO LICITATORIO FRUSTRADO

El 29 de julio de 2022 el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, a través de la Resolución Exenta N° 502 convocó al Segundo Concurso Público de proyectos para la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, modelos de intervención: 1.- Programas de protección especializada: a) Programas de protección especializada en adolescentes que presentan conductas abusivas de carácter sexual, b) Programas de protección especializada para niños, niñas y adolescentes con consumo problemático de alcohol y/u otras drogas-programa 24 horas; c) Programas de protección especializada en reinserción educativa-programa 24 horas, d) Programas de protección especializada en niños, niñas y/o adolescentes en situación de calle, e) Programas de protección especializada en maltrato y abuso sexual grave; 2.- Programas de prevención focalizada; 3.- Programas de protección ambulatoria para niños, niñas y adolescentes con discapacidad; 4.- Programas especializados en explotación sexual comercial infantil y adolescente; 5.- Programas de intervención integral especializada; 6.- Programas de intervención integral especializada- 24 horas; y para la línea de acción diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos y pericia, modelo Programa de diagnóstico ambulatorio.

Dicha licitación, según indica la Resolución Exenta N° 793, de 21 de octubre de 2022, se desarrolló con pleno respeto de las bases, cumpliendo con lo indicado en lo relativo a las fechas de presentación de propuestas (29 de agosto de 2022) y la declaración de admisibilidad e inadmisibilidad las propuestas que se presentaron a concurso público (09 de septiembre de 2022). En las bases de la licitación se contemplaban dos etapas: la Etapa N° 1, en que la Comisión Evaluadora⁶¹ al momento de iniciar la evaluación debía

⁶¹ La Comisión Evaluadora está integrada por el Director Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia o quien se encuentre

verificar que cada proyecto hubiese adjuntado la carta de compromiso firmada por el representante legal de la institución, que debía dar cuenta del Recurso Humano y Materiales con los que funcionará el proyecto. Aquellas propuestas que no adjunten dicha carta, no continuarán a la Etapa N° 2, de evaluación técnica.

Por su parte, el punto N° 8 de las Bases de la licitación indica que:

*“En caso de empate en los puntajes finales de evaluación en las propuestas, el/ **la presidente de la Comisión dirimirá respecto la propuesta a adjudicar**, considerando para efectos de su selección, aquella que haya obtenido el mayor puntaje en los siguientes criterios, en el orden de prelación que a continuación se indica:*

- 1. Criterio Diseño de la intervención, metodología y estrategia*
- 2. Criterio Matriz Lógica*
- 3. Criterio Gestión de Personas.*

El puntaje que se considerará para estos efectos será el que se establece en las Pautas de Evaluación de Proyectos, en el numeral 4, denominado "Puntaje final y resultado de la evaluación técnica". Estos indicadores, en el orden que se señalan, se considerarán como criterios de desempate de acuerdo con los modelos de intervención a licitar en el presente concurso público.

desempeñando el cargo, quien la presidirá, la jefatura o un profesional de la Unidad de Asistencia Técnica, Monitoreo y Evaluación y la jefatura o un profesional de la Unidad de Supervisión y Fiscalización, todos de la Dirección Regional respectiva.

Finalmente, si aun así persiste el empate, la adjudicación la decidirá el/la Director/a Nacional, requiriendo previo informe a la División de Servicios y Prestaciones que se pronuncie al respecto, a fin de fundar el respectivo acto administrativo” (destacado nuestro).

Hacemos énfasis en este apartado, toda vez que es relevante para las posteriores declaraciones del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Así las cosas, el 21 de octubre de 2022, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia adjudicó a través de la Resolución Exenta N° 793 a instituciones especializadas 206 programas destinados a las intervenciones ambulatorias de reparación, diagnóstico clínico especializado y seguimientos de casos y pericias en favor de niños y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos.

Las bases de la licitación establecen que las Unidades Jurídicas Regionales del Servicio **remitirán** a los adjudicatarios los convenios vía electrónica, quienes deberían enviarlos, por la misma vía, el día 22 de noviembre de 2022. Sin embargo, el día 30 de noviembre, el Servicio Nacional de Protección especializada a la Niñez y la Adolescencia emitió la Resolución Exenta N° 1015, que invalidó las 16 resoluciones exentas Nos. 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795 y 801, que adjudicaron estos procesos en todas las regiones del país. La razón de dichas invalidaciones, según indica la misma resolución en el considerando 5°, es se que se advirtió lo siguiente:

“existencia de errores en la etapa de evaluación de los proyectos presentados en el proceso concursal que pudieran contravenir lo

señalado en el artículo 9 del D.F.L.Nº1/19.653, de 2000, básicamente de los siguientes tipos:

A) Existirían casos en que se han aplicado criterios desiguales de desempate en aquellas situaciones en que ha debido realizarse desempates entre los proponentes mejor evaluados.

Lo señalado precedentemente habría ocurrido porque las bases administrativas establecieron tres criterios de desempate a nivel regional, correspondientes a Criterio Diseño de la intervención, metodología y estrategia, Criterio Matriz Lógica y Criterio gestión de Personas, no obstante, existieron casos en los que persistió la situación de empate”.

Adicionalmente, se consideró la existencia de errores en la aplicación de la pauta de evaluación, que pudo incidir en el resultado del proceso y adjudicaciones. Del mismo modo, eventualmente, habría ciertas inconsistencias en la aplicación de puntajes por algunas comisiones evaluadoras regionales.

En virtud de todo lo anterior, el Servicio decide suspender los efectos del concurso público e invalidar las resoluciones antes citadas. A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia dio explicaciones públicas respecto de estos hechos, el que reproducimos completamente acá:



El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia informa que, el segundo concurso nacional de diagnóstico y programas ambulatorios, publicado en julio del presente año y que comprende la licitación de 216 proyectos, dará inicio a un procedimiento de invalidación, decisión adoptada en virtud del compromiso con la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que forman parte de la red del Estado y el cumplimiento del principio de transparencia que rige los actos de la Administración del Estado.

Tras un profundo análisis y revisión de los antecedentes levantados internamente y entregados por los Organismos Colaboradores, la institución resolvió esta vía, la que permitirá garantizar y entregar certezas sobre la correcta evaluación de los proyectos.

Desde este miércoles 30 de noviembre comenzará una fase de notificación a cada Organismo Colaborador participante del concurso, otorgando un plazo de cinco días hábiles para que presenten por escrito sus alegaciones, cuanto consideren procedente en defensa de sus intereses.

Como Servicio es de máxima relevancia que garanticemos la continuidad de atención que reciben los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sujetos de protección. Es por eso que, a través de las Direcciones Regionales, se adoptarán todas las medidas administrativas necesarias que permitan asegurar la continuidad de las prestaciones establecidas. Como Servicio estamos comprometidos con garantizar la transparencia, libre competencia, igualdad de trato y legitimidad en estos procesos y concursos públicos.

En declaraciones posteriores, la Directora del Servicio, Gabriela Muñoz, señaló que el proceso de invalidación que inició, permitiría continuar la atención, puesto que el Servicio operaría con la figura de “resolución de urgencia”, que en el particular, implica financiar contra las atenciones que realicen aquellos organismos que estaban ejecutando, para continuar desde el 01 de diciembre, en el caso que algunos de estos organismos hubiese terminado el proyecto, se continuaría con aquellas entidades que se han adjudicado el proyecto.

Sin embargo, según se ha constatado recientemente, existían antecedentes que daban cuenta de una incapacidad estructural de parte del Servicio para

el funcionamiento de los Programas de Protección Especializada en sus diversas modalidades. Así se indica en carta enviada el 4 de julio de 2022 por parte de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Especializado de Protección a la Niñez y Adolescencia (ANFUSEPNA).

En dicha carta, se señala que: *"la cantidad importante de proyectos bajo esta modalidad por regiones, sin contar con dotación suficiente que dé abasto para una evaluación satisfactoria, puede ahondar en recursos de reposición futuros o falta de oferentes para las diversas modalidades, sin dejar de mencionar que no existe claridad de la cantidad de Organismos Colaboradores que se encuentren acreditados y que puedan postular dando cumplimiento a la normativa vigente (...) Entre ellos, constatamos que a la fecha no existe la dotación completa para un correcto funcionamiento en todas las unidades de los Servicios regionales que puedan asumir con total oportunidad un llamado licitatorio de esta envergadura, lo cual asciende aproximadamente 156 proyectos a nivel país en las modalidades de PAD, PDC, PDE, y las que por experiencia son las que tienen mayor cantidad de ofertas PIE, PPF y PRM [modalidades de los Programas de Protección Especializada]"*⁶². Son los propios funcionarios del Servicio los que advierten la existencia de problemas que hay para el funcionamiento de las modalidades indicadas, demostrando una evidente improvisación y falta de conocimiento por parte de las autoridades. Para mayor conocimiento, exponemos un extracto de la carta, en que se hace referencia a la falta de dotación para implementar los programas y llevar adelante el proceso licitatorio:

⁶² Carta enviada el 4 de julio de 2022 por ANFUSEPNA a la Dirección Nacional del Servicio Mejor Niñez. Disponible en: <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/las-cartas-y-correos-que-advirtieron-la-debacle-de-las-licitaciones-en/2022-12-27/154522.html>

ANFUSEPNA

Bajo esta consideración, creemos importante darle a conocer aspectos altamente deficitarios que actualmente exhibe el Servicio Mejor Niñez, que nos preocupa y que se reiteran desde su puesta en marcha sin contar con una oportuna remediación, en cuanto a bajada de información clara y oportuna, por ejemplo.

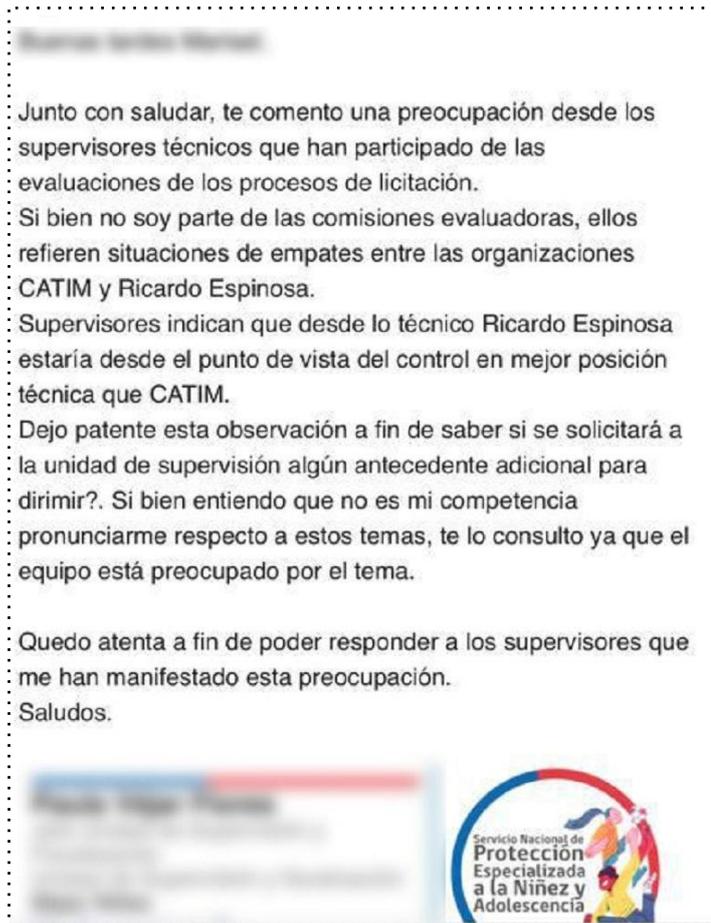
A saber, entendemos que existen aspectos de fondo que se representan en situaciones coyunturales. Y como directorio Nacional observamos carencias de fondo asociadas a los procesos licitatorios, entendiendo que los proyectos de cuidado alternativos a nivel país (Residencias y FAE) se encuentran ya proceso de postulaciones, y que están aportas los proyectos ambulatorios, sin dejar de mencionar, la cantidad importante de proyectos bajo esta modalidad por regiones, sin contar con dotación suficiente que den abasto para una evaluación satisfactorias, que puede ahondar en recursos de reposición futuras o falta de oferentes para las diversas modalidades sin dejar de mencionar, que no existe claridad de cantidad de Organismos Colaboradores que se encuentren acreditados y que puedan postular dando cumplimiento a la normativa vigente.

Entre ellos, constatamos que a la fecha no existe la dotación completa para un correcto funcionamiento en todas las unidades de los Servicios regionales, que puedan asumir con total oportunidad un llamado licitatorio de esta envergadura lo cual asciende aproximadamente 156 proyectos a nivel país en las modalidades de PAD, PDC, PDE, y las que por experiencia son las que tienen mayor cantidad de ofertas PIE, PPF y PRM.

Es relevante mencionar el desgaste actual de los equipos de trabajo, dada la extenuante y excesiva presión para el cumplimiento de los diversos requerimientos: cumplimiento de metas, supervisiones técnicas – financieras, diagnósticos, análisis de casos entre otros, y si a lo anterior le sumamos un llamado licitatorio de esta envergadura se corre el riesgo del no cumplimiento satisfactorio acorde a las características propias de un servicio especializado como al que estamos llamados a cumplir.

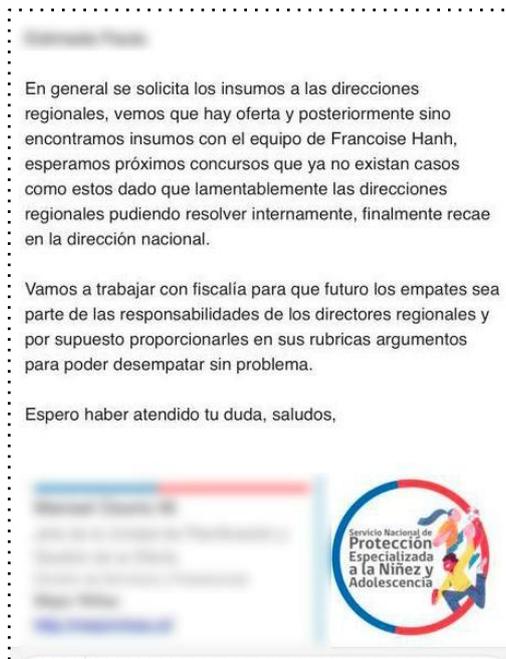
Es por lo anterior y con la finalidad de poner las alertas necesarias, es que solicitamos se reconsidere el llamado licitatorio en modelos ambulatorios, que este sea una vez terminado el

Y las advertencias no quedaron ahí. Al momento de decidir las adjudicaciones, se generaron problemas con los empates técnicos, particularmente en la región del Biobío, entre la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa –en ese momento, prestadora- y la Corporación CATIM, en que aquella –según un correo que ha trascendido públicamente- se encontraba en mejor posición para adjudicarse el proyecto. A continuación, reproducimos íntegramente el contenido del correo, con fecha 18 de octubre de 2022, tres días antes de la resolución exenta que adjudicaba los proyectos:



Como es posible constatar, el remitente del correo electrónico indica una “mejor posición técnica” de la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa frente a la Corporación CATIM, y sin embargo se requiere determinar si es que se solicitará algún antecedente adicional para definir quién se adjudicará el proyecto. El Servicio Mejor Niñez de Biobío advierte que hay problemas con el mecanismo de desempate.

En la respuesta por parte de la Dirección Nacional –días antes de la adjudicación, insistimos- queda manifiesto que ellos tenían conocimiento del problema del desempate -principal argumento para declarar la invalidación del procedimiento- y no hicieron nada:



Por otro lado, tal y como hemos indicado supra, las bases de la licitación en el punto N° 8 (pág.12) establecen el criterio para definir el empate: el presidente de la Comisión evaluadora conforme el puntaje obtenido por cada una de las propuestas según los criterios de Diseño de la intervención, metodología y estrategia; Matriz Lógica; y Gestión de Personas, en ese orden. Con todo, si persiste el empate, la adjudicación la decide el Director Nacional requiriendo informe de la División de Servicios y Prestaciones.

En todo este asunto, se debe tener a la vista lo que ha dispuesto la Contraloría General de la República. En el dictamen E235692, de 18 de julio de 2022, el ente contralor sistematiza la normativa aplicable al caso; las que regulan los procesos de licitación pública, las bases del concurso, ofertas, y los derechos y obligaciones tanto del licitante como del proveedor. Cita el artículo 4 inciso primero de la Ley N° 19.886, que prevé que podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento,

cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común⁶³.

Destaca luego que el artículo 9 del mencionado texto legal, señala que el órgano contratante declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases.

Así mismo, el artículo 10 inciso segundo de ese cuerpo legal, dispone que: *“Los procedimientos de licitación se realizarán con estricta sujeción, de los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que la regulen. Las bases serán siempre aprobadas previamente por la autoridad competente*

Sobre este punto, el Contralor pone de relieve que “(...) de las normas citadas, la estricta sujeción a las bases constituye un principio rector que rige tanto el desarrollo del proceso licitatorio como la ejecución del correspondiente contrato y dicho instrumento, en conjunto con la oferta del adjudicatario, integran el marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones de la Administración y del proveedor, a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los contratos que celebren (aplica dictamen N° 21.146, de 2019)”. Ahora bien, en virtud del principio de estricta sujeción a las bases, sólo es dable invalidar un acto cuando no se respeta objetivamente las bases de licitación, pero dar cuenta de un error metodológico del mismo afecta, sin ninguna duda, los criterios dispuesto por la comisión evaluadora en cada una de las licitaciones. Sin duda que (...) la jurisprudencia administrativa ha señalado que en presencia de un acto irregular, a la autoridad no sólo le asiste la facultad sino que se encuentra en el imperativo de iniciar un

⁶³ Revisado también el sitio

<https://www.diarioconstitucional.cl/2022/08/01/aun-cuando-se-haya-adjudicado-una-licitacion-publica-e-iniciado-la-prestacion-de-servicios-el-organo-encargado-esta-obligado-a-iniciar-el-procedimiento-de-invalidacion-si-se-percata-del-incumpliment/> el día 2 de enero de 2023.

procedimiento de invalidación (aplica dictamen N°21.146, de 2019)”, pero el mismo debe ser objetivo.

ChileCompra ha sido clara en señalar que respecto del Informe Final de Evaluación de la Comisión Evaluadora⁶⁴, es un acto dentro de un proceso reglado, y que éste es obligatorio, el cual deberá considerar los siguientes contenidos:

- 1.- Los criterios de evaluación, ponderaciones y subcriterios utilizados en la evaluación de ofertas, que deben ser los mismos que se establecieron en las bases de la licitación respectiva.
- 2.- Las ofertas que se hayan declarado inadmisibles, si las hubiese, con el detalle de los requisitos que se incumplieron.
- 3.- La propuesta de declarar desierta la licitación. Esto puede corresponder cuando no se presentaron ofertas o las que se presentaron no resultan convenientes a los intereses de la Entidad Licitante.
- 4.- La asignación de puntajes para cada criterio y las correspondientes fórmulas utilizadas para la obtención de cada resultado. Agregando cualquier antecedentes respecto de la metodología de aplicación de los criterio definidos.
- 5.- La propuesta de adjudicación o deserción, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final.

⁶⁴ “Conformación y funcionamiento de la Comisión Evaluadora. 2016”. Ver en el siguiente link: <https://www.chilecompra.cl/wp-content/uploads/2017/02/2-Comision-Evaluadora.pdf>.

Ahora bien, ahondar en dichos criterios y modificarlos, importa desestimar a todas las comisiones evaluadoras que participaron en dichas decisiones, lo que sin duda no sólo resulta anómalo, sino que importa una intervención inadecuada en un proceso de compra y trae aparejada la consecuencia irremediable de afectar el buen funcionamiento del servicio.

c.3) RESPONSABILIDAD SUPERIOR DEL SERVICIO

En ese orden de ideas, y resuelta la invalidación de las resoluciones que adjudicaban los proyectos, es imprescindible considerar que en el asunto en cuestión no se trata simplemente de un proceso meramente administrativo, con errores irrelevantes. Actualmente el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conforme a artículo 2 bis de la Ley que lo crea, debe: *“asegurar las líneas de acción y la disponibilidad de los programas diversificados y de calidad que **deberán satisfacer las diferentes necesidades de intervención de cada niño, niña y adolescente**, tales como el diagnóstico clínico especializado y seguimiento de su situación vital y condiciones de su entorno, el fortalecimiento familiar, la restitución del ejercicio de los derechos vulnerados y la reparación de las consecuencias provocadas por dichas vulneraciones, junto con la preparación para la vida independiente, según corresponda.”*. Del mismo modo, el artículo 4 inciso segundo refuerza la idea, al señalar que es ***deber y responsabilidad indelegable del Servicio adoptar y reforzar todas las medidas necesarias para el pleno respeto de sus derechos, la efectividad de los mismos y la prioridad de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en el acceso a las prestaciones de protección especializada y a los servicios sociales requeridos para la plena y oportuna restitución de los derechos que les son vulnerados.*** Se trata, en definitiva, de una responsabilidad superior que se agudiza cuando conocemos los casos de niños que han sido vulnerados.

En septiembre de 2022, la Defensoría de la Niñez presentó una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Mejor Niñez en favor de todos los niños y adolescentes en lista de espera para ingresar a programas ambulatorios de protección de sus derechos, acción que la Corte acogió y mandató a los recurridos dar cuenta de la cantidad de niños que se encuentran a la espera de ingresar a los programas ambulatorios de protección especializada.

En la argumentación de la Corte, en su considerando 7° se sostiene que *“la conducta de los recurridos ha vulnerado el derecho a la integridad física y psíquica de los recurrentes, pues la falta de provisión de las terapias e intervenciones derechamente priva a los niños, niñas y adolescentes tutelados de dichos aspectos, que ello no solo afecta e impide la reparación de sus ya vulnerados derechos, si no que ponen en riesgo a cada uno de ellos, en tanto que las vulneraciones de derechos de las que fueron víctimas se intensifiquen, tanto en los hechos como en los efectos que producen en cada uno de ellos, por lo que la omisión estatal acusada amenaza de forma permanente sus derechos a la integridad física y síquica; como asimismo, se han vulnerado derecho a la igualdad y no discriminación del artículo 19 N°2 Constitución Política de la República, por cuanto producto de la inactividad de las instituciones recurridas se puede identificar que los niños, niñas y adolescentes individualizados han sido discriminados de forma ilegal y arbitraria, al inhibirse de la posibilidad de acceder a los programas, peritajes, intervención y reparación de las vulneraciones de sus derechos”*.

En el informe que la Corte solicitó al Servicio, se informó que hay 25.875 casos de niños y adolescentes esperando atención (al 13 de octubre) de los cuales el 62,4% son programas ambulatorios, y un 31% corresponde a programas de diagnósticos. Dicha cifra ha aumentado, según se ha publicado en diversos medios de prensa: al 30 de noviembre se registraron

26.906 niños, niñas y adolescentes en lista de espera, es decir, 1.031 casos más que en octubre⁶⁵.

Si bien se ha informado que es un registro dinámico, pues día a día ingresan y egresan niños, la cifra inevitablemente aumenta⁶⁶. **La situación se agrava al considerar los graves errores cometidos por el Servicio y la incapacidad de actuar oportunamente.** Según indica el experto en la materia, Marcelo Sánchez, de la Fundación San Carlos de Maipo: “*La frustrada segunda licitación afecta de manera estructural la lista de espera por cuanto una parte significativa era para la ejecución de diagnósticos clínicos necesarios para la asignación de cupos ambulatorios. De ejecutarse un nuevo proceso licitatorio recién será posible contar con la nueva oferta terminando el primer semestre de 2023.*”⁶⁷.

c.4) INFRACCIÓN AL DEBER DE SUPERVIGILANCIA Y LA VULNERACIÓN DEL MANDATO LEGAL Y CONSTITUCIONAL QUE LE CORRESPONDE AL MINISTRO JACKSON EN TANTO AUTORIDAD ESTATAL RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Ahora bien, la Ley N° 21.302, en su artículo 1 indica que el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, coherente, a su vez, con lo que establece el artículo 28 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de de Bases

⁶⁵ Noticia. *Casi 27 mil niños vulnerados siguen sin diagnósticos: aumenta la lista de espera.* Disponible en el siguiente link: <https://www.t13.cl/noticia/ex-ante/nacional/casi-27-mil-ninos-vulnerados-siguen-diagnosticos-aumenta-lista-espera>

⁶⁶ *Ibidem.*

⁶⁷ *Casi 27 mil niños vulnerados siguen sin diagnósticos: aumenta la lista de espera.* Noticia publicada el 24 de diciembre de 2022. Disponible en: <https://www.ex-ante.cl/casi-27-mil-ninos-vulnerados-siguen-sin-diagnosticos-aumenta-la-lista-de-espera/>

Generales de la Administración del Estado respecto a los servicios públicos y su supervigilancia con el Presidente de la República a través del Ministerio respectivo. Más clara queda esta relación, aún, considerando que el cargo de Director Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia es nombrado por el Presidente de la República, luego de participar del proceso de Alta Dirección Pública.

La supervigilancia a la que hacen referencia tanto la Ley N° 21.302, que Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado requieren de un análisis que permita establecer de manera clara cuál es el grado de responsabilidad que compete a la máxima autoridad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, señor Kenneth Giorgio Jackson Drago.

El poder de supervigilancia es el que se ejerce sobre aquellas entidades distintas del fisco. En particular, el Servicio se trata de un servicio descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y la ley indica que estará sometido a la supervigilancia de la autoridad presidencial a través del Ministerio correspondiente. La doctrina ha dicho que el poder de supervigilancia es un poder jerárquico muy atenuado⁶⁸ y comprende, en primer lugar, aquello que se confiera previa y expresamente. En el artículo 1 de la Ley N° 21.302, se entrega al Ministerio de Desarrollo Social y Familia el deber de garantizar el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y los colaboradores específicos (1) El deber de fiscalizar que la transferencia de aportes financieros a las entidades se realice una vez que se acredite el cumplimiento de los principios rectores del Servicio y estándares técnicos y de calidad establecidos en esta ley y otras relacionadas; (2) **Que no existan reclamos no resueltos sobre la atención realizada a los niños**

⁶⁸ SOTO KLOSS, Eduardo (2022). Derecho Administrativo, Principios, fundamentos y organización. 2.5 El poder jerárquico (Santiago, Thomson Reuters, Tomo I), p. 576.

y adolescentes; (3) Que las atenciones hayan dado cabal cumplimiento a la restitución del daño y los perjuicios ocasionados a los niños y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones de sus derechos fundamentales estando a su cuidado o con ocasión de las prestaciones realizadas.

¿Qué fue lo que, finalmente, determinó la invalidación de las resoluciones de adjudicación y que dejará a más de 25 mil niños -considerando las cifras hasta octubre de 2022- sin acceso oportuno a los programas del Servicio?

¿De qué manera nuestra legislación prevé que estos niños y adolescentes, gravemente vulnerados en sus derechos, protagonistas inocentes de un entorno que no les otorgó garantías y seguridades necesarias, sean revictimizados y obligados a prolongar su sufrimiento? Sin duda alguna, lo anterior no se produciría con la aplicación oportuna de la ley y el despliegue de los medios materiales, humanos e institucionales dispuestos en ésta para ello. Sin embargo, precisamente en este caso, vemos que ello falló. En primer lugar, queda en evidencia este problema cuando no se atiende a la interpelación que hacen los funcionarios del Servicio respecto a que no cuenta con todos los medios materiales para ejecutar las licitaciones de los programas: ¿por qué, luego de 9 meses de puesta en vigencia la ley, no era posible contar con los recursos imprescindibles para una correcta y oportuna atención de miles de niños? ¿Qué motivó esta tardanza cuyas consecuencias la vuelven inexcusable? **¿No podía el Ministro de Desarrollo Social y Familia realizar una reasignación presupuestaria de su presupuesto vigente, sobre todo considerando que dejó de ejecutar a noviembre de 2022, 30.438.358.000 pesos?**

Una vez adjudicados los programas, el Servicio decide invalidarlos por una serie de reclamaciones presentadas por los concursantes de la licitación no adjudicatarios. Si ya se había representado una tardanza inexcusable del Servicio, también hay una evidente falta del Ministerio de Desarrollo Social

y Familia, al que por exigencia legal, tal y como hemos expuesto supra, le corresponde el deber de garantizar el cumplimiento de las normas que rigen la labor del Servicio y los colaboradores acreditados. Dicha obligación queda, además, inobjetablemente clara en el fallo que la Corte de Apelaciones pronunció con ocasión de la acción de protección presentada por la Defensoría de la Niñez frente a la falta evidente de atención y la extensa lista de espera, ello en virtud de que los Derechos del Niño no pueden ser objeto de restricción, aunque el órgano la considere legítima:

“QUINTO: Que el Estado tiene el deber de no discriminar a las personas en el ejercicio de sus derechos, ya sea que la acción u omisión provenga de cualquier órgano que deba actuar (sic).

Las recurridas en cuanto al límite del ejercicio de este derecho en relación a los niños, niñas y adolescentes, estos no pueden ser objeto de restricción aunque el órgano la considere legítima, tales como “la dinámica de la lista de espera”, en tanto que ellas no pueden ser admitidas en consideración a la situación de vulnerabilidad en que están sujetos los menores de edad afectados por la decisión y por consiguiente la necesidad de adoptar medidas inmediatas y especiales de garantía de sus derechos.⁶⁹

SEXTO: Que a su turno el artículo 3 párrafo 1 de la Observación General N.º 14 (2013) de la Naciones Unidas, sobre el derecho del niño, en lo atinente a su interés superior sea una consideración primordial, en el sentido que “6”: El Comité subraya que el interés superior del niño es un concepto triple: a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés

⁶⁹ Sentencia en causa rol N° 81.983-2022.

superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño o a un grupo de niños en concreto o genérico o a los niños en general. En efecto, el mencionado artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales. b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo. c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados parte deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos.”

Es decir, se trata de una exigencia que no admite matices. No es dable para la máxima autoridad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, señor Ministro Kenneth Giorgio Jackson Drago, excusarse de responsabilidad en la aplicación, por una parte, de la Ley N° 21.302 en la que tiene el deber de supervigilar, no sólo –como hemos indicado– la fiscalización de aportes financieros a las entidades, sino también la no existencia de reclamaciones no resueltas sobre la atención de niños y adolescentes y que las mismas hayan dado cabal cumplimiento a la restitución del daño y los perjuicios ocasionados a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones de sus derechos fundamentales estando a su cuidado o con ocasión de las prestaciones realizadas; y, aún más, lo que le compete en tanto autoridad del Estado y responsable de que en el marco de su acción se respeten los Derechos del Niño –ley vigente en Chile desde el año 1990–, conforme la cual su artículo 3 establece una clara responsabilidad a las autoridades del Estado:

Artículo 3

*1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, **las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.***

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

¿Cuáles han sido las medidas adoptadas por el Ministro Jackson luego del fallo de la Corte de Apelaciones, de fecha 21 de septiembre de 2022? Aparentemente, ninguna. Y ello es posible de constatar en el considerable aumento de las listas de espera, tal y como lo reconoció la propia Directora Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia. **Todo pese a que contaba con presupuesto vigente dentro de su Secretaría de Estado, desoyendo además los requerimientos de los propios funcionarios de su cartera que reclaman presupuesto adicional para una adecuada ejecución e implementación de la ley.** ¿Cuál sería el efecto evidente, por tanto, de las invalidaciones de las resoluciones adjudicatarias? No sólo dejar en la deriva a los miles de niños que a la fecha de la invalidación ya estaban en las listas de espera, sino en agudizar aún más la situación con la demora que implica iniciar un nuevo proceso, obviando completamente el mandato de la Ley N° 21.302 en relación al deber que le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es decir al Ministro Kenneth Giorgio Jackson Drago, y también el mandato que debe cumplir en tanto autoridad del Estado respecto de los Derechos del Niño y, particularmente, como superior de las entidades que deben velar por dichos derechos.

En virtud de todo lo anterior, creemos suficientemente acreditado que el Ministro Kenneth Giorgio Jackson Drago no ejecutó oportunamente la ley de modo que fuese evitable el lamentable desenlace de aumento de listas de

espera, según lo mandata –insistimos– el artículo 1 de la Ley N° 21.302 y como lo ha reconocido la Corte de Apelaciones de Santiago, con respecto al deber que le corresponde en relación a los Derechos del Niño, **teniendo a disposición recursos financieros suficientes para poder realizar las mejoras e implementaciones que se requerían, existiendo una clara conducta inexcusable de un Ministro de Estado por la falta de ejecución de varias normas de rango legal, que atentan además con el principio y las normas sobre probidad administrativa.**

D) CAPÍTULO CUARTO: FALTA DE EJECUCIÓN DE LA LEY N° 21.430, SOBRE GARANTÍAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR NO IMPLEMENTAR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE LAS OFICINAS LOCALES DE LA NIÑEZ, PESE A EXISTIR PLANES PILOTOS, AUTORIZACIONES PRESUPUESTARIAS, PRESUPUESTOS AUTORIZADOS POR LEY DE PRESUPUESTOS Y UN MARCO REGLAMENTARIO SUFICIENTE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS REFERIDAS OFICINAS LOCALES.

d.1) ANTECEDENTES

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3° bis de la Ley N° 21.430, el cual se refiere a las **funciones y atribuciones del Ministerio, pero en relación con la protección de los derechos de los niños**. *“El Ministerio velará por los derechos de los niños, para cuyo efecto tendrá las siguientes funciones y atribuciones...”*. Así las cosas y complementando la normativa anterior, la Ley N° 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y modifica varias otras normas legales, fue publicada el 5 de enero de 2021 y estableció varios cambios referidos al Servicio de Protección a la Niñez, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, al Sistema de Alta Dirección Pública y la elección de cargos para la nueva institucionalidad que se ha creado, la Comisión Coordinadora de Protección Nacional, el Servicio Nacional de Protección Especializada, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y normas del propio Ministerio del Desarrollo Social.

El proyecto de ley se fundamentó *“en que los niños y niñas son la base, el presente y el futuro de nuestro país, es por esto que debieran ser siempre prioritarios, tanto para sus familias, como para la sociedad y el Estado.*

Durante sus primeros años de vida, los niños y niñas desarrollan las habilidades que les permitirán en el futuro alcanzar su máximo potencial y ser un aporte para la sociedad y para el porvenir de nuestro país. El Estado de Chile tiene una deuda histórica con la niñez, hecho que ha sido constatado por informes, tragedias y denuncias que evidencian gravísimas y profundas vulneraciones a los derechos de los niños y niñas de nuestro país”⁷⁰.

Esta normativa considera una serie de obligaciones para la Administración del Estado que considera una implementación progresiva, en plazos no mayores de 5 años, habiendo ya pasado casi 2 años de implementación de la ley.

Las Oficinas Locales de la Niñez fueron consideradas como una institución muy importante dentro de la reforma realizada, ya que son la institución encargada, a nivel comunal, de la promoción de derechos, la prevención de situaciones de riesgo y vulneraciones, y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Son los encargados de la protección administrativa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, capaz de articular la defensa integral y universal de la niñez y adolescencia: “Somos la primera puntada de tejido, en la red intersectorial de protección para los niños, niñas y adolescentes”⁷¹.

Las Oficinas Locales de la Niñez atienden a niños, niñas y adolescentes hasta que cumplan 18 años de edad, la Ley señala que, en caso de duda sobre la edad, se presumirá que es menor de edad, siempre que vaya en beneficio del ejercicio de sus derechos⁷².

⁷⁰ Parte del Mensaje presidencial N° 090-366, de 5 de agosto de 2018.

⁷¹ Consultado en <https://oln.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/> , el 2 de enero de 2022

⁷² *Ibidem*.

La forma en que los casos son ingresados a las Oficinas Locales de la Niñez (OFL) es la siguiente⁷³:

a.- Demanda espontánea: La OLN será un espacio abierto a la demanda y acceso a los NNA y sus familias, o cualquier solicitante, para realizar denuncias respecto de situaciones que los afecten y que no les permitan alcanzar su potencial integral biopsicosocial o existan amenazas, riesgos, sospecha o vulneración de derechos ya sea en el contexto intrafamiliar, extrafamiliar o respecto de falta de acceso a redes que deberían ser garantes de derechos.

b.- Alertas administrativas: Respecto de las alertas, desde Chile Crece Contigo y en los últimos años también desde Oficinas Locales de la Niñez, se han definido flujos de alertas y acciones para diversas situaciones consideradas como “vulnerabilidades” entendidas como aquellas situaciones que pueden afectar el desarrollo de niños y niñas, las que se logran mitigar si se acompañan de acceso efectivo y oportuno a los servicios de apoyo pertinentes.

c.- Acción de tutela de derechos interpuesta en OLN o Denuncias: Corresponden a las acciones de denuncias definidas en el artículo 60 de la Ley de Garantías, cualquier persona en su nombre e interés podrá interponer una denuncia en las direcciones regionales del Servicio, Seremi del Ministerio de Desarrollo Social y Familia o directamente en la OLN. En este caso las denuncias podrán ser remitidas desde cualquier programa o iniciativas locales públicas y privadas en los canales definidos para ello, de forma presencial, o mediante la página web de las OLN o correos electrónicos.

⁷³ *Ibidem.*

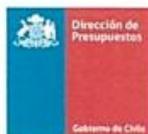
d.- Derivación de Tribunales de Familia: Cuando existan denuncias realizadas, su familia u otra persona realizadas directamente en los Tribunales de Familia, Policías y Ministerio Público, y éstos estimen que no existen antecedentes suficientes para iniciar o continuar una medida judicializada en lo proteccional (competencia de Tribunales de Familia), derivarán el caso a OLN a fin que se inicie el debido proceso de protección administrativa. Las derivaciones deben realizarse en marco colaborativo para recepción de información con estándares de calidad. Se debe explicar a las familias y los niños, niñas y adolescentes el flujo de derivación y alcances de la protección administrativa. Esto con particular relevancia, para aquellos casos que ya cuenten con medidas proteccionales en Tribunales de Familia y que se estime pertinente concluir dicho proceso judicial para iniciar uno administrativo.

Así también, la Familia, debe ser considerada fundamentalmente en el modelo OLN, pues es considerada por la Ley, como el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en especial de los NNA, que debe recibir protección y asistencia para poder asumir sus responsabilidades dentro de la sociedad.

La OLN estará además a cargo de la coordinación de la Red Comunal de Niñez para la articulación de los distintos servicios e instituciones a nivel local en materia de niñez y adolescencia. Por tanto cumplen un rol fundamental en el mecanismo de defensa de protección de niños, niñas y adolescentes.

Así las cosas, de acuerdo, en el contexto de tan importantes reformas el Informe Financiero (IF) N° 174 del año 2018 de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda consignó presupuesto para la implementación de las Oficinas Locales de la Niñez, los cuales tendrían una ejecución progresiva,

de acuerdo a lo consignado en dicho documento y en el articulado transitorio de la Ley N° 21.430, así lo consigna un extracto de dicho informe:



Ministerio de Hacienda
Dirección de Presupuestos
Reg./143 GG
Reg./588 OO
I.F. N°174 / 8.10.2018

Informe Financiero Complementario
Indicaciones al proyecto de ley de Sistema de Garantías de los Derechos de la
Niñez
Mensaje N° 138-366

Las indicaciones al proyecto de ley irrogan gastos por los siguientes conceptos:

- Gastos asociados al desarrollo informático para implementar el instrumento de focalización para detección oportuna de riesgos de vulneraciones de derechos de un niño
- Gastos asociados a la implementación y operación de las Oficinas Locales de la Niñez

Conforme a lo anterior, para el primer año de vigencia, las obligaciones de financiamiento que implican las presentes indicaciones, serán con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Desarrollo Social, **los cuales ascienden a un monto total de \$1.839.372 miles** (en pesos 2018). Para los años posteriores, el financiamiento se realizará con cargo a los recursos que la Ley de Presupuestos del Sector Público asigne para estos fines.

Si bien es cierto que la Ley N° 21.430 se publicó el 15 de marzo de 2022 hay al menos 9 decretos que se encuentran publicados en el marco de la Ley N° 21.302, que también se refieren a aspectos consagrados en la Ley N° 21.430, los que facilitan su implementación, dentro de los cuales, destacamos los siguientes, todos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia:

- **Decreto 10, del 28 de septiembre de 2022**, que regula la administración de cierre y administración provisional, de los

colaboradores acreditados del Servicio Nacional de protección de la infancia y adolescencia.

- **Decreto 9, del 28 de octubre de 2021**, que determina la estructura interna del Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y adolescencia.
- **Decreto 12, de 29 de noviembre de 2021**, sobre el procedimiento para la asignación de cupos en proyectos de programas de protección especializada del servicio nacional de protección especializada a la niñez y adolescencia.
- **Decreto 5, de 24 diciembre de 2021**, que fija estándares para la acreditación de colaboradores y para los programas de las líneas de acción del servicio nacional de protección especializada a la niñez y adolescencia
- **Decreto 14, de 27 de diciembre de 2021**, que regula los mecanismos y procedimientos de participación y de exigibilidad de derechos del servicio nacional de protección especializada a la niñez y adolescencia.
- **Decreto 20, de 7 de marzo de 2022**, sobre normas para la operación y adecuado funcionamiento de los registros del servicio nacional de protección especializada a la niñez y adolescencia y otras materias que indica

Que además de existir una obligación de rango legal respecto a la implementación de las OLN, de contar con un marco presupuestario para su implementación, que en caso de considerar insuficiente, la nueva autoridad tuvo la posibilidad de aumentar en la Ley de Presupuestos de la Nación, y de normativa reglamentaria que le permitía su ejecución, existían planes pilotos de las Oficinas Locales de la Niñez, los que sin duda facilitaban la implementación de la obligación legal.

Los primeros pilotos de las Oficinas Locales de la Niñez fueron evaluadas ya en el año 2019, información que es pública y que se encuentra disponible en el sitio del propio Ministerio de Hacienda, de acuerdo al siguiente detalle:

Informe de detalle de Programas Sociales
 Descargar Información Ex Ante - Proceso Formulación Presupuestaria 2021

Piloto Oficina Local de la Niñez

Versión: 5
 Ministerio de Desarrollo Social y Familia
 Subsecretaría de la Niñez
 Año de inicio: 2019
 Año de término: Permanente

1. ANTECEDENTES

Unidad responsable: Departamento Programas de Niñez y Familia
 Nombre del encargado: Mauricio Carreño
 Cargo: Jefe Departamento de Programas de Niñez y Familia
 Teléfono(s): 2 32395531
 E-mail: mcarreno@desarrollosocial.cl

Programas presupuestarios según Ley de Presupuestos:

Partida presupuestaria	Capítulo	Programa	Subtítulo	Ítem	Asignación
21	10	01	24	03	004

Podemos destacar que la población beneficiaria respecto de este programa son potencialmente 2.981.408 niños, niñas y adolescentes.

3.2) Población potencial

Descripción: La población potencial son los niños, niñas y adolescentes (NNA) que presentan riesgo de vulneración. Por NNA se entiende la población de 0 hasta que cumplen 18 años de edad. Según CENSO 2017, en Chile existen 4.259.155 NNA. Considerando que no existen estadísticas sobre NNA con riesgo de vulneración, se utiliza -a modo de referencia para la estimación de la población potencial- el maltrato o violencia, dada las repercusiones negativas en distintas dimensiones del desarrollo de los NNA. A nivel nacional el maltrato o violencia es la vulneración de derechos que presenta la mayor prevalencia, abarcando un grupo amplio de NNA, lo que se vincula además, con que la población potencial de la OLN son los NNA con riesgo de vulneración y no sólo los NNA con mayor riesgo. Tal como se menciona en el diagnóstico, según UNICEF (2012) el 71% de los NNA han sufrido maltrato (como expresión de la violencia) por parte de sus progenitores. Si se aplica este porcentaje, a la población total de NNA, se obtiene que la población potencial corresponde a 2.981.408 NNA.

Unidad de medida: Personas

Cuantifique la población potencial para el año 2021, en base a la unidad de medida señalada anteriormente: 2.981.408

Fuente de información utilizada para cuantificar la población dada: Censo de Población y Vivienda 2017 y 4° Estudio de maltrato infantil en Chile, Unicef, 2012.

El plan piloto dio cuenta de varios beneficios positivos, como los que a continuación se detallan:

Justifique la solicitud de reformulación del programa, detallando los resultados positivos y negativos que ha logrado el programa con su intervención, para lo cual debe considerar la presentación de resultados de indicadores de desempeño y/o de evaluaciones realizadas anteriormente. Mencione las fuentes de información y fecha de los datos entregados: El programa piloto lleva un año de implementación. Durante la ejecución 2019 se atendieron a 2.590 filias, lo que equivale al 42,9% de la cobertura esperada, en tanto se ejecutó el 92% del presupuesto aprobado. Durante el primer año de implementación no se logró abordar toda la cobertura esperada, lo que se explica por 3 razones:

Sólo en 2019 fueron atendidas 2.590 familias.

Además el plan piloto del año 2019 daba cuenta de la estructura administrativa y gastos que se requería para la implementación de cada una de las Oficinas Locales de la Niñez, tal y como se da cuenta en la misma evaluación:

Detalle gastos administrativos: Considera la contratación de 3 profesionales para la supervisión y asistencia técnica del programa a nivel local. Estos profesionales se desempeñan en la Subsecretaría a nivel nacional. Incluye remuneraciones de dichos profesionales y gastos en viáticos y transporte para visitas a terreno. BBySS de consumo, más 10% Jefatura central, más 50% Coordinadores, más habilitación de Oficinas. Cabe señalar que, la remuneración de los Coordinadores quedó dividida en dos partes. El 50% se asigna a gasto administrativo que tiene que ver con dirección y operación administrativa de las OLN. El otro 50%, que tiene que ver con gestión técnica en directo beneficio de los beneficiarios (gestión de acceso a oferta, etc.), se dividió en partes iguales entre los tres Componentes (correspondiendo 1/3 del 50% a cada componente). Por tanto, El Gasto Administrativo corresponde a: 1) Bienes y Servicios de Consumo del S24 (pasajes de bus, avión, radiotaxis, taxis, etc.) que permiten realizar las asistencias técnicas a los equipos, las supervisiones, el control de gestión y las capacitaciones; 2) Gastos de Personal de tres profesionales a honorarios del nivel central a cargo de realizar las asistencias técnicas, supervisiones, control de gestión y capacitaciones a los equipos (esto incluye remuneraciones, viáticos y aguinaldos); 3) 10% de la remuneración bruta anual de la Jefatura a cargo de la implementación de las OLN (correspondiente a la hora hombre promedio destinado a la supervisión de este proyecto); 4) el 50% de las remuneraciones de los Coordinadores de las OLN, correspondientes a implementación, contratación, compras, etc.; 5) Arriendo de oficinas; 6) Gastos para costear jornada final de devolución de aprendizajes destinada a los NNA, familias y actores comunales que fueron intervenidos en el programa piloto. Considera gastos ya existentes para las 12 comunas atendidas el 2020, más el gasto asociado a la incorporación de dos nuevas comunas en 2021.

Total Gastos: 1933175

6.2) Gastos de Inversión

Gasto Total del Programa (sumatoria del gasto por componente, gasto administrativo y gasto de inversión) (M\$): 1.933.175

Es por ello, que la implementación, **estando vigente la ley debía corresponder a una ejecución de acuerdo el presupuesto para las Oficinas Locales de la Niñez**, en orden a lo relevante que son de acuerdo a los mismos informes generados por el propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Banco Mundial, quienes dieron cuenta de aquello en el documento titulado “Evaluación de la implementación del piloto Oficinas Locales de la Niñez - OLN INFORME FINAL Práctica Global de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial (P170622 - Chile)”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se ha sembrado dudas respecto a la ejecución de dichas OLN, y la plataforma web que las contenía se encuentra caída desde hace varios días, tal y como consta en la siguiente imagen:



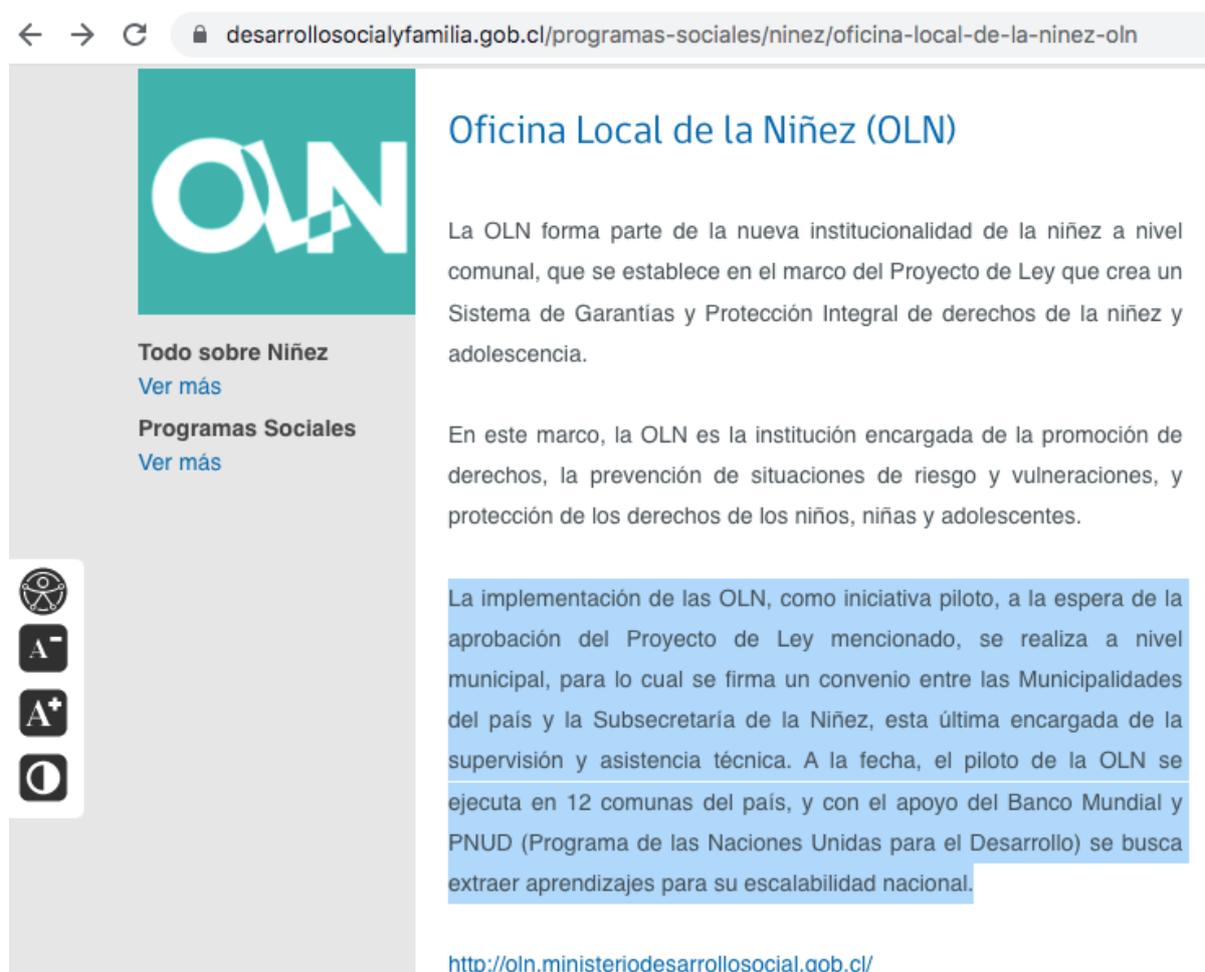
Así las cosas, la Ley de Presupuestos del año 2022 consideró recursos suficientes para la ejecución de las OLN. Ahora bien, para la Ley de Presupuestos del año 2023, no se consideró una ejecución diferenciada o “marcada presupuestariamente” para las OLN de acuerdo al presupuesto de la Subsecretaría de la Niñez que se encuentra vigente y disponible en https://www.dipres.gob.cl/597/articles-299344_doc_pdf.pdf.

Por el contrario, la falta de preocupación en el programa se ha traducido en la no ejecución en casi 2 años de publicación de la ley 21.302, el presupuesto referido a las OLN, es más, en los últimos meses se han cancelado o suspendido procesos que corresponde ejecutar adecuadamente según la ley, **lo que sin duda importa una responsabilidad política por la falta de ejecución de las leyes 21.302, 21.430 y los dineros consignados en el Presupuesto de la Nación, años 2021 y 2022, siendo el Ministro el responsable político de que aquello suceda, pese a existir una obligación legal, marco presupuestario, pilotos probados y con costos determinados fehacientemente a través de instrumentos de la Dirección de Presupuestos como consta en la evaluación Ex Ante del Proceso**

Formulación Presupuestaria 2021 que en el caso particular dan cuenta del programa.

d.2.) IMPLEMENTACIÓN INSUFICIENTE

De acuerdo a la información publicada por el propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia sólo se encuentran funcionando Oficinas Locales de la Niñez en 12 comunas del país, en una modalidad de plan piloto.



← → ↻ desarrollosocialyfamilia.gob.cl/programas-sociales/ninez/oficina-local-de-la-ninez-oln



Oficina Local de la Niñez (OLN)

La OLN forma parte de la nueva institucionalidad de la niñez a nivel comunal, que se establece en el marco del Proyecto de Ley que crea un Sistema de Garantías y Protección Integral de derechos de la niñez y adolescencia.

En este marco, la OLN es la institución encargada de la promoción de derechos, la prevención de situaciones de riesgo y vulneraciones, y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La implementación de las OLN, como iniciativa piloto, a la espera de la aprobación del Proyecto de Ley mencionado, se realiza a nivel municipal, para lo cual se firma un convenio entre las Municipalidades del país y la Subsecretaría de la Niñez, esta última encargada de la supervisión y asistencia técnica. A la fecha, el piloto de la OLN se ejecuta en 12 comunas del país, y con el apoyo del Banco Mundial y PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) se busca extraer aprendizajes para su escalabilidad nacional.

<http://oln.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/>

Todo sobre Niñez
[Ver más](#)

Programas Sociales
[Ver más](#)

🔍
A-
A+
🌙

74

⁷⁴ Consultado en: <https://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/programas-sociales/ninez/oficina-local-de-la-ninez-oln>, el 2 de enero de 2023

Cabe recordar que el Acuerdo Nacional por la Infancia, que derivó, entre otras cosas, en la creación del Servicio de Mejor Niñez, marcando una diferencia con el Sename, especialmente en su misión, funciones, dependencias y presupuesto. La nueva institución comenzó a operar el 1 de octubre del 2021, con la responsabilidad de la protección especializada a la niñez y adolescencia, **a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la cual no se encuentra debidamente ejecutada e implementada.**

Su misión, es restituir derechos y reparar el daño de los niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados y vulnerados en sus derechos, quitándole esta responsabilidad al Sename. Junto a lo anterior, también regula y controla la adopción en Chile. **De esta forma, el Servicio Nacional de Menores, que continúa dependiendo del Ministerio de Justicia, está a cargo de todo lo relacionado con justicia y reinserción juvenil.** Es decir, de ejecutar las medidas cautelares y sanciones ordenadas por los tribunales de acuerdo a la Ley Penal Adolescente, que se aplica desde los 14 a los 17 años⁷⁵.

Que así las cosas, en noticias publicadas en redes sociales ya se daba cuenta de la implementación de los planes pilotos para estas 12 comunas el año 2019:

⁷⁵ Nota de prensa publicada el 4 de octubre de 2022 en <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/04/cual-es-la-diferencia-entre-sename-y-el-servicio-de-mejor-ninez.shtml>.



c.3) RESPONSABILIDAD SUPERIOR DEL SERVICIO

En ese orden de ideas, y resuelto con claridad que se han dejado de ejecutar las Leyes N°s. 21.302 y 21.430, es imprescindible considerar que en el asunto en cuestión no se trata simplemente de un proceso meramente administrativo, con errores u omisiones irrelevantes. Reiteramos, que cabe recordar que el Acuerdo Nacional por la Infancia, que derivó, entre otras cosas, en la creación del Servicio de Mejor Niñez, marcando una diferencia con el Sename, especialmente en su misión, funciones, dependencias y presupuesto. La nueva institución comenzó a operar el 1 de octubre del 2021, con la responsabilidad de la protección especializada a la niñez y adolescencia, **a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y la estructura de la nueva institucionalidad no se encuentra debidamente ejecutada e implementada.** La misión, es restituir derechos y reparar el daño de los niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados y

vulnerados en sus derechos, quitándole esta responsabilidad al Sename. Junto a lo anterior, también regula y controla la adopción en Chile. **De esta forma, el Servicio Nacional de Menores, que continúa dependiendo del Ministerio de Justicia, está a cargo de todo lo relacionado con justicia y reinserción juvenil.** Es decir, de ejecutar las medidas cautelares y sanciones ordenadas por los tribunales de acuerdo a la Ley Penal Adolescente, que se aplica desde los 14 a los 17 años⁷⁶. Las Oficinas Locales de la Niñez requieren de una implementación pronta y oportuna y que de acuerdo a la propia información del Ministerio de Desarrollo Social aquello no se ha encontrado sucediendo.

POR TANTO,

Y en razón de los antecedentes de hecho y de derecho que se han expuesto en esta presentación, y de conformidad con el artículo 52 N° 2, letra b) de la Constitución Política de la República de Chile, los diputados que suscriben este libelo acusatorio solicitamos a la Honorable Cámara de Diputados que declare que ha lugar a la acusación constitucional formulada en contra del Ministro de Desarrollo Social y Familia, señor Kenneth Giorgio Jackson Drago, cédula nacional de identidad 16.574.017-3, por infringir la Constitución Política de la República de Chile y las leyes, para que luego el Senado la acoja, declare su culpabilidad, quede destituido de su cargo e impedido de desempeñar cualquier función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 N° 1 de la Carta Fundamental.

⁷⁶ Nota de prensa publicada el 4 de octubre de 2022 en <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/10/04/cual-es-la-diferencia-entre-sename-y-el-servicio-de-mejor-ninez.shtml>

PRIMER OTROSI: Si se tiene por acompañados los siguientes documentos que fundamentan la presente acusación constitucional:

1. Bases Administrativas del Servicio Mejor Niñez, que constan en la resolución exenta N° 502 de 29 de julio de 2022.
2. Resolución Exenta N° 502, de 29 de julio de 2022, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
3. Resolución Exenta N° 793, de 21 de octubre de 2022, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
4. Resolución Exenta N° 1015, de 30 de noviembre de 2022, del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
5. Copia simple de Informe Financiero N° 174 de la Dirección de Presupuesto de fecha 8 de octubre de 2018.
6. Copia simple del Informe de Programas Sociales, evaluación ex ante en el marco de evaluación presupuestaria 2021 para el “Piloto Oficina Local de la Niñez”, iniciado el 2019.
7. Copia simple de noticia: <https://www.ex-ante.cl/por-que-boric-salio-a-contradecir-a-jackson-y-dividio-aguas-entre-el-apruebo-y-el-programa-de-gobierno/>
8. Copia simple de noticia: <https://www.ex-ante.cl/nuestra-escala-de-valores-es-distinta-el-error-y-las-disculpas-de-jackson-que-llegan-en-su-peor-momento/>
9. Copia simple de noticia: <https://www.ex-ante.cl/conadi-presenta-una-baja-ejecucion-del-fondo-de-tierras-y-aguas-indigena-solo-se-usado-el-35-del-presupuesto-anual/>
10. Copia simple de noticia: <https://ellibero.cl/actualidad/conadi-compro-tierras-a-dos-comunidades-que-hicieron-usurpaciones-en-la-araucania/>
11. Copia simple de noticia: <https://www.conadi.gob.cl/noticias/comunidad-mapuche-realiza->

[primera-ceremonia-en-terreno-post-pandemia-para-recibir-tierras-de-conadi](#)

12. Copia simple de noticia: [https://www.conadi.gob.cl/noticias/comunidad-mapuche-jose-huenchual-2-de-lautaro-restituyo-347-hectareas-de-tierras-amparada-en-titulo-](#)
13. Copia simple de noticia: [https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/ministro-jackson-viajo-a-la-araucania-para-reimpulsar-el-plan-buen-vivir/2022-09-23/162758.html](#)
14. Copia simple de noticia: [https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/por-que-uriarte-coordinara-el-plan-para-contener-crisis-en-la-araucania-y-en-que-pie-quedan-toha-y-jackson/4DAYBNKKKZD2RJKWE6HSQSMAUA/](#)
15. Copia simple de noticia: [https://www.ex-ante.cl/perfil-20-cosas-que-hay-que-saber-sobre-la-exseremi-que-complico-a-la-moneda-al-denunciar-presuntas-presiones-para-aprobar-proyectos/](#)
16. Copia simple de noticia: [https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/entrevistas/2022/12/03/ex-seremi-acusa-a-gobierno-que-la-obligaban-a-favorecer-proyectos-que-ella-cuestionaba-tecnicamente.shtml](#)
17. Copia simple de noticia: [https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/12/04/senador-espinoza-ps-reitera-defensa-de-exseremi-es-una-falsedad-absoluta-de-jackson.htm](#)
18. Copia simple de noticia: [https://www.ex-ante.cl/cuales-son-las-presuntas-irregularidades-denunciadas-por-la-ex-seremi-de-desarrollo-social-a-contraloria-y-por-que-pidio-citar-a-boric-y-jackson/](#)

19. Copia simple de noticia: <https://www.ex-ante.cl/perfil-quien-es-constanza-martinez-la-delegada-presidencial-acusada-por-la-exseremi-de-coordinar-rechazos-sin-base-a-proyectos-de-inversion/>
20. Copia simple de noticia: <https://www.lanacion.cl/rn-acude-a-fiscalia-por-eventual-trafico-de-influencias-tras-renuncia-de-exseremi-hidalgo/>.
21. Copia simple de noticia: <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/las-cartas-y-correos-que-advirtieron-la-debacle-de-las-licitaciones-en/2022-12-27/154522.html>
22. Copia simple de noticia: <https://www.t13.cl/noticia/ex-ante/nacional/casi-27-mil-ninos-vulnerados-siguen- diagnosticos-aumenta-lista-espera>
23. Copia simple de noticia: <https://www.defensorianinez.cl/defensoria-de-la-ninez-envia-al-congreso-analisis-del-proyecto-de-presupuesto-fiscal-2023-en-relacion-a-la-ninez-y-adolescencia/>

POR TANTO, Si rvase H. Ca mara, tenerlo presente.

SEGUNDO OTROSI: Solicitamos a la H. Ca mara de Diputados que se realicen las diligencias probatorias que se indican, sin perjuicio de aquellas que por su naturaleza o circunstancia tengan que ser incorporadas durante la revisi3n de esta acusaci3n constitucional en la Comisi3n Ad-hoc:

- Se cite ante la Comisi3n encargada del estudio preliminar de esta acusaci3n, a fin de que emita su opini3n sobre el contenido de esta acusaci3n, a las siguientes personas:

- Patricia Carolina Hidalgo Jeldes, ex SEREMI de Desarrollo Social y Familia de la Regi3n Metropolitana.

- Marcelo Castillo, abogado de Patricia Carolina Hidalgo, patrocinante de querrela de tráfico de influencias y requerimiento a Contraloría por hechos referidos en el segundo capítulo acusatorio de esta acusación constitucional.
- Francisca Perales Flores, Subsecretaria de Servicios Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- Constanza Martínez Gil, Delegada Presidencial Regional Metropolitana de Santiago.
- Carlina Tohá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública.
- Javiera Martínez Fariña, Directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
- Jeannette Vega Morales, Ex Ministra de Desarrollo Social y Familia.

POR TANTO, Siérvase H. Cámara, tenerlo presente, y citar a las personas individualizadas.

TERCER OTROSI: Solicitamos desde ya a la Honorable Cámara de Diputados se oficie, considerando los plazos constitucionales, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia para que remitan las Resoluciones Exentas Nos. 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795 y 801, todas del año 2022.

POR TANTO, Siérvase H. Cámara, acceder a lo solicitado.

CUARTO OTROSI: Solicitarnos a la Honorable Ca mara, tener presente que los firmantes somos todos diputados en ejercicio, habilitados para formular una acusaci n constitucional.

POR TANTO, Si rvase H. Ca mara, tenerlo presente.